La Revolucion Boliviana



2003-2006

La Revolución Boliviana
2003-2006



Coordinación **Luis Oviedo**

Impresión y distribución **Numa Rivas**

Corrección **Ernesto Thuta y Mario 'Jotta' Dejesús**

Colaboración **Matías Villar**

Impreso en **Imp. Balbi, Buenos Aires, Argentina**

Primera edición **Septiembre de 2006**

Indice

Introducción



Presentamos al lector una selección de trabajos sobre la revolución boliviana publicados en *Prensa Obrera* (en su edición impresa), en *El Obrero Internacional* y en el sitio web del Partido Obrero, entre la insurrección de octubre de 2003 y la actualidad. Estos trabajos exponen, con la vivacidad del análisis realizado al calor de los propios acontecimientos, las posiciones del Partido Obrero en el proceso revolucionario boliviano.

La selección comienza con la insurrección de septiembre/octubre de 2003. El levantamiento que llevaría a la caída del presidente Sánchez de Lozada, fue la culminación de una larga serie de rebeliones, levantamientos y puebladas que se iniciaron con la "guerra del agua" de Cochabamba en 2000; su antecedente inmediato fue la rebelión de enero/febrero de 2003, contra el impuestazo de Sánchez de Lozada.

En el curso de estas movilizaciones, salvajemente reprimidas, rápidamente se destacaron dos reivindicaciones que unificaron a la población explotada: la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y la nacionalización de los hidrocarburos. Bajo los gobiernos de Banzer y, luego, de Sánchez de Lozada, Bolivia había privatizado los hidrocarburos, entregando a los pulpos internacionales –en particular a la española Repsol y a la brasileña Petrobras (en cuyo capital es decisiva la participación de fondos de pensión internacionales)– la propiedad de los yacimientos y el subsuelo.

En la fortaleza y combatividad del levantamiento de octubre estaba presente la memoria histórica de los explotados de Bolivia. Después del saqueo de la plata por los colonizadores españoles, del saqueo del estaño por los "barones" de la "rosca", del saqueo del petróleo por los privatizadores "neoliberales", la explotación del gas era la última oportunidad histórica para que Bolivia pudiera tener una existencia nacional independiente. La entrega del gas condenaba a Bolivia a su desaparición como nación y a sus explotados a una miseria sin horizontes. El levantamiento fue profundamente nacional porque expresó la rebelión de la nación oprimida contra el imperialismo y sus lacayos internos.

El levantamiento de octubre de 2003, como sus antecedentes desde la "guerra del agua", se integraba al conjunto de levantamientos populares en toda América Latina: el Argentinazo, los levantamientos de Ecuador, las grandes puebladas peruanas contra Fujimori, y la resistencia de los explotados venezolanos al golpe de Estado de los "escuálidos" contra Chávez. Expresaba, en el escenario del Altiplano, un fenómeno de alcance continental: el hundimiento de los gobiernos llamados "neoliberales" como consecuencia de las bancarrotas y de las crisis políticas, y de las rebeliones populares provocadas por el crecimiento de la miseria generalizada.

Las implicaciones internacionales del levantamiento de octubre fueron amplias. El hundimiento de Sánchez de

Lozada, junto con el pantano de la ocupación norteamericana de Irak y la detención del petrolero ruso Khordakovsky por el gobierno de Putin, ponían en evidencia el completo fracaso del planteo imperialista –impulsado por la Exxon y la camarilla de Bush-Cheney– para imponer una privatización mundial del subsuelo y sus recursos energéticos. El fracaso de esta política, un golpe fundamental para la camarilla que gobierna Estados Unidos, obligó al imperialismo a recurrir a una política "alternativa", consistente en aceptar la asociación de los grandes pulpos petroleros internacionales con las empresas estatales de los países atrasados.

En Bolivia, la represión, que se cobró decenas de muertos, fue incapaz de frenar un levantamiento que se encaminaba a acabar con el régimen político proimperialista y hambreador, y que planteaba la cuestión de un poder propio de los explotados. El movimiento fue creciendo con cada represión y con cada nueva víctima, a pesar de la ausencia del MAS de Evo Morales, que en las tres primeras semanas de la lucha boicoteó los bloqueos y las movilizaciones. En estas condiciones, el imperialismo y los explotadores locales debieron recurrir a los centroizquierdistas y nacionalistas del continente (los Lula y los Kirchner) y a los democratizantes bolivianos (en primer lugar al MAS de Evo Morales, pero también a la dirección de la COB y a la dirección campesina de Felipe Quispe) para encontrar una "salida política". Fue así que los enviados de Lula y Kirchner negociaron con Evo Morales, la COB, Quispe, el Ejército, la Embajada norteamericana y la Iglesia la renuncia de Sánchez de Lozada y su reemplazo por su vicepresidente, el también "neoliberal" Carlos Mesa. Fue lo que se llamó la "salida institucional", que no sólo dejaba en pie el aparato del Estado y sus instituciones (el Parlamento que había votado las privatizaciones y la Justicia que las había defendido) sino incluso al propio personal político "neoliberal". El principal articulador de esta salida, del lado boliviano, fue Evo Morales, quien, como ya dijimos, durante las tres primeras semanas, boicoteó la movilización (y sólo se sumó a ella para comandar el traspaso del gobierno a Mesa).

El Partido Obrero repudió la "salida institucional", que había disuelto una insurrección popular sin que ninguna de las reivindicaciones de las masas fuera resuelta, y que, por esta vía, garantizó la vigencia de las privatizaciones y del régimen político que las habían parido. Esta caracterización constituía una divergencia fundamental con la izquierda, tanto en Bolivia como internacionalmente, que caracterizaba el ascenso de Mesa como "un triunfo popular" y hasta con el "fin del neoliberalismo". Encubrían de esta manera no sólo el papel contrarrevolucionario jugado por las direcciones de Evo Morales, la COB de Jaime Solares y Felipe Quispe durante los sucesos de octubre, sino también el apoyo que estas mismas direcciones brindaron a Mesa durante sus primeros meses de gobierno. Algunos de los trabajos que presentamos en esta selección se refieren a esa polémica.

La nueva etapa política abierta por el levantamiento de la insurrección fue de una enorme convulsión; el centro de la crisis política lo constituía la cuestión de la propiedad de los hidrocarburos. A mediados de 2004 se organizó un plebiscito sobre una nueva "Ley de Hidrocarburos", cuyos términos fueron establecidos de acuerdo al programa de Evo Morales, que había pasado a co-gobernar con Mesa. La ley planteaba la asociación de los pulpos petroleros con una "YPFB refundada" en la explotación de los recursos energéticos.

La negativa de Mesa a promulgar esta ley, aprobada en el plebiscito, provocó una nueva crisis política que llevó a su caída a mediados de 2005. En esta crisis, Evo Morales mostró, nuevamente, su capacidad política (contrarrevolucionaria). Encabezó una movilización popular a Sucre para impedir que el presidente del Senado, que reclamaba una represión generalizada que pusiera fin al "ciclo de octubre", asumiera la presidencia de la república. Al mismo tiempo, fue capaz de disolver esta movilización e impedir que se convirtiera en una insurrección, luego de que los golpistas agazapados en el Congreso recularan y se acordara el llamado a elecciones generales. Evo Morales, nuevamente con los enviados de Kirchner y Lula, fue el articulador de una nueva "salida institucional", que esta vez traspasó el gobierno al presidente de la Corte Suprema.

Fracasado el referendo y el compromiso para la convocatoria de una Constituyente que resolviera la cuestión de la propiedad de los hidrocarburos, la crisis había llevado a la convocatoria de elecciones y a un nuevo gobierno que debería resolver la cuestión, mediante la convocatoria a una Constituyente.

Las elecciones tuvieron lugar en diciembre de 2005. Se enfrentaron dos grandes bloques: el nacionalista-indigenista, encabezado por Evo Morales; y el oligárquico y proimperialista, encabezado por "Tuto" Quiroga. La izquierda –que apoyó la "sucesión institucional" de Sánchez de Lozada, o sea que apoyó la "salida Mesa"– se refugió en un ultraizquierdismo verbal que prometía encabezar una insurrección cada mañana, para no presentar una alternativa propia en las elecciones. Esta abstención era el resultado de una tendencia sistemática al ultimatismo político, o sea, de una errónea caracterización de cómo las masas estaban asimilando el proceso político en su conjunto.

Las elecciones se realizaban en una situación excepcional; no estaban determinadas por un calendario electoral sino por la condensación del conjunto de las contradicciones del proceso político iniciado en 2003. Eran la consecuencia del intento de los explotadores de "desviar" la tendencia insurreccional del pueblo y, al mismo tiempo, de su incapacidad para derrotar a las masas mediante las instituciones y partidos tradicionales. En ese sentido, las elecciones eran la manifestación de un empate político entre los explotadores y las masas; pero eran, también, el intento de encontrar una vía de salida a ese empate.

El planteo nacionalista de Evo Morales era, por cierto, extremadamente limitado. Se circunscribía a exigir un nuevo reparto de la renta petrolera, con la perspectiva de resolver por esta vía la debilidad histórica y estructural del Estado boliviano. Para ese fin, proponía la elevación de impuestos y regalías a las petroleras y la formación de empresas mixtas entre los pulpos y la YPFB, en los términos de la ley que Mesa se había negado a promulgar. Ofrece-

mos a nuestros lectores la crítica de las limitaciones de este programa y el anticipo de su inviabilidad que formuló entonces el PO.

En un cuadro donde las elecciones eran, antes que nada, una manifestación del enfrentamiento entre las masas y la oligarquía, enmascarada y condicionada por la dirección política contrarrevolucionaria del MAS, el Partido Obrero llamó a votar por Evo Morales y el MAS, ofreciendo una orientación estratégica socialista (dictadura del proletariado) a las masas que seguían electoralmente al MAS. Con el llamado a votar por Evo Morales y el MAS (es decir, a derrotar al candidato de la oligarquía y el imperialismo) con un programa revolucionario, quedaba planteado un curso de acción frente a la seguidilla creciente de choques entre las masas y el imperialismo que las contradicciones del MAS no podían sino exacerbar. El llamado funcionaba como una preparación política para los enfrentamientos inevitables en un futuro inmediato.

Después de una victoria aplastante, Evo Morales asumió la presidencia en enero de 2006. Sus planteos de nacionalización chocaron de inmediato con las resistencias de Petrobras y Repsol, y de los gobiernos de Lula y Kirchner, que actuaban como sus representantes políticos y del imperialismo.

En marzo, mediante un pacto con la oligarquía de Santa Cruz, Evo Morales convocó a una Asamblea Constituyente. El pacto de Morales con la oligarquía se expresaba en las reglas de funcionamiento de la Constituyente (que establecía la necesidad de una mayoría de dos tercios para la aprobación de las reformas) y en el régimen electoral (que aseguraba que ninguno de los partidos pudiera, por sí mismo, obtener una mayoría decisiva). Como parte de estos acuerdos fueron convocados referendos autonómicos en los nueve departamentos. La oligarquía levantaba la reivindicación autonómica para dotarse de los instrumentos políticos necesarios para boicotear la política de nacionalización de los hidrocarburos (en los departamentos que domina se encuentran los principales yacimientos) y, sobre todo, para liquidar las reivindicaciones de los campesinos sin tierra de sus departamentos (los más ricos desde el punto de vista agrícola). El PO denunció el carácter pactado de la Constituyente y el carácter reaccionario de los referendos autonómicos y llamó a luchar por una representación revolucionaria en la Asamblea y por el voto por el "no" en los referendos.

La irresolución de los choques con las petroleras llevó a Evo Morales al decreto de nacionalización de los hidrocarburos del 1° de mayo. El decreto establecía un plazo para la asociación de las empresas petroleras con YPFB; para constituir una parte de las nuevas sociedades, el Estado confiscó las acciones que los fondos de jubilación ya tenían en las empresas petroleras. Sin embargo, el débil Estado boliviano carecía de los fondos y del poder de arbitraje necesarios para imponer esta salida a los pulpos petroleros.

Las elecciones constituyentes significaron una derrota política para Evo Morales; aunque obtuvo la mayoría, quedó muy lejos de los dos tercios necesarios para imponer su programa de nacionalizaciones en la Constituyente. La cuestión de las autonomías dio lugar a una contradicción explosiva: la reivindicación de la autonomía fue derrotada en el plano nacional, pero se impuso en los cuatro departamentos dominados por las oligarquías. La necesidad de llegar a un pacto con las oligarquías, necesario para el desarrollo de la Constituyente, ponía en cuestión la autonomía de Morales frente a las masas y, por lo tanto, su capacidad para contenerlas efectivamente. Lejos de resolverlas, los resultados de la Constituyente potenciaron todas las contradicciones irresueltas. Ante este cuadro explosivo, el Partido Obrero planteó el pronóstico de que la crisis de la Constituyente llevaría a su disolución, ya fuera por la acción del propio gobierno o, incluso, por la acción de las masas. En vísperas de la Constituyente Evo Morales renegó del voto por el sí en el referendo autonómico, aunque no hizo lo mismo el vicepresidente.

Cuando la Constituyente se reunió, en septiembre, el propio gobierno había hecho pública la crisis en que había entrado su planteo nacionalizador, como consecuencia de la resistencia de las petroleras y de la falta de recursos políticos y financieros del propio Estado para imponer su programa a las petroleras. La crisis de la nacionalización obligó a Evo Morales a desconocer los acuerdos establecidos para la convocatoria de la Constituyente. Las oligarquías regionales se rebelaron y se declararon en huelga contra el gobierno; las petroleras se respaldaron detrás de las oligarquías. El anuncio de que YPFB pasaría a controlar el proceso comercial y de exportación de Petrobras llevó a una nueva crisis internacional en la que Lula llegó a amenazar con la ruptura de relaciones.

Hugo Chávez –que había firmado con Bolivia y Cuba el llamado "acuerdo comercial de los pueblos"– se abstuvo de intervenir en esta crisis, pese a que la poderosa estatal venezolana PDVSA tiene los recursos financieros, técnicos y humanos para respaldar a la "YPFB refundada". Los proyectos de Petrosur y del Alba desaparecieron cuando más necesarios eran. Las razones de esta abstención hay que buscarlas en las relaciones anudadas por PDVSA con Repsol y Petrobras, y por Chávez con Lula, Kirchner y Rodríguez Zapatero para la explotación del crudo del Orinoco. El silencio de Chávez, frente a las presiones de Lula y Kirchner contra Morales, muestra que la publicitada "integración (capitalista) latinoamericana" se apoya en la derrota de la revolución boliviana.

Evo Morales retrocedió, lo que llevó a la renuncia de Andrés Soliz Rada, ministro de Hidrocarburos y arquitecto del programa de nacionalizaciones.

La cuestión petrolera y la cuestión constitucional (autonomías) potenciaron el conjunto de la crisis. El hundimiento de las nacionalizaciones sería el fin del gobierno de Evo Morales. Pero como el imperialismo no tiene un recambio, está obligado a "salvar" –a su manera, con sus métodos, bajo sus condiciones, es decir, en su propio beneficio– al gobierno de Morales y las propias nacionalizaciones. Desgraciadamente, ningún partido de la izquierda está en condiciones de explotar la crisis política como consecuencia de su política de abstención y neutralidad en los acontecimientos políticos que se desarrollaron en Bolivia. La izquierda asiste a los acontecimientos como comentarista política.

El excepcional desarrollo político boliviano de los últimos tres años –con insurrecciones populares, maniobras parlamentarias, intentos de golpes y contragolpes, cambios de gobierno, planteos de nacionalización burguesa seguidos del fracaso de esas nacionalizaciones– constituye una escuela política fundamental para la vanguardia obrera. En el árido escenario del Altiplano, todas las clases y partidos han puesto a la luz la consistencia de sus programas.

El fracaso de la tentativa nacionalista –es decir, la comprobación práctica de la inviabilidad del desarrollo nacional independiente mediante la asociación con el imperialismo y los pulpos nacionales– ha puesto de relieve sus limitaciones insalvables y su incapacidad para dar una solución a los problemas históricos de la nación –la propiedad de los hidrocarburos, la tierra para los campesinos, la independencia nacional. La resolución de estos problemas históricos plantea la necesidad de una completa reorganización social y política, que sólo puede ser completada por la clase obrera, en alianza con los campesinos pobres.

El debate de esta experiencia, a través de los materiales con los que el Partido Obrero ha ido fijando su política frente a la revolución boliviana, es lo que ofrecemos a nuestros lectores.

Los editores

Cronología 2000-2006

2000

Enero

Protestas y bloqueos en Cochabamba contra las altas tarifas del servicio de agua. El Comité Cívico llama a un paro cívico.
Levantamiento de campesinos en Potosí y Oruro con un saldo de 33 muertos y seis heridos. Cocaleros marchan a La Paz.

Febrero, 4 y 5

La Coordinadora del Agua pide la revisión del contrato con Aguas del Tunari. La Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones de Regantes (Fedecor) se suma a las protestas y exige la anulación de la Ley 2029 de Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario.
Se firma el "Convenio por Cochabamba", que congela las tarifas del agua y promete revisar el contrato con Aguas del Tunari.

Abril, 8

"Guerra del Agua". El gobierno dicta el estado de sitio en el país; enfrentamientos con la población.
Se anuncia el alejamiento del país de Aguas del Tunari y la revisión de la Ley 2029.

Septiembre

Bloqueos de ruta masivos con la participación de los cocaleros del Chapare y de los Yungas de Evo Morales, los campesinos, la COB y el CSUTCB de Felipe Quispe.
Tomas de campos petroleros (Santa Cruz, Tarija y Sucre).

Octubre, 8

Desbloqueo y repliegue militar en todo el país con excepción del Chapare. El gobierno firma acuerdos con los diversos actores.
Saldo: 15 muertos, 265 heridos y 20 torturados.

2001

Marzo

Movilizaciones de jubilados por el aumento del haber mínimo. Mineros ocupan la mina de Huanuni y establecen una cogestión del sindicato y el Estado.

Abril

Movilización campesina por la falta de solución a los conflictos. La marcha se extiende hasta alcanzar la ciudad de La Paz.

Junio, 7

Doce mil mineros, dinamita en mano, ocupan la capital exigiendo la salida de las mineras imperialistas, financiamiento para las cooperativas mineras y otras reivindicaciones.

Agosto, 6

Renuncia a la presidencia el general Hugo Banzer, asume Jorge "Tuto" Quiroga.

Septiembre

Bloqueos campesinos exigiendo la autodeterminación, tierras, la condonación de las deudas de los pequeños deudores, el cese de la represión y la desmilitarización del Altiplano.

Noviembre

Nuevas movilizaciones de jubilados.

2002

Marzo

Masivas movilizaciones en Cochabamba contra las empresas transnacionales.

Abril

Más de 10.000 personas *cacerolean* en contra del gobierno en la ciudad de La Paz.

Mayo

Organizaciones campesinas e indígenas protestan contra la reforma de la Constitución y el paquete agrario en la ciudad de Santa Cruz.

Junio, 30

Elecciones nacionales. El MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) obtiene el 22%. El MAS, con el 20%, coloca a Evo Morales como diputado nacional. El MIP de Quispe obtiene el 5%.

Agosto, 6

Asume la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada.

Diciembre

Dirigentes sociales, entre ellos, Evo Morales, presentan al gobierno un listado con 15 demandas a cumplir.

2003

Enero

Bloqueos campesinos en la ruta Cochabamba-Santa Cruz y movilizaciones contra el gobierno, que impulsa un impuestazo al salario (12,5%).

Febrero, 12 y 13

Enfrentamientos armados entre militares y policías en la plaza central de La Paz, frente al Palacio de Gobierno. Sánchez de Lozada saca francotiradores a las calles. En esos dos días murieron 35 personas y hubo 205 heridos.

Febrero, 19

El gobierno anuncia el retiro del impuestazo.

Septiembre, 19

Día Nacional de la Defensa del Gas. Manifestaciones masivas contra el gobierno y su política hidrocarburífera.

Septiembre, 20

El gobierno reprime los bloqueos campesinos. Mueren seis personas. La Paz es bloqueada, no entran alimentos y los mercados cierran en solidaridad con los campesinos. Los obreros se declaran en huelga general y marchan por la ciudad. Paros de los transportistas. Protestas de jubilados y estudiantes universitarios. Dirigentes campesinos en huelga de hambre en la ciudad de El Alto. Se suceden movilizaciones populares y represiones.

Octubre, 9

Segundo día de paro general en la ciudad de El Alto. El bloqueo se radicaliza.

Octubre, 17

Renuncia Sánchez de Lozada. Asume el vicepresidente Carlos Mesa.

2004

Febrero, 20

Se promulga la Ley de Reformas Constitucionales, que introduce las figuras de la Asamblea Constituyente, el referendo y la iniciativa legislativa en la Constitución del país.

Julio, 18

Referendo para decidir el futuro de las reservas de gas del país; 80% por el "sí".

Octubre, 13

Miles de campesinos marchan hacia La Paz para reclamar que se someta a la Justicia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Octubre, 21

La Cámara de Diputados aprueba por unanimidad el proyecto de Ley de Hidrocarburos.

Diciembre, 30

Decretan aumentar el precio de los combustibles.

2005

Enero, 1

Sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia comienzan la primera semana de 2005 con protestas que incluyen paros por tiempo indefinido y bloqueo de carreteras.

Enero, 11

Protestas en varias localidades de Bolivia en contra de un sorpresivo aumento en el precio de los combustibles, causado por la eliminación de los subsidios gubernamentales.

Marzo, 7

El presidente Carlos Mesa amenaza con renunciar.

Marzo, 18

Mesa decide continuar en su cargo luego de que el Congreso rechaza su propuesta de convocar a elecciones anticipadas.

Abril, 29

El Senado aprueba la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluye un impuesto del 32% a la producción de las empresas extranjeras.

Mayo, 6

El Congreso aprueba la nueva Ley de Hidrocarburos.

Mayo, 11

El presidente Mesa anuncia que no promulgará la Ley de Hidrocarburos y convoca a un encuentro multisectorial para debatir una nueva norma.

Mayo, 17

Decenas de miles de personas marchan en La Paz para exigir la nacionalización de la explotación del petróleo y el gas natural.

Mayo, 27

Se reanudan las protestas. Cientos de manifestantes se lanzan a las calles para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Mayo, 30

Las agrupaciones que piden la nacionalización de la industria del gas vuelven a bloquear las vías de acceso a La Paz.

Junio, 3

Mesa convoca a una Asamblea Constituyente y a un referendo sobre autonomías regionales.

Junio, 6

Carlos Mesa presenta su renuncia a la presidencia.

Junio, 9

El jefe de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, asume la presidencia.

Diciembre, 18

Elecciones presidenciales. Evo Morales triunfa con más del 51% de los votos. La derecha, representada por "Tuto" Quiroga, no llega al 34%.

2006

Enero, 22

Asume la presidencia de la nación Evo Morales.

Marzo, 4

El Congreso aprueba la Convocatoria a la Asamblea Constituyente y su forma de representación.

Mayo, 1

Decreto de Evo Morales de nacionalización de los recursos hidrocarburíferos del país.

Julio, 1

En las elecciones para la Asamblea Constituyente, el MAS obtiene el 53% de los votos, no llegando a los dos tercios necesarios para imponer reformas constitucionales sin recurrir a acuerdos con la derecha. En el plebiscito por las autonomías triunfa el "no" en la mayoría del país, pero se impone el "sí" en los departamentos del sur y oriente (Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando).

Ahora es cuándo: La bella y certera consigna de la revolución boliviana

Por Jorge Altamira



La insurrección en Bolivia es un llamado al orden a quienes se han atrevido a sepultar en el pasado el Argentinazo. Es cierto que la explosión popular fue provocada por la política de un gobierno "menemista" y que eso mismo nos hubiera deparado una victoria de Menem en las pasadas elecciones. La patronal argentina ha logrado "zafar" con los Duhalde y con los Kirchner. ¿Pero por cuánto tiempo? La firma del acuerdo con el FMI, el pago de una deuda externa de magnitud fabulosa, el congelamiento de los salarios, la reprivatización de los privatizadores y nuevos subsidios, el "canje" de deuda externa por educación y por vivienda, la presión de los acreedores internacionales, el "código penal" para enfrentar a los piqueteros; ¿adónde nos lleva esto sino a Bolivia, o sea a la segunda edición de nuestros 19 y 20 de diciembre?

Muy bien adjudicó *Ambito Financiero* (14/10/03) el levantamiento boliviano a los piqueteros. En efecto, los campesinos de la altiplanicie (con sus cortes de rutas y caminos) y los desocupados de El Alto no son más que una réplica piquetera. Que se encuentren a la vanguardia de una gigantesca revolución demuestra que concentran la experiencia histórica de lo que fue, desde los años '40, el proletariado más avanzado de América Latina. Los piqueteros de Bolivia marchan ahora con los fabriles, los mineros, los maestros, los estudiantes y el conjunto de las masas, a derrocar el poder de la burguesía.

Se equivocan, entonces, y fiero, los que insisten, en Argentina, en negar potencial revolucionario a las masas que se organizan en Berazategui o en Ledesma (Jujuy), en Ensenada o en Tartagal (Salta), en Moreno y La Matanza o en Caleta Olivia y el Turbio, en Resistencia y Barranqueras o en San Juan capital.

Hay un hilo conductor en la revolución boliviana. Las mitas (explotación minera) coloniales llevaron a las insurrecciones indígenas del siglo XVIII; también el saqueo social impulsó las guerrillas del Alto Perú; el estaño llevó a la revolución del '52 y el petróleo a la de 1971 (Asamblea Popular); el gas (y la papa transgénica) a la revolución en marcha en la actualidad. Es decir, la explotación en beneficio privado y para el mercado mundial.

Pero la revolución boliviana no responde solamente a esto. Por decisiva que sea la dominación del monopolio internacional, Bolivia ha construido bajo su sombra alguna suerte de desarrollo capitalista. Pues precisamente estos capitalistas se encuentran en completa bancarrota: ocho de cada diez empresas no pueden hacer frente a sus deudas. Tampoco las pueden rescatar el Estado o los bancos. La deuda externa, varias veces "perdonada", no supera el 20% del producto bruto boliviano, pero es suficiente como para destruir las finanzas públicas. Hay un real proceso de disolución del capitalismo, lo cual explica perfectamente por qué incluso las clases sociales que votaron por Sánchez de Lozada participan en la insurrección o se mantienen neutrales. Pero la quiebra financiera y la bancarrota económica no son monopolio de Bolivia, como bien lo sabemos nosotros, los brasileños, los rusos y los asiáticos (y ahora los californianos).

Por su amplitud social la insurrección boliviana recuerda a la de Nicaragua de 1979; sólo entre agosto y octubre del año precedente Somoza había masacrado a 50.000 insurgentes en el afán de aplastar militarmente el levantamiento popular. En Bolivia se trata, también, ni más ni menos que de la intervención del campesinado, que muchísimas veces en el pasado fue la retaguardia de los gobiernos.

La insurrección boliviana tiene una enorme densidad histórica, porque los bolivianos saben que el saqueo del gas significa una nueva lápida a su posibilidad de existencia nacional. No es el gas, entonces, lo que está en juego sino la reestructuración de la historia boliviana sobre nuevas bases sociales.

Como lo había intuido, pensado o previsto el Che, Bolivia es un epicentro de la revolución en América del Sur. Para regímenes capitalistas completamente quebrados, como son los de los países que la rodean (incluido, especialmente, Brasil), la victoria de la revolución boliviana es un peligro mortal. Saltando las leyes de la historia, la Bolivia pobre se puede convertir, de repente, por la acción de sus explotados, en el modelo de desenvolvimiento para otros Estados más desarrollados.

Esto explica que el imperialismo yanqui haya salido con los botines de punta, no solamente por el negocio del gas, el cual ni siquiera está en manos de los principales monopolios internacionales. La orden fue, como cuando los iraníes se levantaron contra el Sha, en 1979, bala y más bala; ningún partido intermedio goza de la confianza de Bush como factor capaz de controlar o mediatizar la insurrección de las masas. La OEA, con Kirchner, Lula y el Frente Amplio de Uruguay, entre otros, se han cobijado en el imperialismo norteamericano. Es que pueden discutirle a Bush los aranceles del Alca o la diplomacia con Cuba, pero no tienen una posición independiente del amo frente a una revolución obrera y campesina. En el momento decisivo no han tenido una mísera palabra para los derechos humanos de los masacrados oprimidos de Bolivia. Que esos oprimidos se hayan transformado en revolucionarios los ha eliminado de la sensibilidad democrática.

Bolivia ha puesto al desnudo el carácter contrarrevolucionario de la democracia y de los democratizantes, especialmente los de izquierda. Lula llegó al gobierno empeñado en impedir una quiebra bancaria y, su correlato, el Argentinazo. Frente a Bolivia ha demostrado que ese empeño es decididamente estratégico. En 1995, el Partido Obrero rompió una Conferencia Internacional del Foro de San Pablo, en Montevideo, por la negativa de los partidos presentes a expulsar de su seno a un partido nacionalista boliviano que había respaldado, como miembro del gobierno, el estado de sitio y la represión de una huelga general en Bolivia. En el gobierno o todavía en la oposición, esos partidos apoyan hoy a la OEA.

En Bolivia el democratismo izquierdista se ha puesto al desnudo con el esfuerzo de Evo Morales para boicotear la insurrección en función de asegurar las elecciones municipales de 2004. La revolución le sirve a la derecha, ha dicho, en algo que parece haberse convertido en el taparrabos de los Lula, Ibarra, etc., para justificar su trabajo sucio. Frei Betto acaba de decir lo mismo para justificar la alianza del PT con los latifundistas y banqueros brasileños y con el imperialismo. "El trotskismo, como ocurre en Brasil, debe decidirse a gestionar", acaba de decir un pigmeo de la intelectualidad porteña. Después de haberla proclamado "utopía", los democratizantes ahora la han convertido en "provocación" que serviría al propio imperialismo con el cual ellos se han unido para ahogar a la revolución boliviana.

Luego de haber pretendido negociar los decretos del gas con Sánchez de Lozada, ahora Evo pretende limitar la superación de la crisis a la salida del mandatario. Pero incluso una Asamblea Constituyente convocada a partir del viejo régimen sería una derrota de la revolución. Para que haya una Constituyente soberana es necesario que las masas derroquen al gobierno y que sus organizaciones tomen el poder.

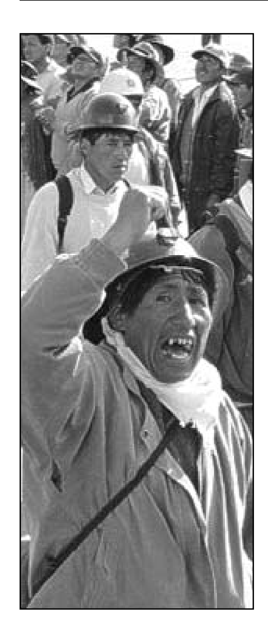
Lo que por sobre todas las cosas distingue a la insurrección boliviana del Argentinazo es la concentración excepcional de energías, histórica, absolutamente inmensa de los piqueteros obreros y campesinos bolivianos. Es lo que resume la consigna de los vecinos de La Portada, un barrio que domina desde sus alturas la autopista que va de El Alto a La Paz: "Ahora es cuándo".

Una respuesta al dilema que, desde la Biblia, persigue a la humanidad: Si no es ahora, ¿cuándo?

***Prensa Obrera*, 16 de octubre de 2003**

Revolución boliviana: Terminó el primer round

Por el Equipo Internacional del Partido Obrero



Con la caída del sanguinario Sánchez de Lozada, terminó la primera etapa de la revolución boliviana.

Los enemigos democratizantes de la revolución –tanto bolivianos como del exterior– se las han ingeniado para usurparle el triunfo a las masas y reemplazar a Sánchez de Lozada por otro 'neoliberal', el hasta ahora vicepresidente Carlos Mesa. El 'nuevo' gobierno es un punto de apoyo de la contrarrevolución contra el pueblo.

Hacia la insurrección

Después de tres semanas de rebelión popular, fracasó el intento de Sánchez de Lozada –dictado por la Embajada norteamericana– de ahogarla en sangre. La extensión de las movilizaciones y huelgas de masas a todo el país (Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Tarija), la entrada en el combate de la clase media capitalina y, por sobre todo, las excepcionales movilizaciones de masas que tuvieron lugar en La Paz del miércoles 15 al viernes 17, en medio de una huelga general total, hundieron las posibilidades de Sánchez de Lozada. Las manifestaciones de La Paz –que reunieron 250.000 personas– fueron las mayores de los últimos veinte años y, según algunos (*Página/12*, 19/10/03), incluso a las que se registraron durante la revolución de 1952. La Paz se había convertido en el centro de una inmensa movilización nacional que venía de El Alto, de Huanuni, de Yungas, de Achacachi. Durante 72 horas, el poder político y sus fuerzas represivas estuvieron virtualmente cercados y paralizados. Las consignas, dicen los diarios, eran cada vez más radicalizadas. Después del fracaso de la represión en El Alto, renunció el vicepresidente Carlos Mesa y luego, de lunes a miércoles, continuaron renunciando ministros, secretarios de Estado y hasta el vocero presidencial.

El aspecto más explosivo de la crisis política, sin embargo, ocurría en los cuarteles. El diario *La Nación* de Santiago de Chile da cuenta de que "las diferencias internas en las filas militares que han salido a la luz pública revelan que ya no existe una posición castrense unitaria, sobre todo a nivel de la tropa (...) Los altos mandos apoyan al presidente pero no se puede saber qué harán los cuadros medios y bajos, los que estarían mayoritariamente con las demandas de los grupos alzados" (reproducido por *El Diario*, La Paz, 16/10/03). Las tropas utilizadas en la represión de El Alto habían sido traídas de Santa Cruz y, al parecer, ni siquiera a estas tropas se les tenía "confianza": desde el miércoles, durante las grandes manifestaciones en La Paz, el ejército sale de las calles.

Organismos de doble poder

El levantamiento popular se dirige a terminar con el régimen político hambreador y entreguista y, de una manera instintiva, a instaurar su propio poder. Esto se puso de manifiesto claramente en El Alto, una ciudad de 800.000 habitantes cercana a La Paz.

"Allí, tras combatir a piedra en cada cuadra, a palo en cada esquina, sangrando sábado y domingo, aguantando la metralla enloquecida de tanques y militares carapintadas, hay ya desde el lunes un nuevo poder. A las zonas empobrecidas de El Alto, nadie entra ni sale sin la autorización de los comités de vecinos, organizados para pelear contra las tropas, para marchar a La Paz, para cuidar a los niños y a los heridos. Allí hay una olla común en cada cuadra (...) todos son la autoridad de la comunidad organizada. Es otro Estado, con sus propias normas..." (*Econoticias*, 16/10/03). El poder lo ejercen las 562 juntas vecinales de El Alto, coordinadas por un comité. Todas las comisarías han sido destruidas y no es admitido ningún policía que no sostenga la revolución.

Golpe de Estado democratizante

El desarrollo revolucionario (arriba y abajo) planteó la posibilidad de la conquista del poder por las masas insurrectas.

Para abortar esta perspectiva –la de una victoria histórica de los explotados bolivianos– se puso en marcha un golpe de Estado de características democratizantes que, desprendiéndose del lastre de Sánchez de Lozada, diera una "salida constitucional" al régimen político y social.

La cabeza ideológica del golpe democratizante, y su principal organizador, fue la Iglesia. La curia boliviana fue la primera "institución" del poder establecido en pedir la "salida" de Sánchez de Lozada, aún cuando todavía no había renunciado el vicepresidente Mesa (*Página/12*, 19/10/03).

Le siguió la prensa. "El presidente debe renunciar", editorializó la revista *Pulso* (15/10/03), "dentro de la legalidad constitucional y en respeto al orden sucesorio". "Aún es tiempo para una transición pacífica", advertía *El Diario*, de La Paz

(16/10/03); "...que el primer mandatario abandone su cargo dejando que su acompañante de fórmula y actual segundo mandatario sea el que continúe el fortalecimiento y la vigencia de la democracia", agregaba.

Luego se sumaron los empresarios, defensores de Goni hasta último momento, y miembros de las organizaciones de derechos humanos. Los militares asintieron con su silencio...

El operativo golpista fue apoyado por los enviados de Lula y Kirchner y por la propia Embajada norteamericana, convencida por la fuerza de los hechos de la inviabilidad de la permanencia de Sánchez de Lozada en el poder.

Las direcciones y el golpe

Las direcciones del movimiento de masas –la COB, el MIP de Felipe Quispe y el MAS de Evo Morales– habían entrado en la lucha con el objetivo, no de echar a Sánchez de Lozada sino de negociar con el gobierno la derogación (o modificación) del decreto sobre la exportación de gas. El MAS sólo se sumó a la lucha (y de una manera parcial) a partir del 10 de octubre [2003], tres semanas después de iniciada la movilización. Sólo la radicalización del movimiento frente a las masacres puso en la agenda, de una manera inamovible, la caída del mandatario.

De una manera unánime, estas direcciones plantearon la caída "constitucional" de Sánchez de Lozada. No tenían una estrategia revolucionaria (lucha por el gobierno obrero-campesino) sino democratizante, que se fue transformando en contrarrevolucionaria ante la transformación de las movilizaciones en revolución.

Un dato sintomático, denunciado por el dirigente sindical Antonio Pavón: "las direcciones que se presentaron como instancias de giro a la izquierda, como la COB de Solares o la COD de El Alto han comenzado a girar lentamente a la derecha (...) han terminado cediendo en salidas de corte constitucional al régimen (y, coincidentemente) han eliminando la posibilidad de realizar ampliados con la participación de delegados de las juntas vecinales y las organizaciones sociales y políticas que están en la lucha (...) la conexión con las bases está prácticamente rota (artículo distribuido por correo electrónico, fechado el 15/10/03).

El MAS de Evo Morales tuvo una directa participación en el armado del golpe democratizante, al punto de recibir el elogio de los enviados de Lula y Kirchner, que lo encontraron "muy sereno" y en la búsqueda "no de la insurrección sino de un nuevo consenso político" (*Página/12*, 19/10/03).

Las pruebas de la participación de Evo Morales en el golpe están a la vista. Según un despacho de la agencia *Bolpress*, fechado el 15/10/03, "luego de una serie de contactos telefónicos con intelectuales, políticos (incluso de la coalición de gobierno), además de policías y militares de alto rango, el diputado cocalero sostuvo que, ante la presión del pueblo boliviano, en las próximas horas, 'Goni está dispuesto a renunciar'. Sin embargo, la sucesión presidencial no recaería en el actual vicepresidente Carlos Mesa sino en el presidente del Senado Hormando Vaca Diez (MIR) por decisión de Estados Unidos y los militares y policías. 'Si el gobierno toma esta decisión por imposición del gobierno norteamericano, la respuesta del pueblo será la guerra civil', agregó Morales. El Estado Mayor del Pueblo (organismo en el que interviene el MAS) convocó al pueblo boliviano a intensificar el bloqueo de caminos, calles y puentes y la movilización callejera hasta lograr que Goni renuncie de acuerdo a la Constitución Política del Estado...".

El papel de las direcciones de las masas fue decisivo para lograr que Mesa –un neoliberal, millonario, privatista, proyanqui y responsable de las masacres del pueblo como Sánchez de Lozada– pudiera asumir la presidencia. Mesa tuvo que pedir a los dirigentes obreros que permitieran el paso de los parlamentarios que se dirigían a la sesión del Congreso que lo designaría presidente.

El 'nuevo' gobierno

Carlos Mesa es un usurpador democratizante.

El programa que anunció en su asunción fue pactado con la Iglesia (*Clarín*, 18/10/03): 1) referendo sobre la exportación del gas; 2) Asamblea Constituyente; 3) elecciones anticipadas.

El referendo sobre el gas revela que no existe siquiera el compromiso de parar la entrega del gas. La Constituyente no se presenta en oposición al régimen político sino a la revolución, en carácter distraccionista.

Las primeras medidas de Mesa han sido confirmar al frente de la Policía y el Ejército a los jefes responsables de las masacres y apartar del gabinete a los partidos políticos, para que los integrantes de la depuesta coalición puedan recomponer sus fuerzas a la sombra.

No es cierto que el gobierno de Mesa sea un "gobierno débil, incluso más débil que el de Sánchez de Lozada" (*Econoticias*, 18/10/03). La demostración obvia es que logró desarmar la rebelión popular y puso a todo el mundo detrás suyo, incluidos los antiguos opositores.

Tampoco es cierto que el nuevo presidente sea un "nuevo prisionero de palacio" o que el parlamento sea "rehén de las masas". Más bien, la realidad es la contraria: las masas son prisioneras de Mesa y del Congreso como consecuencia de la política democratizante de sus direcciones.

Es cierto que el nuevo gobierno enfrenta contradicciones monstruosas. Pero, para que esta incapacidad histórica dé lugar a una salida favorable a las masas laboriosas es necesaria una intervención política revolucionaria, algo que hoy está ausente en las grandes organizaciones de las masas.

La capitulación de las direcciones de las organizaciones de masas ante el gobierno neoliberal encabezado por Mesa es total y completa.

La COB ordenó el "repliegue" de los trabajadores movilizados a sus distritos, la suspensión de la huelga general y el levantamiento de los bloqueos en el Ampliado realizado el pasado fin de semana. El mismo Ampliado estableció un pliego de reivindicaciones pero no fijó fecha ni plazo para su cumplimiento. "La COB hace una pausa en la ofensiva anti-neoliberal aguardando que el nuevo presidente constitucional muestre hasta dónde es capaz de ir" (*Econoticias*, 20/10/03)... justamente en el momento que Mesa anunciaba su gabinete "conformado por tecnócratas y personalidades vinculados al esquema neoliberal que se mantiene en pie desde 1985" (ídem).

El apoyo del MAS al "nuevo" gobierno es abierto y directo. "El MAS, a través del diputado Antonio Peredo, calificó de positivo el mensaje de Mesa 'porque recoge lo que el pueblo está esperando'... (Peredo) explicó que su partido determinó un cambio en su proceder para apoyar al primer mandatario en los plan-

teamientos positivos para el país, y en la manera en que estos se vayan dando, el apoyo incondicional se irá concretando..." (*El Diario*, La Paz, 18/10/03).

Felipe Quispe, del MIP, aunque no dejó de anunciar "una guerra civil y ríos de sangre"... para el futuro, "aceptó la sucesión constitucional" (*Página/12*, 19/10/03), dejó en manos de la confederaciones campesinas regionales el levantamiento de los bloqueos camineros y se declaró dispuesto a negociar con Mesa.

Revolución y contrarrevolución

El levantamiento de características insurreccionales protagonizado por las masas bolivianas, de un mes de duración, que movilizó a los sectores más explotados del pueblo, que se extendió nacionalmente y que creó organismos susceptibles de convertirse en los órganos del poder obrero, muestra que en Bolivia ha comenzado una revolución.

El derrocamiento de Sánchez de Lozada, sin embargo, no es una victoria de las masas porque el poder político fue usurpado por sus enemigos "democráticos", que se valdrán de él para hacer retroceder a la revolución. Sin embargo, las contradicciones que enfrenta el nuevo gobierno –el estado de ánimo insurgente de las masas, la crisis del capitalismo, tanto en Bolivia como en el plano mundial– no permiten que la victoria obtenida por la contrarrevolución democrática alcance para cerrar el proceso revolucionario abierto.

La lucha entre la revolución y la contrarrevolución está abierta. La victoria de la revolución depende de una sola condición. De la conciencia de la vanguardia acerca de la naturaleza contrarrevolucionaria de la democracia y de los democratizantes, especialmente de los centroizquierdistas y la burocracia sindical, y consecuentemente, la estructuración de un partido revolucionario.

***Prensa Obrera*, 23 de octubre de 2003**

El MST y Bolivia: El "triunfo popular" es la máscara de la contrarrevolución

Por Luis Oviedo

El MST ha dedicado un suplemento especial de su periódico a la revolución boliviana (*Alternativa*, 23/10/03). Su eje es caracterizar la caída del gobierno de Sánchez de Lozada como "un gran triunfo popular" e, incluso, como "un triunfo revolucionario". Esto no debería sorprender, porque lo mismo había hecho con la victoria electoral del ecuatoriano Gutiérrez (rápidamente convertido en un agente del FMI y de los petroleros norteamericanos y en un cómplice del derechista Uribe en la guerra civil colombiana) y con la "victoria" del frente encabezado por Lula y el empresario y evangelista Alencar en Brasil, respaldado por el 99% de la burguesía brasileña y buena parte del imperialismo mundial.

Los gobiernos surgidos de las "victorias populares" del MST se convierten con toda regularidad en los agentes de los opresores y los explotadores. El MST nos ofrece el eterno círculo vicioso de la "traición" de los protagonistas de estas "victorias" y de unas masas que se enfrentan a los frutos de sus "victorias".

¿"Triunfo popular"?

¿Cómo llegó Mesa al gobierno? Responde el MST: "El vacío de poder abierto no fue llenado, sin embargo, por el poder de la calle (porque) sus dirigentes más importantes se negaron a tomar esta tarea (...) se opusieron a que gobernaran la COB, los campesinos y cocaleros y entregaron ese espectacular triunfo al vicepresidente". Es decir, que los "dirigentes más importantes" actuaron como traidores y "entregaron el triunfo". ¿Cómo se explica que los obreros y campesinos hayan "triunfado" a pesar de que sus direcciones "entregaron el triunfo" a los explotadores?

Continúa el MST: "El nuevo gobierno es producto de un acuerdo entre los partidos tradicionales y los dirigentes de las organizaciones del movimiento obrero y popular". Hay que agregar, además, a la Iglesia, las cámaras patronales, la diplomacia argentino-brasileña, las fuerzas armadas y policiales y hasta el propio imperialismo. Para llamar las cosas por su nombre, hay que decir que un acuerdo de esta naturaleza, que tiene como objetivo desplazar un gobierno legalmente constituido, es un golpe de Estado. Y que el objetivo de este golpe era reaccionario: impedir que la caída de Sánchez de Lozada llevara a los explotados al poder político. El nuevo gobierno es el producto de un golpe de Estado, de naturaleza democratizante. ¿Cómo puede calificarse esto como una "victoria popular"?

El MST lo resuelve fácilmente: declara que el ascenso de Mesa es "una limitación del triunfo revolucionario". Dice que "las conducciones mayoritarias del pueblo boliviano tienen una clara responsabilidad en haber limitado el triunfo revolucionario". En otras palabras, la "entrega del triunfo" no es una traición histórica. Pero el nuevo gobierno no es "una limitación" sino que representa el realineamiento de la contrarrevolución.

"Revolución democrática"

Para el MST, lo fundamental, es que se habría derrotado al "neoliberalismo". Pero caracterizar los sucesos bolivianos como una "victoria popular" oscurece las tareas políticas de la clase obrera y los explotados en el período político abierto por la asunción de Mesa. La lógica indica que un gobierno surgido de una "victoria popular" debe ser defendido. Pero la tarea revolucionaria central en Bolivia es exactamente la contraria: organizar el derrocamiento del usurpador Mesa. El primer paso para esto es explicar que en la competencia por darle una salida a la crisis política abierta por el hundimiento del gobierno de Sánchez de Lozada, la burguesía prevaleció sobre el proletariado.

Para el MST, lo ocurrido en Bolivia sería una "revolución democrática", es decir la misma caracterización que los mencheviques y stalinistas hacen de la revolución de febrero de 1917, en Rusia, y de noviembre de 1918, en Alemania. En sus célebres "Tesis de Abril", no es posible encontrar un simple párrafo en el que Lenin califique la caída del zarismo como "una victoria popular" (y eso que había caído una monarquía de mil años y no un simple presidente). Lo que el MST define como "revolución democrática" no es más que el aborto de la revolución proletaria en el cuadro del régimen democrático burgués. Cae una dictadura y sube un demócrata, el MST dice "revolución democrática"; cae un "neoliberal" y sube un "anti-neoliberal", el MST repite "revolución democrática". Pero en la lucha de clases concreta, el ascenso del "demócrata" (o el "antineoliberal") es un realineamiento de la contrarrevolución, que cambia de figurones y métodos, dadas las nuevas circunstancias.

Como el Argentinazo, la rebelión de las masas del Altiplano abrió una nueva etapa política; en eso radica su importancia. Pero las masas no han vencido. Para ello serán necesarias nuevas batallas y una nueva dirección revolucionaria, cuya primera obligación es llamar a las cosas por su nombre.

***Prensa Obrera*, 20 de noviembre de 2003**

El papel de la COB en las jornadas de octubre*

Por Luis Oviedo



Alan Woods, dirigente del Socialist Appeal británico, escribió una larguísima respuesta[1] al artículo publicado en *Prensa Obrera* que denunciaba el seguidismo de Woods a la dirección de la COB (Central Obrera Boliviana) en los sucesos revolucionarios de octubre.[2]

Según Woods, "el PO está obligado a atacar a nuestra tendencia porque está preocupado por los éxitos que estamos teniendo internacionalmente. Es su miedo al crecimiento de nuestra influencia en América Latina y dentro del mismo PO". En un rapto de originalidad, asegura que "si ladran es que la caravana se está moviendo", prefiriendo el proverbio árabe al *Don Quijote* ("ladran Sancho...")

Si es cierto lo que dice Woods, que nuestro artículo de 4.621 caracteres refleja la marcha de una caravana, los 101.000 que él escribió para respondernos revelarían la instalación de una estación planetaria en Marte. Es el texto de un hombre desbordado; parece faltarle el control. Más que un árabe en caravana es un turco en la neblina.

La corriente política de Woods tiene setenta años de existencia. Si recién ahora "se está moviendo" es que los camellos pidieron la jubilación.

¿De qué se ufana Alan Woods?

Woods confirma a *Prensa Obrera*

A pesar de la extensión de su "Respuesta", plagada de largas citas, obviedades, insultos y expresiones descalificadores contra Oviedo y la dirección del PO, Woods oculta el hecho central: la COB defendió la "salida constitucional" y el reemplazo de Sánchez de Lozada por su vicepresidente Mesa, al igual que Morales y Quispe. Por eso denunciamos la posición de Woods de que la dirección de la COB jugó "un papel muy positivo".

Woods responde que los líderes de la COB no tomaron el poder porque "no son marxistas revolucionarios, y por lo tanto en el momento de la verdad no supieron qué hacer". Mentiras, supieron qué hacer: apoyar la "sucesión constitucional" (los parlamentarios sólo lograron llegar al Congreso porque la dirección de la COB, Morales y Quispe les abrieron paso entre la multitud). Woods dice que, a diferencia de Oviedo, él "critica a los dirigentes de la COB de una forma constructiva (...) Dice a los dirigentes: hasta ahora muy bien, ¡pero ahora deben tomar el poder!". Es la primera vez que un ultimátum a destiempo es presentado como una "crítica constructiva".

Woods "explica" que los dirigentes de la COB no tomaron el poder porque "no son marxistas revolucionarios", y al mismo tiempo les reclama que tomen el poder... aunque sigan sin ser "marxistas revolucionarios". ¿Hasta cuándo la sanata, Woods?

Woods dice que es "autoevidente" que la COB no tomó el poder. Pero oculta que no lo hizo porque apoyó el "recambio constitucional". Ese recambio, recordemos, fue impuesto a los explotadores bolivianos por Kirchner y Lula, como el ariete de los imperialismos yanqui y europeo, es decir por la burguesía mundial. En "el momento de la verdad" (el 17 de octubre), los dirigentes burocráticos, "indigenistas" y centroizquierdistas de Bolivia aceptaron el ultimátum de los "emisarios" de Argentina y Brasil.

Las pruebas y evidencias de que la dirección de la COB defendió el ascenso de Mesa y la "sucesión constitucional", es decir la continuidad política y jurídica del Estado burgués, son abundantes.

Días antes del desenlace, el activista sindical Gustavo Pavón denunciaba que "las direcciones que se presentaron como instancias de giro a la izquierda, como la COB de Solares o la COD de El Alto, han comenzado a girar lentamente a la derecha (y) han terminado cediendo en salidas de corte constitucional al régimen. El primero planteando que sea la Corte Suprema de Justicia la que se hiciese cargo del poder transicional; el segundo que fuese el vicepresidente" (artículo distribuido por correo electrónico, fechado el 15/10/03).

Dos días más tarde, el respaldo de la dirección de la COB a la asunción de Mesa era de dominio público: "Al mismo tiempo –explica un despacho de prensa– Evo Morales y el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, coincidieron en celebrar la inminente dimisión del gobernante y en apoyar

la sucesión constitucional para que se haga cargo de la Jefatura del Estado el vicepresidente Carlos Mesa" (*Argenpress*, 17/10/03). Otro cable: "Falta media para las cinco de la tarde y entre los dirigentes de la COB se va abriendo paso la propuesta de dejar que Carlos Mesa sea posesionado como nuevo Presidente de Bolivia y luego esperar que atienda las demandas (populares)" (*Econoticias*, 17/10/03).

Los dirigentes de la COB celebraron la asunción de Mesa como "un triunfo popular" (Woods también lo celebra), levantaron todas las medidas de lucha y contribuyeron a sembrar expectativas con su visita a Mesa y con su participación en actos comunes con el Presidente (*Bolpress*, 23/10/03). Woods lo califica como "un error". La dirección de la COB, incluso, estuvo por detrás de la izquierda democratizante argentina. Luis Zamora y Patricia Walsh rechazaron en el Congreso la asunción de Rodríguez Saá y luego de Duhalde; la COB, en cambio, "saludó" y festejó el ascenso de Mesa y lo llamó a "cumplir el programa popular".

Como se ve, no hace falta ser un "marxista revolucionario" para oponerse a la sucesión constitucional en una crisis de poder.

La política de la dirección de la COB en octubre no cayó del aire. Fue la misma que tuvo en el levantamiento de febrero (en aquella oportunidad, Mesa estaba directamente implicado en las masacres, por lo que reclamaron que la vicepresidenta del Senado se hiciera cargo del gobierno). Esta dirección de la COB, a la que Woods reivindica, estuvo integrada desde la década del '90 por miembros de los partidos del gobierno y permitió que conquistas esenciales fueran arrasadas sin lucha –e incluso se asoció en "negocios" con los privatizadores de la jubilación– (ver, por ejemplo, las documentadas denuncias de Gonzalo Trigoso en "Qué es el Bloque Sindical Antineoliberal").

A mediados de año, un comentarista escribía: "La COB está en su peor crisis. Esa forma de sindicalismo pactista o negociador, asumida por los dirigentes, empeoró su situación, coadyuvando a la profundización de la crisis" (*Alerta Laboral*, junio de 2003). El abierto oficialismo de los dirigentes de la década del '90 llevó a la conformación de un gran bloque opositor, el Bloque Sindical Antineoliberal, que pasó a controlar varias Federaciones de Fabriles (inclusive la de La Paz), y tenía 300 de los 900 delegados al Congreso de la COB. Ante la radicalización de la situación, el Congreso de la COB se limitó a cambiar la Ejecutiva y a su secretario (fue elegido el minero Jaime Solares). Esta fue la dirección que estuvo al frente de la rebelión popular devenida en revolución. Bajo la presión de las masas y los golpes del gobierno, fue radicalizando su "discurso", pero siempre en la perspectiva de la "salida constitucional".

A las masas hay que decirles la verdad. No mentirles como lo hace Woods. Se trata de algo tan elemental que no requiere citas ni de 1848 ni de 1932. El PO les dice a las masas: la política de la dirección de la COB fue contrarrevolucionaria; es necesario poner en pie una nueva dirección. Woods les dice a los dirigentes de la COB: "Muy bien, muchachos", "muy positivo lo que hicieron"... para lo cual oculta que disolvieron una situación revolucionaria que demoró un mes en formarse para apoyar la "sucesión". Así respondieron al reclamo (conciencia política) "Ahora es nunca".

El método político de Woods es criminal en Bolivia, en Argentina y en cualquier lado. Se puede versear, escribir cien mil caracteres, citar extensamente el Manifiesto Comunista y... mentir sobre la dirección de la COB sentado desde Londres.

***Prensa Obrera*, 29 de enero de 2004**

(*) Publicado originalmente con el título "Respuesta a Alan Woods (Socialist Appeal)".

1. Alan Woods, "Marxismo frente a sectarismo. Respuesta a Luis Oviedo (PO)", en http://argentina.elmilitante.org/index.asp?id=muestra&id_art=362.

2. Luis Oviedo, "La posición contrarrevolucionaria de Socialist Appeal", en *Prensa Obrera*, 20/11/03.

El "indigenismo" es contrarrevolucionario

Sólo habrá una "Bolivia india" con un gobierno obrero y campesino

Por Luis Oviedo



Alvaro García Linera, un ex guerrillero devenido democratizante con aspiraciones ministeriales, ha caracterizado el levantamiento obrero y campesino de Bolivia como un levantamiento étnico (no social): "la rebelión de la nación aymara" (*Brecha*, 10/10/03).

Para García Linera, la salida a la crisis boliviana no pasaría por la expulsión del imperialismo, el ejercicio del poder político por los explotados y la completa reorganización social del país a partir de ese poder obrero-campesino, sino por el reemplazo del actual "Estado monocultural y monolingüe" por una "democracia multicultural y mültilingüe". A García Linera, el carácter de clase del Estado le es indiferente, lo que deja en claro que su proyectada "democracia indígena" es un Estado burgués, defensor de las relaciones sociales de propiedad y explotación que empujaron a las mayorías nacionales bolivianas a la miseria y la opresión.

¿En qué consistiría la "democracia multicultural y multilingüe" de García Linera? Según sus propias palabras, en "una segmentación vertical de la estructura de poder estatal con niveles diferenciados de competencias políticas", es decir, en el injerto de ciertos componentes "indígenas" al régimen político vigente. Por ejemplo, García Linera propone un régimen de "autonomías regionales culturales y lingüísticas", subordinadas al Estado nacional, y la elección de diputados y senadores indígenas por esas autonomías y en relación a su proporción en el total de la población boliviana (diputados y senadores aymarás por la autonomía aymará; quechuas por la autonomía quechua, y así sucesivamente). Finalmente, un Ejecutivo en que el 60% de los ministerios esté en manos de indígenas (*Pulso*, 15/10/03).

El indigenismo concluye, entonces, en que el actual régimen político, podría compatibilizarse con la "rebelión aymara", a condición, claro, de la participación en el poder político (y en sus prebendas) de la burocracia de las organizaciones indígenas. Esto lo reconoce el propio García Linera cuando afirma que su propuesta "ciertamente no anula la competencia partidaria (es decir a los partidos actualmente existentes) pero obliga al mismo sistema partidario a multiculturalizarse o a establecer alianzas partidarias multiculturales para gobernar" (*Pulso*, 15/10/03).

El planteo "autonomista" no sólo es de interés de los intelectuales indigenistas y las burocracias de las organizaciones campesinas. La burguesía de regiones como Santa Cruz y Tarija –que se ha beneficiado con la explotación petrolera y el crecimiento de la producción de soja transgénica y que sería la principal beneficiaria de la explotación gasífera– levanta planteos "autonomistas" para quedarse con la parte del león de los beneficios producidos en sus regiones. El planteo indigenista calza como un guante a los intereses de estos sectores patronales.

La "democracia multicultural" de García Linera tendrá su ejército y su policía, es decir organismos de represión del pueblo en defensa de la "democracia" y defenderá la vigencia de la propiedad privada. Será, como el actual, un régimen opresor y explotador de las mayorías bolivianas.

Una auténtica "Bolivia india" no se desarrollará sobre la base de la representación de las "etnias" en el Estado burgués sino a partir de la supresión de ese Estado y su reemplazo por un gobierno obrero y campesino. Es decir, por un régimen de consejos de obreros y de campesinos, de los trabajadores de la ciudad y el campo, que ejerzan el poder en forma directa. El régimen de los consejos, sin la mediación de las burocracias partidarias "multiculturalizadas", es el único que puede permitir el ejercicio efectivo del poder por los campesinos-indígenas en unidad con sus hermanos obreros de las ciudades y las minas. De un poder real, porque se basará en la expulsión del imperialismo, el armamento de la población trabajadora y la reapropiación de las riquezas por parte de la población trabajadora en función de la completa reorganización social de la sociedad. Sólo sobre esta nueva base política y social podrán desarrollarse, en toda su potencialidad, las culturas y las lenguas indígenas, como parte del propio desarrollo cultural de los explotados bolivianos en el poder.

***Prensa Obrera*, 23 de octubre de 2003**

Sobre la revolución boliviana

Por Osvaldo Coggiola



1 La base de la crisis revolucionaria en Bolivia, en 2003, es la completa crisis del capitalismo y el Estado boliviano: las privatizaciones han fracasado en revertir la crisis fiscal (al contrario, la han acentuado) y no han promovido ningún crecimiento económico sostenido. Las empresas deben pagar el 25% por concepto de Impuesto a las Utilidades pero, luego de algunos ajustes a la tasa efectiva, las capitalizadas sólo pagan el 14%, en promedio, y las petroleras menos del uno por ciento. La fuga de capitales se ha acentuado en 2003: oficialmente, más de 300 millones de dólares de las "capitalizadas" están fuera del país. Con la privatización del sistema de jubilaciones, el Estado dejó de recoger contribuciones, teniendo que bancar sin ellas a los pensionistas amparados en el antiguo sistema: el déficit, que era, en 1997, de 321,1 millones de bolivianos, subió de inmediato a 1.364,4 millones, luego a 1.876,5 millones, cuando el Estado comenzó a emitir bonos para cubrir el déficit: sólo en 2002, el Tesoro tuvo que pagar 2.807,3 millones de bolivianos (5,1% del PBI) para pagar las rentas (con un déficit anual superior a 400 millones). Según un cálculo, con una tasa de mortalidad del 6% anual, el déficit será todavía del 1,5% en 50 años, todo para garantizar un negoción, de flujos constantes de fondos sin riesgo y baja ejecución, al capital financiero (fondos de pensión privada –AFPs–) que se beneficia de la privatización. Las AFPs son propietarias del 50% de las empresas privatizadas: a pesar de eso, el total de sus recaudaciones equivale a sólo 4,82% del ingreso fiscal y a 0,66% del PBI (el porcentaje viene cayendo).

La contracara de esta orgía capitalista es, en primer lugar, la miseria jubilatoria, que propició el primer gran paso de las luchas actuales: en marzo y en noviembre de 2001, los jubilados iniciaron marchas desde la población de Caracollo pidiendo la nivelación de sus rentas a 800 bolivianos como mínimo. Por decisiva que sea la dominación del monopolio internacional, Bolivia ha construido bajo su sombra alguna suerte de desarrollo capitalista. Pues precisamente los capitalistas se encuentran en completa bancarrota: ocho de cada diez empresas no pueden hacer frente a sus deudas. Tampoco las pueden rescatar el Estado o los bancos. La deuda externa, varias veces "perdonada", no supera el 20% del producto bruto boliviano, pero es suficiente como para destruir las finanzas públicas. Hay un real proceso de disolución del capitalismo, lo cual explica perfectamente por qué incluso las clases sociales que votaron por Sánchez de Lozada participaron en la insurrección. En el marco de la quiebra del capitalismo, la crisis de Bolivia no se resume en la alta desocupación y en el saqueo de sus riquezas.

Todas las clases propietarias vinculadas al modo de producción capitalista están sufriendo las consecuencias de la disolución de las relaciones sociales. La recesión ya se arrastra desde hace cinco años, el desempleo es astronómico (dos de cada tres trabajadores perdieron su empleo en los últimos cuatro años), la deflación convierte en impagables las deudas. Al primer trimestre de 2003, el endeudamiento empresario totalizaba mil millones de dólares (el 10% del PBI). La insolvencia y la crisis afectan a nueve de cada diez empresas. Los principales acreedores son los bancos, que han comenzado una agresiva política de ejecuciones de hipotecas y garantías. La reprogramación de las deudas bancarias, impulsada por el gobierno, no logró resolver el problema. Pese a que se "reprogramaron" deudas por 849 millones de dólares, los beneficiarios volvieron a incurrir en moras e incumplimientos. El fracaso de la reprogramación certifica que la quiebra de la industria boliviana no tiene retorno. Ante la quiebra, el planteo de la burguesía es totalmente parasitario: reclaman la "nacionalización" de las deudas... para que sean pagadas por el pueblo. La rebelión popular –al repudiar el saqueo de la nación por los pulpos capitalistas– puso sobre el tapete la necesidad de una completa reorganización política y social de Bolivia. Bajo el yugo imperialista y la dominación del capital, Bolivia no tiene salida. Con la rebelión popular boliviana, a caballo de la derrota de la intentona golpista en Venezuela a manos de la movilización de los trabajadores, y de la continuidad del Argentinazo, se amplió el campo de la revolución latinoamericana.

2 La insurrección boliviana no se limita a ser una "revancha indígena", planteo que parte de la desvirtuación del carácter clasista, antiimperialista y anticapitalista de la revolución boliviana. Con la transformación capitalista y el sojuzgamiento imperialista, la histórica opresión étnica se puso al servicio de la explotación de clase y nacional. El actual "indigenismo" es, desde el punto de vista histórico, reaccionario: sólo habrá una "Bolivia india" con un gobierno obrero y campesino. Proponer el reemplazo del actual "Estado monocultural y monolingüe"

por una "democracia multicultural y multilingüe", proponer una "democracia indígena", es sustentar al Estado burgués, defensor de las relaciones sociales de propiedad y explotación que empujaron a las mayorías nacionales bolivianas a la miseria y la opresión. El indigenismo concluye en que el actual régimen político podría compatibilizarse con la "rebelión aymara", a condición de la participación en el poder político (y en sus prebendas) de la burocracia de las organizaciones indígenas.

El planteo "autonomista" no sólo es de interés de los intelectuales indigenistas y las burocracias de las organizaciones campesinas. La burguesía de regiones como Santa Cruz y Tarija –que se han beneficiado con la explotación petrolera y el crecimiento de la producción de soja transgénica y que serían las principales beneficiarias de la explotación gasífera– levantan planteos "autonomistas" para quedarse con la parte del león de los beneficios producidos en sus regiones. El planteo indigenista calza como un guante a los intereses de estos sectores patronales. La "democracia multicultural" tendría su ejército y su policía, es decir organismos de represión del pueblo en defensa de la "democracia" y defendería la vigencia de la propiedad privada. Sería, como el actual, un régimen opresor y explotador de las mayorías bolivianas.

Una auténtica "Bolivia india" no se desarrollará sobre la base de la representación de las "etnias" en el Estado burgués sino a partir de la supresión de ese Estado y su reemplazo por un gobierno obrero y campesino. Es decir, por un régimen de consejos de obreros y de campesinos, de los trabajadores de la ciudad y el campo, que ejerzan el poder en forma directa. El MAS defiende la reivindicación social del campesino, la lucha por la tierra, en términos étnicos. El planteo indigenista se basa en la idealización (falseamiento) de la historia de las comunidades, pues en el incario, los elementos comunitarios del ayllu estaban integrados a un sistema opresivo de castas al servicio del estamento superior, los incas. Establece un bloque político "nacional" entre los indígenas sin tierra, las comunidades que mantienen una agricultura de subsistencia y los elementos capitalistas de origen indígena. No levanta un programa de expropiación del latifundio constituido después de la reforma agraria de 1953, ni levanta, tampoco, un programa que entronque la lucha campesina con la lucha del proletariado.

Los campesinos cocaleros del trópico cochabambino, muchos de los cuales son ex mineros que debieron emigrar en busca de una nueva forma de subsistencia, después de una lucha sañuda por la defensa de sus fuentes de trabajo y de la minería estatal, libraron y libran una lucha a muerte contra la erradicación forzosa de sus cultivos, contra la militarización de sus territorios, la persecución de sus cuadros sindicales y la injerencia imperialista en Bolivia. Han denunciado que la supuesta "campaña antidrogas" no es más que la cobertura de un operativo de expropiación masiva de los campesinos para reconvertir los cultivos en función de las necesidades de las empresas multinacionales, transformar a los campesinos en obreros rurales, y dejar el terreno libre a los gasoductos, oleoductos y al camino interoceánico. El MAS transformó esta lucha social en una reivindicación de la hoja de coca, "hoja milenaria (y) bandera nacional en la defensa de nuestra dignidad y de nuestra soberanía". Pero la coca ha permitido a los campesinos bolivianos desde hace siglos sobrellevar larguísimas y brutales jornadas de trabajo con una alimentación escasa y pobre; si algo simboliza la coca no es la dignidad sino la miseria a que han sido sometidos históricamente el campesino y el indígena boliviano. El régimen de los consejos, sin la mediación de las burocracias partidarias "multiculturalizadas", es el único que puede permitir el ejercicio efectivo del poder por los campesinos-indígenas en unidad con sus hermanos obreros de las ciudades y las minas. De un poder real, porque se basará en la expulsión del imperialismo, el armamento de la población trabajadora y la reapropiación de las riquezas por parte de la población trabajadora en función de la completa reorganización social de la sociedad. Sólo sobre esta nueva base política y social podrán desarrollarse, en toda su potencialidad, las culturas y las lenguas indígenas, como parte del propio desarrollo cultural de los explotados bolivianos en el poder.

Con el pretexto del reconocimiento de los derechos originarios, el indigenismo no cuestiona el Estado burgués; quiere que ese Estado se democratice en el sentido de reconocer a las comunidades los medios para autogobernarse. ¿Les devolverán las tierras, acabarán con el régimen de explotación, acabarán con la oligarquía, que en Bolivia terminó concentrando enormemente la tierra? El indigenismo presentado de esa manera es contrarrevolucionario.

La tarea de los indígenas bolivianos es tomar el poder y poner en pie un gobierno obrero y campesino para construir el socialismo. No se puede pretender resolver los problemas indígenas en los mismos términos en que lo planteó Tupac Amaru en 1780; hay que resolverlos en la época del dominio del mercado mundial y de la computación, tenemos que resolverlos en esta época, necesitamos una revolución socialista que se pueda dirigir a los trabajadores de otros países, sean o no indígenas, para formar un frente común que garantice el desarrollo del socialismo en todos los países: la consigna de gobierno obrero y campesino es la que mejor resume el anhelo histórico de los indígenas bolivianos, no el indigenismo. La cuestión del gas, por ejemplo, es un problema internacional, no de comunidades. Si los obreros y los campesinos toman el poder en Bolivia, el gas servirá a Bolivia, pero sólo el gobierno obrero y campesino va a garantizar las cosas que sirvan al desarrollo del pueblo de Bolivia. Todo el mundo tendrá la provisión de gas en su casa, todo el mundo tendrá gas natural, pero como potencia productora de gas Bolivia puede abastecer al mercado mundial. Mediante la unión socialista de América Latina, con el gas boliviano, el petróleo también boliviano y peruano y venezolano, el cobre colombiano, podemos impulsar todas esas riquezas para el desarrollo común de los trabajadores de América Latina.

3 La represión de la insurrección, y de todos los movimientos de lucha previos y posteriores, ha estado bajo órdenes directas de militares yanquis: las Fuerzas Armadas de la "democracia" boliviana son el ariete de la opresión imperialista. Una especie de comando militar estadounidense tiene el mando de las "Fuerzas Armadas de la Nación". La Embajada de Estados Unidos en Bolivia no sólo articuló el "apoyo internacional" al derrocado Goni, aporta, además, con cuatro hombres que operan en el país, tres en el Estado Mayor del Ejército, en el Gran Cuartel de Miradores, y uno en la propia Embajada de la avenida Arce: es el agregado de Defensa de Estados Unidos, que se relaciona directamente con el ministro de Defen-

sa de Bolivia; se trata de una verdadera ocupación del poder que sostiene al gobierno.

Aun bajo la "democracia", el Estado burgués boliviano no pasa del taparrabos del sometimiento directo, económico, político y militar del país al imperialismo. El imperialismo dio total respaldo al masacrador Sánchez de Lozada y a sus fuerzas armadas. Lo mismo hicieron la OEA y cada uno de sus gobiernos. En medio de la masacre y del alzamiento popular los Kirchner y los Lula no se hicieron oír para condenar la represión y el asesinato de centenares de trabajadores. Sí para defender a las instituciones de los masacradores: la llamada "defensa de las instituciones" encubrió su complicidad política con la masacre del pueblo.

Desde hace años, Bolivia exporta gas a Brasil. Un dato poco conocido es que uno de los factores que llevaron a la radicalización de la entrega del gas a los Estados Unidos por Sánchez de Lozada, fue la presión de la Petrobras de Lula por la revisión a la baja (en precio y volumen adquiridos) del contrato de compra de gas boliviano por Brasil. La "movida" brasileña fue calificada como una "guachada" incluso por un experto en hidrocarburos brasileño. En enero de 2003, Petrobras mantuvo la suspensión de pagos de 100 millones de dólares, para presionar a los bolivianos a reducir el precio, poniéndose en default, pese a que Brasil tiene un crónico problema energético. Al servicio de esa presión mezquina, que revive las infamias de las oligarquías regionales contra Bolivia, estuvo el alardeado descubrimiento de nuevas reservas gasíferas por Brasil, en la cuenca de Santos. En septiembre del mismo año, la garrafa de gas boliviano le explotó a Lula en las manos.

4 En sus antecedentes inmediatos, la situación revolucionaria reconoce su origen en las luchas desatadas contra la política hambreadora del gobierno de Sánchez de Lozada, ungido en agosto de 2002, que tuvieron su epicentro en la lucha contra el "impuestazo" de febrero de 2003. Goni hizo aprobar en el parlamento el Código Tributario, la Ley de Reestructuración de Empresas y la Ley de Concursos Comerciales, mediante las cuales se estableció la flexibilización laboral "legal" en Bolivia, incluso transgrediendo la Constitución y violando los derechos y conquistas de los trabajadores. Con el "perdonazo" (Ley de Reestructuración de Empresas) el gobierno condonó deudas de los grandes empresarios por un valor superior a 180 millones de dólares; el mismo gobierno que mató a 35 trabajadores, e hirió gravemente a 250, en febrero, intentando imponer un "impuestazo" que le hubiera permitido recaudar... ¡90 millones de dólares! Y ningún "perdón", en cambio, para los prestatarios, pequeños productores condenados a la ruina por no poder pagar pequeñas deudas usurarias de los bancos, bajo tasas de interés superiores al 35% real anual. Todo esto ha sido mantenido bajo el gobierno de Mesa.

En esta fase de la lucha no participó el MAS, encabezado por Evo Morales. El propio Morales se encontraba en el exterior (de donde regresó recién el 6 de octubre). El MAS no se sumó a la huelga general, a la que consideró "prematura" y hasta "precipitada", ni a los bloqueos de caminos. La política del MAS fue muy duramente criticada por los activistas obreros y campesinos en lucha. Pese a la defección del MAS, el ascenso del movimiento continuó. Los mineros de Huanuni anunciaron que marcharían a La Paz y comenzaron su caminata. Pese a la represión, los bloqueos y las manifestaciones se fortalecieron. Bajo esta intensa presión, las federaciones campesinas controladas por el MAS se vieron obligadas a sumarse a los bloqueos de caminos a partir del 10 de octubre. Así, el movimiento se extendió al Chapare y a todo el trópico de Cochabamba. Comenzaron las manifestaciones en otras ciudades, como Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Pero todavía el 10 de octubre, a tres semanas de comenzada la pueblada, los militantes del MAS repartían en La Paz un volante en el que no se planteaba la consigna que, a esa altura, se había convertido en el centro político de la movilización popular: *Que se vaya Sánchez de Lozada, entregador y asesino del pueblo.* El volante del MAS decía lo siguiente: "Si (Sánchez de Lozada) no recupera el gas de manos de las transnacionales, que renuncie irrevocablemente a su mandato presidencial y dé curso a la sucesión presidencial". El planteo del MAS es la continuidad del régimen político e, incluso, la del propio Sánchez de Lozada. Para reforzar la idea de que el MAS no reclamaba el derrocamiento del Goni por parte del pueblo movilizado, a renglón seguido el volante agregaba: "Iniciar un proceso de debate nacional encaminado hacia la refundación o reconstitución del país y que confluya en la convocatoria y realización de una Asamblea Constituyente donde nos sentemos frente a frente y tomemos una decisión histórica respecto a nuestro destino". Jaime Solares, principal dirigente de la COB, y Felipe Quispe, de la CSUTCB, tenían un planteo similar: "No vamos a parar hasta que Sánchez de Lozada dimita y deje la presidencia a Carlos Mesa, el vicepresidente, para que de inmediato convoque a una Asamblea Constituyente". Pretendían mantener una continuidad política y jurídica del régimen.

El planteo de la sucesión suponía un compromiso con la rebelión popular, o sea, su recule. En las direcciones que estaban a la cabeza del movimiento estaba ausente el planteo del gobierno obrero-campesino. En este cuadro, todos los planteos de Constituyente –que partían de la vigencia del actual régimen político– eran un arma contra la rebelión popular.

5 El MAS de Evo Morales es una corriente que se basaba en la acción directa y la movilización campesina. Desde el punto de vista estratégico, sin embargo, sus posiciones son democratizantes y burguesas. Que un dirigente sindical cocalero, impulsor de los cortes de rutas y los bloqueos de caminos, expulsado del Parlamento y "excomulgado" por el embajador norteamericano, obtuviera una votación excepcional, no sólo en el campo sino también entre los obreros, los jóvenes y las masas empobrecidas de las ciudades, provocó en su momento una conmoción política que se extendió más allá del país del Altiplano. Su ascenso electoral, como el del MIP de Felipe Quispe, que obtuvo una votación excepcional en el Altiplano paceño, apareció directamente ligado a las grandes luchas de los campesinos cocaleros contra la erradicación del cultivo en el trópico cochabambino, a la "guerra del agua" de abril de 2001 en Cochabamba (contra la privatización del servicio) y al gran bloqueo campesino de La Paz de septiembre/octubre de 2001. Desde el punto de vista de su programa, sin embargo, el MAS integró el amplio marco centroizquierdista latinoamericano. El MAS se declaró partidario de la "condonación de la deuda externa", no planteaba romper con el FMI (sino negociar "defendiendo la soberanía boliviana"), ni repudiar la deuda externa. En esta cuestión clave, el MAS retomaba una consigna lanzada por la Iglesia Católica.



La condonación de la deuda, como su moratoria o su renegociación, restablece la relación de dominación nacional sobre una nueva base. Por este camino, llegó a plantear un relanzamiento del endeudamiento. Uno de los ejes del programa del MAS fue "recuperar las riquezas naturales del país para los bolivianos". La privatización fue el motor de algunas de las mayores puebladas continentales, como la "guerra del agua" de Cochabamba, el "Arequipazo" peruano, la lucha de los campesinos paraguayos contra la privatización telefónica, o las movilizaciones campesinas en Ecuador. Pero el MAS no dijo si indemnizaría a los pulpos privatizadores, como establecen los contratos; o los expropiaría sin pago. En el primer caso, la "recuperación" del gas y del petróleo se convertiría en una hipoteca ilevantable para Bolivia, que debería pagar a precio de oro sus propios yacimientos. Para que las empresas renacionalizadas puedan convertirse en un instrumento para el desarrollo nacional, no basta con que sean estatales. El capitalismo de Estado es también una vía para el saqueo nacional.

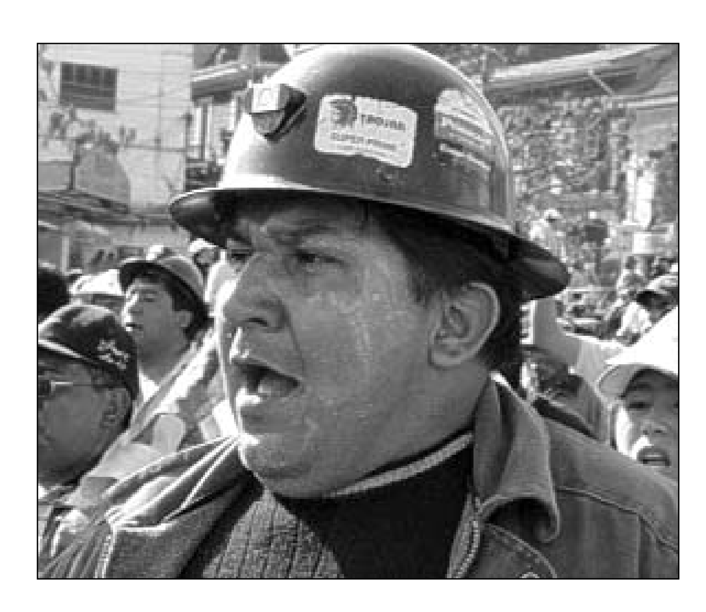
El MAS no plantea la dirección y el control obrero de las empresas nacionalizadas, sino la integración a ellas del capital "boliviano" (bajo la forma de cooperativas, empresas locales, etc.). El objetivo estratégico del MAS es "recuperar la democracia secuestrada por el neoliberalismo"; se limitaba a la reforma de la Constitución Política del Estado. El MAS sería "un instrumento político de las organizaciones sindicales, el brazo partidario del vasto mundo sindical". La función de un sindicato obrero es defender las condiciones de contratación de los trabajadores; o sea que tiene una función restringida al cuadro de las relaciones capitalistas de producción. Como (supuesto) "brazo partidario del vasto movimiento sindical", el MAS es un partido de centroizquierda. Para el tumultuoso torrente de luchas populares que busca una salida al derrumbe capitalista de Bolivia por medio de la acción directa, y que también se expresó en la votación del MAS, existió desde el principio una contradicción insoluble con el programa y la política centroizquierdistas.

6 El proceso revolucionario en Bolivia se da en el marco de una agudización de la lucha de clases a nivel mundial, y muy particularmente en América Latina: el movimiento piquetero en Argentina, los sin tierra en Brasil, la lucha de los trabajadores del Ecuador, las insurrecciones de pobladores en Arequipa y Cuzco contra las privatizaciones impulsadas por Toledo, la resistencia y rechazo popular a la política represiva y ultraderechista de Uribe en Colombia, la reversión popular del golpe proimperialista en Venezuela, los levantamientos populares en proceso en Haití y República Dominicana. El punto de inflexión más importante y que da inicio a un proceso de cambio en la correlación de fuerzas en las luchas sociales en Bolivia constituye la culminación triunfante de la "guerra por el agua" en Cochabamba en el mes de abril de 2000, seguida posteriormente por las grandes movilizaciones cocalera (abril 2001), campesina (septiembre 2001) y de jubilados (marzo y noviembre 2001). Con la conformación del gobierno de Sánchez de Lozada en agosto 2002, la burguesía representada en el MNR fue obligada a constituir una "pegacolación" endeble y cuyo único sustento serían las fuerzas de represión (Embajada norteamericana, Policía, Ejército, Umpoar y Poder Judicial), los organismos financieros internacionales y la Iglesia Católica, con sus mesas de diálogo. El gobierno GSL produjo el alineamiento de las clases populares, e incluso de la clase media, en su contra, con dos medidas: la Ley 2.434 (diciembre 2002) que afecta negativamente a las rentas de los jubilados, y que provocó las protestas de enero de 2003. La segunda medida de ajuste fue el llamado "Impuestazo" en febrero de 2003: el movimiento obrero y campesino a nivel nacional decretó el llamado popular de "Fuera Goni Asesino"; se produjo una irreversible fractura en los aparatos represivos del Estado al tener lugar el enfrentamiento armado entre Ejercito y Policía en la Plaza Murillo, con un saldo de varios muertos y heridos.

7 El fracaso del "Impuestazo" significó el fracaso del gobierno GSL y el principio de su final. Consciente de ello, GSL puso acelerador a fondo a objeto de concluir el único punto remanente de su agenda: la liquidación del negocio del gas en los términos establecidos en su Ley de Hidrocarburos y las imposiciones de las transnacionales. El impacto fiscal esperado de este negocio fue acordado con el BM y FMI: permitiría hipotecar los futuros ingresos fiscales por impuestos sobre la extracción de gas para exportación, a cambio de créditos internacionales inmediatos (más deuda externa) para cubrir parte del descalabro fiscal del régimen burgués. Esta maniobra no excluía la aplicación de más impuestos a los trabajadores y desempleados (refugiados económicos en el sector gremial), y un multimillonario "perdonazo fiscal" a los "eficientes" empresarios privados nacionales, que gracias al sistema corrupto dejaron por años de entregarle al Estado los impuestos que ya pagaron los consumidores por comprar sus productos y servicios (IVA, IT). En determinado momento, las empresas extranjeras "capitalizadas" estuvieron merodeando la posibilidad de acogerse ellos también a este "perdonazo", comprobadas enormes defraudaciones fiscales practicadas.

8 Durante el proceso de lucha fue evolucionando el carácter de las reivindicaciones sectoriales y nacionales, hacia posiciones claramente políticas de rechazo al régimen de explotación capitalista personalizado en GSL y la "pegacoalición", representada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (fiscales y jueces principalmente). Cada nueva rebelión demostraba la imposibilidad y agotamiento de este régimen. Los reclamos sectoriales se convirtieron en exigencias sucesivas como: *Fuera Goni, cierre del parlamento corrupto, destitución de jueces y fiscales nombrados por el cuoteo parlamentario, etc.* El colapso del capitalismo y del Estado se revela al ser incapaz de administrar su crisis salvo única y exclusivamente contra la clase obrera: liquidación gradual de sus míseros ingresos presentes (contención de los salarios de los trabajadores vía mayores impuestos y competencia salarial entre pobres con la cada vez mayor población desempleada), liquidación anticipada de los ingresos futuros de

ésta y de futuras generaciones, liquidación a precio de limosna de las riquezas naturales a favor de las empresas imperialistas. Los llamados "movimientos sociales", sin embargo, se diluyeron casi inmediatamente después de las "treguas" otorgadas a las piezas de recambio del mismo régimen burgués, o cuando alcanzan a la firma de un convenio en el marco de sus reivindicaciones sectoriales e inmediatas. La tarea estratégica del próximo período consiste en superar la contradicción entre la madurez de las condiciones objetivas de la revolución y la falta de madurez del proletariado y de su vanguardia. Es preciso ayudar a la masa, en el proceso de la lucha cotidiana, a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa de la revolución socialista. Este puente debe consistir en un conjunto de reivindicaciones transitorias, partiendo de las condiciones actuales y de la conciencia actual de las amplias capas de la clase obrera y conduciendo inevitablemente en una sola dirección: hacia la conquista del poder por el proletariado.



9 El levantamiento popular se dirigía a terminar con el régimen político hambreador y entreguista y, de una manera instintiva, a instaurar su propio poder. Esto se puso de manifiesto claramente en El Alto. Allí, tras combatir a piedra en cada cuadra, a palo en cada esquina, sangrando sábado y domingo, aguantando la metralla enloquecida de tanques y militares carapintadas, había ya un nuevo poder. En las zonas empobrecidas de El Alto nadie entraba ni salía sin la autorización de los comités de vecinos, organizados para pelear contra las tropas, para marchar a La Paz, para cuidar a los niños y a los heridos. Había una olla común en cada cuadra; todos son la autoridad de la comunidad organizada, es otro Estado, con sus propias normas. El poder lo ejercían las 562 juntas vecinales de El Alto, coordinadas por un comité. Todas las comisarías habían sido destruidas y no era admitido ningún policía que no sostuviese la revolución.

El desarrollo revolucionario (arriba y abajo) planteó la posibilidad de la conquista del poder por las masas insurrectas. Para abortar esta perspectiva –la de una victoria histórica de los explotados bolivianos– se puso en marcha un golpe de Estado de características democratizantes que, desprendiéndose del lastre de Sánchez de Lozada, diera una "salida constitucional" al régimen político y social. La cabeza ideológica del golpe democratizante, y su principal organizador, fue la Iglesia. La curia boliviana fue la primera "institución" del poder establecido en pedir la "salida" de Sánchez de Lozada. Le siguió la prensa: "El Presidente debe renunciar", decía, "dentro de la legalidad constitucional y en respeto al orden sucesorio". Luego se sumaron los empresarios, defensores de Goni hasta último momento, y miembros de las organizaciones de derechos humanos. Los militares asintieron con su silencio.

El operativo golpista fue apoyado por los enviados de Lula y Kirchner y por la propia Embajada norteamericana, convencida por la fuerza de los hechos de la inviabilidad de la permanencia de Sánchez de Lozada en el poder.

Lo que se discutía en Bolivia es quién gobernaba, si las masas insurrectas o el poder oficial. Esto es un fenómeno revolucionario, porque el doble poder marca el nivel mayor que puede alcanzar la dislocación del Estado. ¿Cuál es el nivel mayor de dislocación del Estado? Que teniendo él el monopolio del poder, haya dos poderes, dos Estados; uno en desintegración y el otro en potencia; entonces claramente hay un doble poder expresado en un conjunto de organizaciones, pero en particular en las llamadas Juntas Vecinales de El Alto. La revolución boliviana en este punto alcanza un nivel de tensión sin precedentes. El problema del poder era un problema inmediato y práctico.

10 En la noche del viernes 17 de octubre, Carlos Mesa juró como presidente de Bolivia, como resultado de un golpe de Estado democratizante. Fue armado por la Iglesia, las cámaras patronales, la diplomacia argentino-brasileña, el MAS del cocalero Evo Morales, las Fuerzas Armadas, la Embajada norteamericana e, incluso, una parte del propio gabinete de Sánchez de Lozada. Tuvo por objeto impedir que las masas obreras y campesinas insurrectas tomaran el poder político del Estado. Las direcciones al frente del movimiento popular –la COB, la Federación campesina de Felipe Quispe y el MAS de Morales–, llamaron a confiar en el nuevo gobierno, a "darle tiempo", y levantaron la huelga general y los bloqueos de rutas y caminos. Evo Morales declaró que los anuncios de Mesa representaban "en un 80% el programa del MAS". Las direcciones llamaron a festejar la "victoria popular" y el "fin del neoliberalismo". Apenas los mineros y los campesinos abandonaron La Paz para volver a sus distritos, apenas el "peligro" revolucionario hubo retrocedido, el usurpador Mesa comenzó a ejecutar un programa de gobierno que es la continuidad del "programa neoliberal" del depuesto Sánchez de Lozada.

Mientras Mesa se fotografiaba con Quispe, el nuevo canciller, Juan Siles, anunciaba que antes de fin de año se firmaría el tratado de libre comercio con Chile que venía negociando el gobierno de Sánchez de Lozada. Las organizaciones campesinas habían denunciado que este acuerdo, al facilitar el ingreso de cebolla, trigo, papa, tomate, fruta, lácteos y hortalizas, terminaría de destruir la economía campesina. En las últimas dos décadas, el contrabando y la liberalización comercial redujeron a la mitad los ingresos de los campesinos del Altiplano. El gobierno de Mesa siguió adelante con este acuerdo que tiene por objetivo central promover las exportaciones de soja transgénica del oriente boliviano. El lobby sojero incluye no sólo a los grandes productores agropecuarios sino también a las comercializadoras y a las empresas productoras de semillas, fertilizantes y plaguicidas (todas de origen imperialista) concentra casi todas las

tierras aptas para la producción y un porcentaje todavía mayor del crédito al sector agrícola.

El nuevo ministro de Hacienda, Javier Cuevas, asesor económico por muchos años de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, aseguró que el gobierno de Mesa daría "estricto cumplimiento a los programas suscriptos con el FMI", que obligan a Bolivia a reducir el gasto público y a aumentar la recaudación impositiva, especialmente el impuesto a los salarios. Cuevas anunció que "no habría recursos para atender las demandas sociales y laborales". Alvaro Ríos, ministro de Minas e Hidrocarburos y antiguo lobbista de las empresas energéticas, anunció que el gobierno de Mesa persistiría en su intención de exportar gas natural a Estados Unidos. El nuevo ministro anunció que el referendo sólo se referiría a las características de la venta del gas. En sus primeros anuncios, el presidente anunció que seguiría adelante con la política de erradicación forzosa de las plantaciones de coca, y tuvo sus primeros muertos como consecuencia de enfrentamientos entre soldados y campesinos cocaleros en la región del Chapare.

Mesa encabeza un gabinete con representantes directos del gran capital y cuenta con el apoyo de la Iglesia, las cámaras patronales, los partidos del antiguo régimen, las Fuerzas Armadas, el imperialismo y los regímenes democratizantes de América Latina. Pero lo que le dio sustentación política fue el desarme político de las masas. Las direcciones, al impulsar la "salida constitucional", fueron a contramano de la insurrección obrera y campesina que sacudió a Bolivia y que de una manera instintiva tendía a establecer su propio poder. Estas direcciones engañaron a las masas calificando el ascenso del neoliberal Mesa como "un triunfo popular". Llamaron a confiar y a desmovilizarse. El aborto de la sublevación popular permitió a los partidos y direcciones que estaban a la cabeza de las masas poner a Mesa. Su gabinete y su programa muestran que son las direcciones de las organizaciones populares las que se han convertido en rehenes del nuevo gobierno "constitucional". Habiendo rechazado y boicoteado la posibilidad de que los explotados establecieran su propio poder, las direcciones democratizantes están obligadas a tragarse todo lo que haga el "demócrata" que gobierna Bolivia. Estas direcciones han reforzado sus tendencias a la integración al Estado.

La política rabiosamente capitalista de Mesa obligaría a los explotados bolivianos a salir nuevamente a la lucha. Para vencer, es necesario que la vanguardia que estuvo a la cabeza de los cortes de ruta, de la huelga general, de los choques con el Ejército y la Policía, se rearme políticamente. Esto significa sacar todas las conclusiones del primer episodio de la revolución boliviana: el carácter insuperablemente contrarrevolucionario de la política y las direcciones democratizantes, y la necesidad de organizarse en torno a un eje político revolucionario.

11 Los "movimientos sociales" aceptaron otorgar una tregua al gobierno de Mesa, como consecuencia de haber ellos mismos propiciado y aceptado el tránsito constitucional a partir de la huida de GSL a Estados Unidos. Se plantearon como único objetivo la salida de GSL del gobierno cuando la huelga derivó en insurrección. Una huelga, de reivindicaciones limitadas en sus inicios (no a la exportación del gas por Chile y su reversión al Estado), se fue transformando en huelga política de las masas. No se logró, sin embargo, conformar una dirección única y coordinada entre los diferentes sectores (obreros, campesinos, gremiales, juntas vecinales, sectores de clase media; cada uno en su momento tomó el rol principal en la insurrección). Se creó una situación de doble poder sin definición.

Durante la huelga las direcciones que se presentaron como instancias de giro a la izquierda, como la COB de Solares o la COD de El Alto comenzaron a girar lentamente a la derecha, cediendo en salidas de corte constitucional al régimen, eliminando la posibilidad de realizar ampliados con la participación de delegados de las juntas vecinales y las organizaciones sociales y políticas que estaban en la lucha. El papel de las direcciones de las masas fue decisivo para lograr que Mesa –un neoliberal, millonario, privatista, proyanqui y responsable de las masacres del pueblo como Sánchez de Lozada– pudiera asumir la presidencia. Mesa tuvo que pedir a los dirigentes obreros que permitieran el paso de los parlamentarios que se dirigían a la sesión del Congreso que lo designaría presidente.

No es cierto que el gobierno de Mesa sea un gobierno débil, incluso más débil que el de Sánchez de Lozada. La demostración obvia es que logró desarmar la rebelión popular y puso a todo el mundo detrás suyo, incluidos los antiguos opositores. Tampoco es cierto que el nuevo presidente sea un "nuevo prisionero de palacio" o que el parlamento sea "rehén de las masas". Más bien, la realidad es la contraria: las masas son prisioneras de Mesa y del Congreso como consecuencia de la política democratizante de sus direcciones. Es cierto que el nuevo gobierno enfrenta contradicciones monstruosas. Pero para que esta incapacidad histórica dé lugar a una salida favorable a las masas laboriosas es necesaria una intervención política revolucionaria, algo que hoy está ausente en las grandes organizaciones de las masas. La capitulación de las direcciones de las organizaciones de masas ante el gobierno neoliberal encabezado por Mesa fue y es total y completa. La COB ordenó el "repliegue" de los trabajadores movilizados a sus distritos, la suspensión de la huelga general y el levantamiento de los bloqueos; estableció un pliego de reivindicaciones pero no fijó fecha ni plazo para su cumplimiento. El apoyo del MAS al "nuevo" gobierno fue abierto y directo: a través del diputado Antonio Peredo, calificó de positivo a Mesa “porque recoge lo que el pueblo está esperando”, y explicó que su partido determinó un cambio en su proceder para apoyar al primer mandatario en los planteamientos positivos para el país, y que en la medida en que éstos se vayan dando, "el apoyo incondicional se irá concretando". Felipe Quispe, del MIP, aunque no dejó de anunciar "una guerra civil y ríos de sangre"... para el futuro, aceptó la sucesión constitucional, dejó en manos de las confederaciones campesinas regionales el levantamiento de los bloqueos camineros y se declaró dispuesto a negociar con Mesa.

El levantamiento de características insurreccionales protagonizado por las masas bolivianas, de un mes de duración, que movilizó a los sectores más explotados del pueblo, que se extendió nacionalmente y que creó organismos susceptibles de convertirse en los órganos del poder obrero, mostraba que en Bolivia había comenzado una revolución. El derrocamiento de Sánchez de Lozada, sin embargo, no fue una victoria de las masas porque el poder político fue usurpado por sus enemigos "democráticos". Las contradicciones enfrentadas por el nuevo gobierno –el estado de ánimo insurgente de las ma-

sas, la crisis del capitalismo, tanto en Bolivia como en el plano mundial– no permitieron que la victoria obtenida por la contrarrevolución democrática alcanzase para cerrar el proceso revolucionario abierto.

La lucha entre la revolución y la contrarrevolución está abierta. La victoria de la revolución depende de una sola condición: la conciencia de la vanguardia acerca de la naturaleza contrarrevolucionaria de la democracia y de los democratizantes, especialmente de los centroizquierdistas y la burocracia sindical, y consecuentemente, la estructuración de un partido revolucionario.

12 El gobierno inmediatamente se reagrupó y no otorgó ni un minuto de tregua al pueblo: Mesa reorganizó el aparato estatal con un gabinete nítidamente proimperialista, con funcionarios de la gestión de GSL y de los partidos de la burguesía (todo el equipo técnico a cargo del diseño de la política energética está a cargo de ex funcionarios de anteriores gobiernos y de las transnacionales) y puso en marcha un proceso para desvirtuar las reivindicaciones populares de octubre 2003: a) revisión y modificación de la Ley de Hidrocarburos, en consulta con las transnacionales, y a espaldas de las masas, que exigieron la derogación de esa ley; b) referendo vinculante con respecto a la exportación del gas (previsto para abril de 2004), sin ninguna alternativa diferente a esa Ley de Hidrocarburos: exportación del gas a precios y volúmenes que garanticen la rentabilidad de los inversionistas; c) Asamblea Constituyente, a la que, sin embargo, previamente se le pone “candado” con el referendo vinculante y la Ley de Hidrocarburos, que mantiene el régimen de saqueo por parte de las transnacionales. En resumen, se trata de montar una Asamblea *Prostituyente*, que fundamentalmente funcione como una usina de reciclaje de basura de lo que históricamente representan los partidos políticos de la oligarquía y de sus recientes aliados.

La convocatoria a esta Asamblea ya ha sido postergada para 2005, como una confirmación de su carácter irrelevante. Los tres puntos mencionados son iguales a los propuestos por GSL el día 15 de octubre de 2003, en su último y desesperado intento de parar la insurrección: referendo consultivo departamental para la exportación del gas (modificado a referendo vinculante por Mesa), revisión de la Ley de Hidrocarburos, Asamblea Constituyente.

13 Un papel fundamental en el recambio que preservó al régimen de la revolución fue el jugado por Lula: a través de su mediación el gobierno brasileño fue el eje de la defensa del "régimen constitucional" boliviano contra las masas insurrectas. Pero Lula no sólo es el presidente de Brasil; es, además, el representante político de las direcciones "antiglobalizadoras". La decisión de enviar dos "observadores" a Bolivia resultó sin dudas la derivación más impactante de la cumbre entre Kirchner y Lula realizada en Buenos Aires en octubre de 2003. A partir de ese momento, se montó un verdadero "operativo de Estado" para hacer llegar a los "observadores" a La Paz (cercada por los manifestantes) y se concertaron entrevistas con Sánchez de Lozada, Mesa, Paz Zamora (MIR), los dirigentes de la oposición y la Iglesia. Según aclaró la prensa, los enviados viajaron con precisas instrucciones de no pedir la renuncia de Sánchez de Lozada.

La Organización de Estados Americanos había salido a respaldar inequívocamente a Sánchez de Lozada, es decir, a impedir el triunfo de la rebelión popular. La OEA respaldó a Goni, en nombre de la "continuidad democrática", inmediatamente después de que Sánchez de Lozada masacrara a más de 60 trabajadores y jóvenes. El secretario general de la OEA, César Gaviria, "condenó enérgicamente los hechos de violencia que ponen en peligro el orden constitucional". Inmediatamente, la OEA mandó a La Paz a un "enviado especial" que urgió a los dirigentes opositores a que "resuelvan sus diferencias con el gobierno sin mediación de la violencia". Pero la Nueva Fuerza Republicana (NFR) había abandonado al gobierno, lo mismo que el vocero presidencial; en las Fuerzas Armadas se registraba una aguda división; las movilizaciones populares, en La Paz y en el interior, congregaban a cientos de miles.

La política norteamericana de sostener a rajatabla a Sánchez de Lozada había alcanzado su límite. En este punto, el binomio enviado por Lula y Kirchner tomó el relevo político de los norteamericanos para imponer, por otros métodos, los mismos objetivos estratégicos: la continuidad del régimen político y de sus instituciones (e incluso de sus hombres, no sólo en el caso de Mesa sino también, como resultó, en el del jefe del Ejército). En Bolivia, los enviados se entrevistaron con Sánchez de Lozada –al que en ningún momento le dijeron que debía renunciar porque eso no figuraba en las instrucciones que habían recibido de Kirchner y Lula– y con Evo Morales, pero el "momento decisivo" fue la reunión con la jerarquía eclesiástica, que declaró ante los enviados que era partidaria de la renuncia de Sánchez de Lozada y del traspaso del gobierno a su vicepresidente. El papel de la Iglesia fue clave en toda la crisis, primero intentando salvar al gobierno mediante la división de la oposición; luego, cuando la continuidad del Goni se demostró inviable por la presión popular, cambiando de caballo a mitad del río y reclamando su reemplazo por Mesa. La tarea de los mediadores fue respaldada en todo momento por la Iglesia boliviana, con la que los enviados de Lula y Kirchner establecieron rápidamente un acuerdo político. El propio gobierno norteamericano, al apoyar al nuevo gobierno de Mesa, al que calificó como "constitucional", terminó dando el "ok" a la misión argentino-brasileña. "Es hora de dar vuelta la página", declaró el embajador norteamericano en La Paz. La "mediación" de Lula y Kirchner es altamente educativa para los trabajadores: muestra el carácter contrarrevolucionario de la democracia burguesa –un arma contra la revolución– y el papel de los centroizquierdistas Lula y Kirchner.

Además, ¿cuál fue la posición del gobierno de Chávez frente a la rebelión popular boliviana? Aunque el depuesto Sánchez de Lozada sostuviera que "Venezuela nunca apoyó oficialmente a su gobierno durante las semanas de protestas", lo cierto es que el miércoles 15, la Comunidad Andina de Naciones (integrada por Venezuela) emitió un comunicado de apoyo al gobierno de Sánchez de Lozada. El mismo Sánchez de Lozada, sin embargo, reconoció que "Chávez lo llamó para ofrecerle ayuda horas antes de abandonar el país".

14 Después, ya con Mesa en el gobierno, la reunión entre el dirigente cocalero Evo Morales y Kirchner, y la promesa del argentino de apoyar el intento del boliviano de llegar a la presidencia, fue el hecho político fundamental de la "cumbre" iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra. No sólo puso

en evidencia la activa diplomacia en contra de la rebelión popular boliviana, sino que sirvió también para marcar a fuego las limitaciones democratizantes del indigenismo y de los "autogestionarios". Aunque convocada con anterioridad, la cumbre de Santa Cruz de la Sierra sirvió a un indisimulado objetivo contrarrevolucionario: el apoyo de los gobiernos del continente y de España y Portugal al gobierno de Mesa. Más allá de los discursos, la cumbre fue un operativo político internacional contra el pueblo boliviano y sus reivindicaciones.

En Santa Cruz de la Sierra también se realizó una "cumbre social alternativa", cuya organización corrió por cuenta de Evo Morales, con el mismo objetivo que la oficial. Los vasos comunicantes entre una y otra cumbre fueron mayúsculos: no sólo Evo Morales y Felipe Quispe fueron invitados a la cumbre oficial, sino que se llegó al verdadero ridículo de llevar al neoliberal Mesa, presidente de Bolivia, a la "paralela". Este aprovechó el convite para "transmitir al mundo" la imagen de que la tregua que vive el país después de los sangrientos sucesos de octubre va en serio. Pero en Bolivia no hay ninguna "tregua", pues el gobierno de Mesa sigue a toda marcha con los planes de vender el gas a los pulpos imperialistas, con los acuerdos con el FMI y con los ataques a las condiciones de vida del pueblo. Las delegaciones argentina y brasileña a la cumbre "paralela" estuvieron dominadas por elementos como D'Elía y los partidarios de Lula, es decir, por los representantes políticos de los presidentes reunidos en la cumbre "oficial". Es decir que en Santa Cruz hubo una única cumbre que por razones "protocolares" se dividió en dos: la de los presidentes y la de los amigos de los presidentes. El argentino prometió "colaborar en la formación de cuadros técnicos" para que Morales llegue a la presidencia y para que se "atenga a las reglas institucionales, la única vía posible". Es decir que Kirchner busca reforzar el rol de bombero que Morales juega frente a la revolución boliviana. Es la continuidad de la "misión" enviada por Kirchner y Lula en el punto más álgido de la crisis para salvar al Estado boliviano. Evo Morales se ganó la entrevista con Kirchner luego de su traición a la rebelión popular, intentando vaciar los bloqueos y la huelga general e impulsando a fondo el "recambio constitucional" y el ascenso de Mesa. Morales ratificó ante Kirchner que está dispuesto a respetar la "democracia" e incluso a no reclamar el adelanto de las elecciones, lo que significa sostener al gobierno usurpador hasta 2007. Embriagado por la situación, se manifestó dispuesto a encontrarse con el presidente de Repsol (presente en Santa Cruz) para "discutir un sistema económico mixto, en el que los empresarios reinviertan sus ganancias en Bolivia", y la "política de Kirchner hacia las empresas dadas en concesión, en especial con relación a los hidrocarburos". Es decir, enunció un programa de entrega del gas.

15 La COB realizó un Ampliado Nacional en Cochabamba, en enero, con objeto de tomar una posición con respecto al rechazo total del gobierno de Mesa al Pliego Unico 2004, compuesto por 114 exigencias, las principales de las cuales están siendo objeto de tergiversación por parte del gobierno, que no pretende, obviamente, enfrenar frontalmente las reivindicaciones populares. Estuvieron presentes 70 organizaciones, 43 de ellas afiliadas a la COB. En todo el encuentro se manifestó un llamativo contraste entre las resoluciones finales y el desarrollo concreto del debate, al que la mesa ejecutiva buscó todo el tiempo de colocar en el plano reivindicativo por rama, y el espíritu de lucha general que se filtraba en las intervenciones.

Entre las exigencias están la abolición de la Ley de Hidrocarburos, para restituir el control al Estado sobre estos recursos nacionales; no a la venta del gas por Chile y/o Perú, dotación de gas a todos los hogares bolivianos; juicio penal a GSL y sus ministros por los genocidios de febrero y octubre de 2003; investigación sobre desaparecidos hasta su esclarecimiento total; rechazo al Alca (el gobierno ha respondido que Bolivia está acompañando la posición de Brasil y Argentina...); derogación de la Ley de Capitalización y leyes de privatización, y reversión de las empresas capitalizadas al Estado; reconstitución de las empresas estatales como Comibol, YPFB, Enfe, Ende, LAB y otras; no pago de la deuda externa; abolición del DS 21060; tanto el Referendo como la Asamblea Constituyente deben incluirse en la Constitución Política del Estado (CPE) como figuras jurídicas de pleno derecho del pueblo boliviano y de obligatorio cumplimiento para los gobernantes, "en la perspectiva de garantizar la participación de todos los sectores populares del campo y la ciudad en la definición de políticas de Estado" (el gobierno aceptó viabilizar la incorporación de ambas figuras jurídicas en el texto de la CPE, en pro de la "democracia participativa").

La respuesta del gobierno está dirigida a encasillar la solución de las demandas populares al avance de su plan de desviar el empuje revolucionario hacia el ámbito del referendo vinculante y la Asamblea Constituyente; de esta forma el impasse actual por vigencia del poder dual se irá diluyendo a favor del gobierno. La "democracia" ("participativa") se ha transformado en la consigna de reagrupamiento de toda la contrarrevolución, desde el imperialismo hasta el stalinismo (que plantea "rescatar la patria", "cambiar la democracia neoliberal por una democracia de masas", y para los sindicatos "extirpar las toxinas de la influencia de los partidos políticos", sin distinción de base política), hasta la izquierda oportunista de formación más reciente.

16 Mesa llegó a anunciar, demagógicamente, un gobierno sin los partidos políticos (que son objeto de un masivo repudio popular). Está perfectamente claro que todas las respuestas a la COB las deriva al Congreso, y toda su agenda depende del trabajo del Congreso, al que utiliza como medio de cooptación de la "izquierda" (MAS y MIP). En la respuesta de la COB se afirma: "Por la incapacidad de comprender al pueblo, se ha resuelto el cierre del Parlamento y la instalación de la Asamblea Popular, única instancia que puede conducir al pueblo a un cambio estructural del sistema político económico y social del país". Esto se complementa con otras afirmaciones: "La COB preparará en las bases el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y populares, desarrollando una amplia tarea de comunicación y concientización sobre las tareas y necesidades del pueblo

Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana bajarán a las bases para mantener reuniones permanentes de organización, análisis y preparación de las tareas a cumplirse en defensa de los intereses del pueblo boliviano. Estado de Emergencia y en el término de 20 días preparar acciones unitarias del movimiento popular, con los compañeros campesinos, gremiales, comerciantes de mercados, juntas vecinales y otras organizaciones sociales y laborales. Prepara la huelga general indefinida, que será con bloqueo de caminos

y paralización de las ciudades, donde los compañeros de los mercados organizaran el cierre total de los mercados del país. Constituir el Frente Político que sea capaz de recoger las inquietudes y necesidades políticas del pueblo, la misma que debe tener el respaldo de la COB, pero manteniendo la independencia política. Se determina reuniones permanentes de las organizaciones sindicales, como confederaciones, federaciones nacionales y sindicatos, como también de las CODs y CORs, para coordinar las acciones a ejecutarse". Si el planteo de Asamblea Popular, y el repudio al Parlamento, dejan clara la radicalización política boliviana, y el repudio popular a la farsa "democrática", el planteamiento de la COB (Asamblea Popular convocada por la COB y las organizaciones populares, y con exclusión de los partidos políticos de la oligarquía, con disolución del parlamento) es un planteo de "co-poder" con la burguesía. Al proponer tirar abajo al parlamento, sin derribar a Mesa y al conjunto del régimen político (incluidos el Poder Ejecutivo y Judicial, sin hablar de la disolución de los aparatos represivos y el armamento popular) se hace una propuesta de emparchar al régimen podrido a través de un pseudo "soviet" (a fines del siglo XIX, en su "Crítica al programa de Erfurt", Engels ridiculizó a los socialdemócratas alemanes, que proponían la instauración gradual del socialismo sin derribar a la monarquía y sin tocar los pilares del régimen político, planteando la República).

La COB, también, plantea la nacionalización del petróleo y las minas sin su ocupación; se trata, por lo tanto, de una nacionalización burguesa; además, no plantea el gobierno obrero-campesino; no plantea ninguna reivindicación de la masa campesina, lo que es una capitulación frente a los indigenistas. Debemos retomar la Tesis de Pulacayo: "Si los patronos se encuentran incapacitados de otorgar a sus esclavos un pedazo más de pan; si el capitalismo para subsistir se ve obligado a atacar el salario y las conquistas alcanzadas, si los capitalistas responden a todo intento reivindicacionista con la amenaza del cierre de sus instalaciones, no les queda a los trabajadores más recurso que ocupar las minas y tomar por su cuenta el manejo de la producción. La ocupación de las minas por sí misma sobrepasa el marco del capitalismo, puesto que plantea la cuestión de saber quién es el verdadero dueño de las minas: los capitalistas o los trabajadores. La ocupación no se debe confundir con la socialización de las minas, se trata solamente de evitar que el boicot patronal prospere, que los trabajadores sean condenados a morirse de hambre. La huelga con ocupación de minas se convierte en uno de los objetivos centrales de la FSTMB. Por tales proyecciones, es evidente que la ocupación de las minas adquiere categoría de medida ilegal. No podía ser de otro modo. Un paso que desde todo punto de vista supera los límites del capitalismo no pueden encontrar una legislación preestablecida. Sabemos que al ocupar las minas rompemos el derecho burgués y nos encaminamos a crear una nueva situación, que después los legisladores al servicio de los explotados se encargarán de introducirla en los códigos e intentarán estrangularla mediante reglamentaciones".

17 El planteo de la dirección de la COB complementa el oportunismo del MAS: en abril de 2004 habrá elecciones municipales; todas las encuestas dan la victoria al partido de Evo Morales, que quiere ubicar a "su gente" en los municipios, a lo que no pretende renunciar a cambio de una "aventura revolucionaria". Al contrarrevolucionario las elecciones le permiten instalar a su gente en el Estado existente; en cambio, una revolución destruye el aparato de ese Estado. En la tradición del movimiento obrero boliviano se definió que el parlamentarismo, para jugar un papel, debe subordinarse a la acción directa de las masas en los momentos de reflujo; cuando las masas abandonan la lucha y la burguesía se apropia de los puestos que aquéllas han dejado, puede el parlamentarismo colocarse en un primer plano.



De un modo general, el parlamento burgués no resuelve el problema fundamental de nuestra época: el destino de la propiedad privada. Tal destino será señalado por los trabajadores en las calles. Si bien no negamos la lucha parlamentaria, la sometemos a determinadas condiciones. Debemos llevar al parlamento a elementos revolucionarios probados, que se identifiquen con nuestra conducta. El parlamento debe ser convertido en tribuna revolucionaria. Sabemos que nuestros representantes serán una minoría, pero también que se encargarán de desenmascarar, desde el seno mismo de las Cámaras, las maniobras de la burguesía. Y, sobre todo, la lucha parlamentaria debe estar directamente ligada a la acción directa de masas. Diputados obreros y trabajadores deben actuar bajo una sola dirección: los principios revolucionarios definidos por el programa obrero.

18 Para encarar la próxima etapa de la lucha, es necesaria la reorganización de la clase obrera, en especial el sector minero. Las minas privatizadas (las más eficientes y productivas) producen el 30% de los minerales extraídos en Bolivia; 50.000 cooperativistas mineros, que laboran las menos productivas, obtienen otro 30%.

La situación de Huanuni, por ejemplo, es la siguiente: en la capitalización (privatización), la mina pasó a manos de capitalistas ingleses, la Allied Deals (RBG), que produjo una monumental estafa, incumpliendo todo compromiso, llevándose fortunas en estaño sin declarar, y destruyendo literalmente la empresa. En marzo de 2001, ante la agudización de los problemas en la mina, derivados de la crisis financiera de la RBG a nivel internacional, los mineros se levantaron, expulsaron a los ingleses Huanuni y con ellos a todo el poder político local. El contrato con RBG se rescindió a fines de 2002. Actualmente la com-

pañía minera Huanuni es la única que está en manos estatales, en una cogestión con el sindicato, y administrada por una intervención, a través de la cual, de los ingresos, el Estado se lleva tres veces más de lo que va para salarios. El salario medio de los mineros, que son 800, es de unos 100 dólares como máximo. El sindicato considera este esquema como una forma de "control obrero", y defiende la continuación sin límite de esta situación, es decir, se niega a que la empresa pase a manos de la Comibol. Mientras tanto, la RBG inició un juicio internacional contra el Estado boliviano.

En el pueblo de Huanuni los desocupados (cooperativistas) se dedican a explotar el mineral que está a cielo abierto, de muy bajo contenido de estaño, en condiciones muy precarias. Son cerca de 4 mil trabajadores. A nivel nacional, los cooperativistas son el 90 por ciento de los mineros bolivianos en la actualidad, y están organizados en otro sindicato, que fue recientemente incorporado a la COB.

Un factor fundamental que siquiera el ala izquierda de los mineros encara es la profunda contradicción de intereses que existe entre los cooperativistas, en cuanto es una actividad organizada de forma que los más enriquecidos, que lideran al sector y plantean un programa nacionalista burgués, acumulan de hecho capital y explotan a sus propios compañeros. Es necesario desarrollar una iniciativa que organice a los que apenas sobreviven con las cooperativas (es la actividad económica a la que se vuelcan "naturalmente" los desocupados ex-mineros, un verdadero ejército).

19 En distintos lugares del país, las organizaciones campesinas de base han comenzado una ola de ocupaciones de tierras y haciendas, en particular de personeros del gobierno caído. Los puntos más conflictivos se encuentran en el Altiplano paceño y en Cochabamba. En Sacaba (Cochabamba), los campesinos ocuparon la hacienda del ex ministro de Defensa de Sánchez de Lozada, el narcotraficante Carlos Sánchez Berzain. La ocupación fue calificada por los campesinos como un acto de "justicia comunitaria", ya que Sánchez Berzain es el responsable directo de las masacres de febrero, y de Warisata, El Alto y La Paz. El gobierno de Mesa recurrió al Ejército (que sólo puede intervenir por orden directa del Presidente) para desalojar a balazos a los ocupantes: seis campesinos resultaron heridos de bala. En Collana, en el Altiplano de La Paz, cientos de familias campesinas tomaron una hacienda de 2.000 hectáreas de la familia Iturralde, uno de cuyos miembros es la esposa de Sánchez de Lozada. Esta enorme hacienda no estaba siendo explotada. En represalia, el gobierno de Mesa detuvo a los secretarios generales del Sindicato Agrario de Collana. Otros puntos "conflictivos" están en Los Yungas, de La Paz, y en el Chaco, en el sur del país, donde los comunarios (campesinos organizados en comunas) han comenzado a rebasar a sus dirigentes del MST (Movimiento de Trabajadores sin Tierra), que aún confían en que el presidente Mesa resuelva el problema de la tierra.

El "hambre de tierras" en Bolivia es manifiesto. Más de 250.000 familias campesinas carecen de espacios de cultivo; otros cientos de miles están obligados a labrar un pedazo de tierra que ni siquiera asegura su propia alimentación. Mientras tanto, el 87% de las tierras de cultivo está en manos de grandes terratenientes y grupos capitalistas. Gracias al crédito oficial y las obras de infraestructura gubernamentales, este sector ha obtenido enormes superbeneficios en los últimos tiempos mediante el cultivo y la exportación de soja transgénica. Frente a la movilización campesina, el gobierno de Mesa se ha comprometido a "garantizar la seguridad jurídica de la propiedad". Para reforzar esas "garantías", ha puesto como ministro de Asuntos Agrarios y Campesinos a Diego Montenegro, gerente por más de una década de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo.

La privatización de las minas en 1985 provocó la expulsión de 50.000 mineros, muchos de los cuales se han "reconvertido" como cocaleros en la región del Chapare. La privatización petrolera, durante el anterior gobierno de Sánchez de Lozada, trajo una miseria y desocupación masivas al Altiplano y una relativa mejora (muy limitada) en las condiciones de vida de los trabajadores en la zona de explotación oriental. La desintegración nacional se manifiesta, también, en el campo: mientras en el occidente del país y en el altiplano miles de pequeños campesinos languidecen en el hambre y la miseria, en el oriente, un puñado de latifundistas monopolizan las tierras más ricas del país. La cuestión agraria es una de las claves políticas de la revolución boliviana. Pasando por encima de la "confianza" de sus direcciones en el gobierno de Mesa, los campesinos buscan resolver su "hambre de tierras" por la vía de la acción directa y la ocupación de las haciendas.

***Prensa Obrera*, edición en Internet**
(19 de febrero de 2004)

La crisis boliviana

Por Jorge Martín

La crisis política boliviana ha avanzado aún más con las denuncias de Evo Morales de que el líder parlamentario de su partido, Filemón Escobar, habría aceptado dinero para retirar a su bloque del Senado cuando se debatió la ley de inmunidad a las tropas norteamericanas que operan en Bolivia.

"Son platistas", disparó Evo, agregando que Escobar necesitaba la "plata" para cancelar la deuda que tenía con la ONG que financió su campaña electoral. Escobar respondió desconociendo la dirección de Evo Morales ("en el MAS no hay jefes"). Acusó al entorno de Morales de estar compuesto por "infiltrados" y reclamó "que la COB se haga cargo de la dirección del MAS" (*Bolpress*, 31/5/04). Desde octubre, el MAS es el principal sustento de la "gobernabilidad".

La trifulca parlamentaria es sólo uno de los aspectos de la crisis del MAS. La incorporación de la Central Obrera Regional (COR) y de las Juntas Vecinales de El Alto a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) fue una derrota política para el MAS, cuyo dirigente Juan Melendres no pudo hablar en la marcha del 24 de mayo debido a las chiflatinas, calificado por los trabajadores como "traidor" y "vendido". Los seguidores de Evo Morales en la dirección de la COR se habían jugado a fondo para impedir que se sumara a la huelga general y habían iniciado una "negociación" con el gobierno: "El diálogo con el gobierno, en pleno conflicto de los trabajadores del país, le cobró una alta factura al principal dirigente de los trabajadores alteños" (*Bolpress*, 25/5/04).

Huelga general y maniobras

En medio de la convulsión de marchas, movilizaciones y huelgas que diariamente sacude a Bolivia, el gobierno se ha dado una política.

Prometió tierras a los campesinos y logró levantar los bloqueos; derogó el decreto de "descentralización" y logró levantar la huelga de los trabajadores de la salud y vialidad. Ahora, logró dividir la única huelga nacional que continuaba, la de los maestros, mediante un acuerdo con los maestros rurales; aunque la de los maestros urbanos continúa, está en curso una negociación por intermedio del episcopado (*Bolpress*, 29/5/04).

En el desarrollo de esta política, Mesa tomó algunas medidas "audaces", como la nacionalización de la mina de Caracoles. A pesar de las protestas de grupos mineros ligados a Sánchez de Lozada, Mesa siguió adelante con la nacionalización. El objetivo del gobierno es cooptar a la dirección de la Federación Minera y quebrar a la COB.

La nacionalización fue clasificada por la FSTMB como "el renacimiento de la Comibol (la minera estatal)". Según la Federación "es urgente imponer al gobierno una política minero-metalúrgica que rescate nuestros recursos" (*Econoticias*, 23/5/04). Para la FSTMB, el gobierno de Mesa es un aliado potencial. Pero una nacionalización puntual, a cargo del Tesoro, no pasa de ser una maniobra... cara.

Estas maniobras, según *Bolpress* (29/5/04), "han perforado la huelga general". Aunque la COB ratificó en un ampliado la continuidad de las medidas y bloqueos, su secretario general declaró que "la COB no ha fracasado; lo que fracasó fue la conciencia de las masas" (ídem). El dirigente ni siquiera sabe olfatear la política del gobierno.

Frente único y boicot

En este marco, Mesa espera hacer pasar el referendo trucho.

Entre las organizaciones populares y de la izquierda boliviana no existe una claridad política para enfrentar a Mesa y su referendo, como lo revela la "Declaración del Encuentro de Movimientos Sociales" realizado en Cochabamba el 28 de mayo.

El Encuentro presenta al referendo como una abstracción y lo caracteriza como "una demanda de la sociedad civil y una conquista social impuesta por los movimientos sociales en octubre de 2002" (*Econoticias*, 30/5/04). Acusa a Mesa de desnaturalizarlo porque no plantea la pregunta de la nacionalización inmediata de los hidrocarburos. ¡Precisamente! La demanda popular es la nacionalización del gas y del petróleo. No es cierto que el referendo haya sido "una conquista": fue una maniobra para facilitar el ascenso de Mesa al gobierno, y permitirle a las direcciones políticas y sindicales "vender" al pueblo rebelado como una victoria la subida de Mesa.

"La primera tarea" –dice el Encuentro– es "recuperar el carácter democrático y popular del referendo mediante el cambio del contenido de las preguntas" (ídem). Pero para eso hay que derrocar a Mesa, es decir, al gobierno de la Repsol, de lo contrario se trata del intento de un nuevo compromiso. La tarea que se plantea es organizar el boicot popular y activo al referendo.

No es casual, entonces, que el Encuentro entienda la "nacionalización" como "la anulación, resolución o conversión de todos los contratos suscriptos con las empresas privadas" (ídem). Es decir, que admite nuevos contratos incluso antes de anular los existentes. Algunos sostienen que Bolivia podría pagar fácilmente las indemnizaciones a las petroleras, dadas sus inmensas reservas de gas y petróleo. Es decir que proponen pagar las indemnizaciones mediante una nueva deuda que tenga a esas reservas como garantía. Todas estas propuestas delatan que una parte de la oposición está buscando un arreglo con el gobierno. Esto debilita el boicot, y una derrota de éste sería una derrota de las masas. El Encuentro termina con una presión al gobierno para "el cambio de las preguntas".

Las organizaciones obreras deben superar esta división que parte principalmente de la pequeña burguesía, profundizando la movilización de los explotados. Para ello debe establecer un frente único por el boicot. Sólo así podrán candidatearse al poder político.

Sólo un gobierno obrero y campesino podrá dar satisfacción a las reivindicaciones de los campesinos por la tierra, la nacionalización efectiva y real del gas, el petróleo y los recursos mineros y garantizará la plena soberanía del pueblo a través de la convocatoria de una Constituyente soberana.

***Prensa Obrera*, 13 de junio de 2004**

La nueva etapa en Bolivia

Por Jorge Altamira

Con la asunción a la presidencia del titular de la Corte Suprema, el poder político en Bolivia se ha convertido en una nulidad perfecta. El escaso mandato de gobierno que tenía Mesa ha quedado reducido a la nada. El presidente del Senado había acariciado la idea de reemplazar a Mesa y desatar una represión en gran escala, pero la tentativa fue ahogada en la raíz, de un lado por una gran movilización popular, que rodeó la ciudad de Sucre, donde había ido a refugiarse el Congreso, y del otro lado, por la decisión del gobierno de Bush y de sus cómplices de Argentina y Brasil, de que todavía hay espacio, tiempo y recursos para dominar el levantamiento popular por medios democratizantes. Influyó en esta orientación la incertidumbre acerca de si el ejército sería capaz de ejercer el gobierno en forma duradera, en el caso de un golpe. La viabilidad de esta intentona democratizante quedó planteada a partir de la seguridad que dio Evo Morales de que apoyaría con una tregua el pasaje del gobierno al presidente de la Corte. La situación política del momento en Bolivia se caracteriza, precisamente, por el estado de tregua.

El nuevo presidente, Rodríguez Veltzé, debería en principio cumplir la función de casero durante el período que seguiría a la convocatoria de elecciones generales. Esta tarea no resulta, sin embargo, tan simple, porque una cosa es que mantenga al Congreso en funciones y otra que lo disuelva. El Congreso es la cueva golpista y el refugio de la derecha boliviana, de modo que su continuidad es una invitación a la conspiración permanente. Quedaría planteada la enorme contradicción de un Congreso sin mandato popular que, sin embargo, conserva la facultad de legislar y, por lo tanto, de gobernar, y del otro lado, un Presidente que ha surgido por encima del Congreso pero que no puede hacer ni una cosa, ni la otra. Si el Congreso trucho sigue en funciones hasta las elecciones podría convocar a una Constituyente en sus propios términos o con sus propias condiciones e incluso autorizar los referendos autonómicos que reclaman las oligarquías de Santa Cruz. Por eso sólo la disolución del Congreso allanaría el camino para las elecciones generales. Pero si el nuevo Presidente demuestra que no tiene capacidad para hacerlo, esa tarea elemental quedaría a cargo de las masas que se han replegado.

Todos los temas de la agenda nacional han quedado desplazados por la posibilidad de una convocatoria a elecciones generales. Evo Morales ha dicho que la Constituyente deberá ser convocada por el gobierno que surja de esas elecciones. Las cuestiones de las autonomías y de los hidrocarburos quedarían subordinadas a la Constituyente. La encrucijada boliviana se ha convertido en una muñeca rusa: del reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos se pasó a un referendo que estableció la necesidad de una ley que modificara los contratos vigentes; la impasse con la ley derivó en el reclamo de la Constituyente; el tema de la Constituyente suscitó el reclamo de que antes se votaran las autonomías y la impasse en todos estos asuntos provocó la caída de Mesa y la salida de las elecciones. Ahora se dice que el gobierno que surja de ellas convocaría a la Constituyente, que decidiría sobre el petróleo y las autonomías. No hacen falta las encuestas de opinión, sin embargo, para saber que ningún partido conquistaría una mayoría electoral para presidente ni en el Parlamento. Han vestido a la muñeca rusa para desvestirla de nuevo.

La encrucijada boliviana se reduce a dos cuestiones de fondo. En primer lugar, si el imperialismo se empeña a fondo en la salida democratizante y organiza un entendimiento de Evo Morales con una futura coalición con los partidos del régimen. En este caso debería admitir algunas modificaciones a las condiciones leoninas de los contratos de hidrocarburos que firmó el derrocado Sánchez de Lozada. No está claro que el imperialismo adopte esta vía, que exigiría un entendimiento no solamente con Kirchner y Lula sino con Chávez. Para contener la belicosidad de los explotados de Bolivia se deberá recurrir a todas las cartas de la diplomacia internacional. Si el imperialismo se empeña a fondo en la vía democratizante (y para ello deberá dejar en suspenso algunas rivalidades interimperialistas, lo cual es lo más difícil), las masas bolivianas deberán atravesar una nueva experiencia política del tipo que vivieron con la UDP del nacionalista Siles Zuazo, en los '80, que culminó en un completo fracaso. Ninguna tentativa democratizante podrá soslayar que, para las masas bolivianas, los hidrocarburos se han convertido en una cuestión de vida o muerte. Las sucesivas victorias populares contra la privatización del agua y otros recursos han desarrollado una conciencia nacional que ya no podrá ser erradicada sin una contrarrevolución.

La otra cuestión de fondo son, precisamente, las masas. La larga crisis ha dejado al desnudo el rol de inmensa bisagra de Evo Morales, entre los trabajadores y el imperialismo. Evo Morales sigue una estrategia perfectamente definida, asesorado por un grupo de profesores arribistas, que se reduce a impedir que cualquier tentativa popular se salga de los marcos democráticos. La resistencia que empeñó contra la pretensión de la derecha de hacer anteceder los referendos autonómicos a la Constituyente y, luego, la forma como abortó el zarpazo que intentó el presidente del Senado, Vaca Diez, para quedarse con el gobierno, han puesto de manifiesto una conciencia política y una estrategia muy claras, que no flaquearon a sabiendas de que un golpe parlamentario podía desatar una insurrección.

La evolución política de la lucha popular depende de los distintos escenarios que se presenten; si el Congreso no es disuelto, por ejemplo, podría crearse una situación revolucionaria en pocos días. Pero si el imperialismo se empeña a fondo en un remedo democrático será necesaria una larga tarea de esclarecimiento político para forjar una vanguardia revolucionaria que pueda ofrecer una alternativa de poder a los políticos del capitalismo.

***Prensa Obrera*, 16 de junio de 2005**

Campaña en defensa de la revolución boliviana

Por la nacionalización del petróleo en toda América Latina

Por Jorge Altamira



Los acontecimientos bolivianos han dejado muy en claro que la lucha consecuente por la nacionalización de los recursos naturales estratégicos plantea la revolución social. La nacionalización del petróleo y del gas, en Bolivia, es una condición absoluta para su desarrollo nacional y al mismo tiempo incompatible con la dominación del imperialismo y del gran capital. La cuestión de los hidrocarburos es al mismo tiempo, sin embargo, una cuestión internacional. Hay por lo menos dos guerras internacionales que se están librando por el control de ese recurso, en Irak y en Chechenia. El petróleo ha sido, igualmente, el protagonista indiscutido de la crisis política en Rusia y en la ex zona soviética, como Uzbekistán o Kirguistán. Cuando no se trata del control de su extracción, se trata del transporte del fluido, por oleoductos y gasoductos. La reciente crisis en Ucrania no derivó en una guerra civil cuando la llamada 'rebelión naranja' pactó con Putin, por recomendación de Washington y de la Unión Europea, la continuidad de los gasoductos rusos que atraviesan Ucrania. La cuestión palestina es también, al menos en última instancia, una cuestión petrolera, porque la instalación del sionismo en Medio Oriente ha tenido por objetivo servir de cuña del imperialismo en el mundo árabe y en el Golfo Pérsico. La completa privatización del petróleo y del gas boliviano, bajo el gobierno de Sánchez de Lozada, se inscribe en una ofensiva privatizadora planetaria, en particular por parte del imperialismo yanqui, para desmantelar las estatizaciones petroleras que tuvieron lugar en distintas etapas con posterioridad a la última guerra mundial. La cuestión boliviana no puede ignorar el carácter internacional de la lucha por la nacionalización.

En América Latina, los hidrocarburos han pasado al centro de la escena por más de un motivo, aunque la cuestión boliviana se encuentra al frente. En 2002, el imperialismo organizó un sabotaje de dos largos meses contra Venezuela, que tenía por objeto, precisamente, dejar en pie los planes de vaciamiento de PDVSA que habían dejado en marcha los gobiernos que antecedieron al de Chávez. A mediados de los '90, el gobierno de Menem, en Argentina, con la complicidad del actual presidente Kirchner, entonces gobernador de la provincia petrolera de Santa Cruz, remató virtualmente la empresa YPF, sobre la base de una valuación del barril de petróleo de diez dólares. En Colombia, la defensa de la privatización a ultranza de la explotación privada del petróleo ocupa un lugar tanto o más importante que cualquiera de los otros objetivos contrainsurgentes del Estado. En Ecuador, los recursos excedentes de la empresa estatal de petróleo iban a parar hasta hace pocas semanas a un fondo especial para el pago de la deuda externa; el procedimiento era, al mismo tiempo, objetivamente, un modo de vaciar a la empresa estatal y privatizar por completo la explotación del recurso. En Perú, como lo demuestra el proyecto Camisea, la explotación del gas y del petróleo se va transformando en un negocio fundamentalmente privado. En Brasil, Petrobras, aunque estatal, se encuentra controlada por la Bolsa, donde cotizan sus acciones; la cuarta parte del capital pertenece a fondos norteamericanos. Independientemente de esto, la empresa brasileña emula lo que se intentó hacer con PDVSA, o sea usarla como canal de salida de capital al exterior por medio de su 'internacionalización'. Por último, está al frente la gran batalla por la privatización de la mexicana PeMex, a la que se la ha hecho incurrir en los déficits monstruosos que son el preludio de la privatización. Para esto seguramente hace falta que en México gobierne la centroizquierda, lo que ocurrirá el año que viene con López Obrador, del PRD (aunque él diga lo contrario). Incluso fuera de América Latina, la codicia del capital por el gas se ha acrecentado como consecuencia de la posibilidad de enviarlo licuado al mercado de los Estados Unidos. Es lo que hará Perú a partir de Camisea y lo que estaba previsto para Bolivia, a través de un puerto chileno.

La lucha por los recursos bolivianos decidirá la que se libra en toda América Latina. En este aspecto, es necesario destacar que las experiencias estatistas burguesas en la materia y los gobiernos nacionalistas han operado en la crisis boliviana a favor del imperialismo y de la privatización. El papel de Petrobras y del gobierno capitalista de Lula contra la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos está muy por delante de lo que haya hecho el gobierno de Bush. La burguesía brasileña goza de un

poder de arbitraje sin igual, porque influencia como ningún otro la política de la provincia de Santa Cruz de la Sierra e incluso sus movimientos pretendidamente secesionistas. Petrobras estuvo a la cabeza de las presiones contra la nacionalización y fue la que luego viabilizó los acuerdos políticos que pusieron fin a la crisis que provocó la caída de Mesa, cuando decidió, la primera, allanarse a la nueva Ley de Hidrocarburos de Bolivia. Un papel igual jugó la española Repsol, que no actúa sino en connivencia con Kirchner, y Techint, que participa del negocio del fluido por medio de la fabricación de los caños sin costura para los ductos, aunque también tiene inversiones gasíferas. Una función de extorsión a Bolivia cumplió el gobierno peruano de Toledo, que reunió a los ministros del Cono Sur del continente para discutir la posibilidad de que Camisea sustituya a Bolivia en la provisión de gas para Chile y Argentina. La nacionalización del petróleo boliviano plantea, entonces, una lucha continental, que al mismo tiempo no puede dejar de ser una lucha por la nacionalización integral del petróleo de Argentina, Perú y Brasil y la gestión obrera de los hidrocarburos.

El rol de cada cual en la crisis boliviana pone de manifiesto el carácter ilusorio de la propuesta del presidente Chávez, de conseguir la independencia energética de América del Sur por medio de una alianza de PDVSA, Petrobras y Enarsa, un engendro de Kirchner para desviar recursos del presupuesto nacional hacia una caja controlada por sus compinches. Chávez quiere un Petrosur saltándose la tarea de la expropiación de los pulpos petroleros y su transformación en empresas de gestión obrera. Una reciente tentativa de formar Petrocaribe terminó en fracaso ante la oposición de Trinidad y Tobago, seguramente por exigencia de los yanquis y los ingleses. Aunque Chávez recuperó la autonomía nacional para PDVSA (en esto consiste un aspecto fundamental del contenido nacional del chavismo), es necesario señalar que los pulpos internacionales ya son responsables de la tercera parte de la producción de petróleo en Venezuela y los que quedarían a cargo de la explotación del combustible pesado del Orinoco, a partir de nuevos procedimientos de destilación. Una inversión de la tendencia internacional de los precios del petróleo colocaría seguramente a Venezuela bajo una dependencia, incluso extrema, de las inversiones de las compañías extranjeras. Todo este encuadre explica que Chávez se haya convertido en el mentor de Evo Morales en la tarea de oponerse a la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, a la cual ha opuesto el control de los pulpos en boca de pozo por una inexistente YPF boliviana. La línea de compromiso con el imperialismo que ha seguido Evo Morales corresponde integralmente a la política del mismo Chávez. Pero con esta política, ni Venezuela conseguirá la mentada independencia energética de América Latina, ni Bolivia sus hidrocarburos.

Una vez colocada la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia en su contexto real, resulta claro que una campaña por este objetivo debe tener, por un lado, un carácter continental y hasta internacional, y que su contenido, por el otro lado, no puede ser otro que la nacionalización de los hidrocarburos en toda América Latina y en cada uno de sus países, entendiendo por esto: a) la confiscación de los pulpos; b) la expulsión de las camarillas capitalistas de la dirección de las empresas total o parcialmente estatales; c) el control y la gestión obreros. La apropiación de los recursos energéticos por los explotados latinoamericanos significa ni más ni menos que controlar los medios que harían posible una gigantesca industrialización de América Latina. En torno a la nacionalización de los hidrocarburos en todo el continente se pondría en marcha el propio objetivo de la unidad política continental, la Unión Socialista de América Latina.

***El Obrero Internacional* N° 3, julio de 2005**

Llamamos a votar por Evo Morales y el MAS

Por Jorge Altamira



El 18 de diciembre tendrán lugar las elecciones generales en Bolivia. De acuerdo con las encuestas, Evo Morales encabeza la intención de votos para la presidencia, con un 32%. Distante se encuentra el candidato de la derecha petrolera, 'Tuto' Quiroga, con el 23%, y más atrás, con el 16%, Doria Medina, un empresario que ha acumulado una enorme fortuna. De acuerdo a la ley boliviana, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la decisión queda en manos del Congreso. Doria Medina habría adelantado que sus diputados votarían por Evo. Evo Morales rechazó este apoyo y reclamó a la ciudadanía que le dé la mayoría absoluta en las urnas. Parece claro que si la distancia entre Evo y Quiroga se acortara, la presión de los sectores capitalistas y de la Embajada norteamericana sería suficiente para reunir los votos necesarios en el parlamento para bloquear la victoria de Evo Morales.

Toda América Latina está pendiente de los resultados de las elecciones bolivianas y todavía más lo está Estados Unidos. El pasado 20 de noviembre, la revista del *New York Times* le dedicó varias páginas a la posibilidad de una victoria del MAS. El autor de la extensa nota ("¿La segunda llegada del Che?") cita de entrada la posición sobre Bolivia del subsecretario de Defensa norteamericano para el Hemisferio Occidental, Rogelio Pardo-Maurer, uno de los segundos de Rumsfeld, en ocasión de una reciente conferencia en el Hudson Institute. En opinión de este funcionario del Pentágono, "ustedes tienen una revolución en marcha en Bolivia, una revolución que, potencialmente, podría tener consecuencias de alcance tan amplio como la revolución cubana de 1959". Lo que está ocurriendo ahora en Bolivia, precisó todavía más, "podría tener repercusiones en América Latina y más allá con las que ustedes deberán enfrentarse por el resto de vuestras vidas (...) la bronca urbana y el resentimiento étnico se han combinado en una fuerza que está buscando el cambio en Bolivia".

Una etapa revolucionaria

La tensión que provocan las elecciones bolivianas tiene que ver con el hecho de que Bolivia atraviesa, desde la insurrección de octubre de 2003, una etapa revolucionaria. Es una etapa que no surgió, de modo alguno, de repente, sino que fue la culminación de luchas de masas de características excepcionales en el campo y con relación a la estatización del servicio de agua, en primer lugar en Cochabamba, explotado por la norteamericana Bechtel.

El eje del proceso revolucionario es la nacionalización del petróleo y del gas. En las vísperas de la insurrección de 2003, el gobierno de entonces se aprestaba a cerrar un acuerdo de exportación de combustibles a México y Estados Unidos, a través de puertos chilenos, que serían reconvertidos en gas licuado en su destino. Para la masa del pueblo boliviano la consumación del proyecto significa una gigantesca confiscación de recursos y el entierro definitivo de cualquier posibilidad de progreso social. La ínfima renta prevista en los contratos petroleros apenas alcanzaría para colmar el déficit fiscal boliviano durante un corto período de tiempo.

La insurrección volteó al presidente Sánchez de Lozada, pero no produjo un cambio del poder político. Asumió el vicepresidente, Carlos Mesa, y se mantuvo sin modificaciones el Congreso. Para alcanzar este resultado se produjo, en primer lugar, una alianza política que no había tenido precedentes, entre los gobiernos de Bush, Kirchner y Lula. Los dos últimos sacaron al carnicero de Irak del tremendo impasse que enfrentaba su propósito de derrotar la insurrección mediante una represión militar que estaba condenada al fracaso y que hubiera seguramente puesto fin a las fuerzas armadas y al Estado boliviano. En Bolivia se manifestó agudamente la crisis internacional que le provoca al imperialismo yanqui su empantanamiento en Irak. La 'mediación' de Lula y Kirchner 'canjeó' la intervención militar por el reaseguro de una salida 'constitucional'. A esta salida se allanaron todas las direcciones populares de Bolivia, y más que ninguno Evo Morales –el cual, por otra parte, había dilatado extraordinariamente su re-

greso al país por una estadía en Europa. El pretexto oficial del arreglo fue la aceptación, por parte de Mesa, de una "agenda de octubre", que el novato presidente no estaba dispuesto a cumplir, porque planteaba, aunque vagamente, la nacionalización de los hidrocarburos.

La situación política que emergió de la insurrección de octubre no podía ser más excepcional: en el plano internacional, el imperialismo yanqui cedía su primacía absoluta sobre Bolivia a la tutela oficial de dos gobiernos centroizquierdistas que ya habían dado sus pruebas de confianza con el envío de una fuerza militar a Haití; en el plano nacional, se armaba un cogobierno de hecho entre Mesa y el MAS, que además ya tenía una bancada importante en el Congreso. El fruto de este cogobierno fue el referendo de mediados de 2004 que desvirtuó la reivindicación de la nacionalización del petróleo (confiscación de los pulpos) por la reivindicación del dominio estatal del subsuelo boliviano. El referendo dejó planteada una renegociación de los contratos vigentes (suba de los impuestos a las petroleras) y la 'refundación' de YPFB, en calidad de empresa estatal 'testigo'. Sin embargo, la negativa de Mesa a promulgar las leyes que ponían en marcha la renegociación, debido a la completa oposición de los pulpos del petróleo, determinó una nueva insurrección, en junio pasado. Nuevamente fracasó el intento, esta vez de un sector parlamentario que trasladó el Congreso a Sucre, de imponer un gobierno apoyado en un golpe militar; nuevamente intervino la mediación de Lula y de Kirchner. Nuevamente, la intervención de Evo Morales fue decisiva (aun más que en octubre de 2003): de un lado para contener el golpe militar, apelando a la movilización parcial del pueblo; del otro, para poner fin a esa movilización parcial, una vez que hubo logrado el llamado a elecciones. Las elecciones que tendrán lugar dentro de poco, convocadas por un nuevo presidente, puramente interino, no son, por lo tanto, una maniobra artificial sino la resultante de un proceso político concreto; son la expresión, tanto de un 'desvío' de la tendencia insurreccional del pueblo (que sigue latente como 'desvío'), como la expresión de la incapacidad del imperialismo de derrotar a las masas por las vías tradicionales. Las elecciones son la expresión de un empate político entre el imperialismo tomado como conjunto (petroleras, gobierno norteamericano, Lula, Kirchner, partidos tradicionales), por una parte, y las masas, por la otra.

En junio pasado decíamos en *Prensa Obrera:* "La encrucijada boliviana se ha convertido en una muñeca rusa; del reclamo de la nacionalización del petróleo se pasó a un referendo que estableció la necesidad de una ley que modificara los contratos vigentes; la impasse con la ley derivó en el reclamo de una Constituyente; el tema de la Constituyente suscitó el reclamo de que antes se votaran las autonomías [el disfraz para mantener los hidrocarburos privatizados en los distritos de Tarija y Santa Cruz, J.A.] y la impasse en todos estos asuntos provocó la caída de Mesa y la salida de las elecciones. Ahora se dice que el gobierno que surja de ellas convocaría a la Constituyente, que decidiría sobre el petróleo y las autonomías (...) (pero) ningún candidato conseguiría una mayoría [absoluta, J.A.] para presidente (...) Han vestido a la muñeca rusa para desvestirla de nuevo". Como lo recuerda ahora *The Financial Times* (16/11/05), "El próximo gobierno de Bolivia quedará encargado de renegociar los contratos con los inversores extranjeros del sector del gas, luego que la administración actual fracasó en cambiar los arreglos vigentes en el plazo establecido. [Esto] puede colocar las negociaciones en las manos de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo...".

¿Qué plantea Evo Morales?

Desde los prolegómenos de la insurrección de octubre de 2003, Evo Morales ha seguido una política extremadamente consciente, no trasunta una pizca de improvisación. Su consigna suprema es evitar una revolución social. En este menester ha revelado una habilidad poco vista; en la crisis de junio pasado, supo cabalgar entre la resistencia a una tentativa golpista de un ala del Congreso y la contención de una insurrección popular.

"El programa del MAS es mucho más moderado de lo que sus seguidores desearían", dice el autor de la larga nota del *New York Times.* Con relación a la nacionalización del petróleo, agrega, Evo Morales "me comentó que 'Brasil es un modelo interesante' de cooperación del Estado y el sector privado, y lo mismo es China". El periodista señala más adelante en su artículo, que "los seguidores del MAS argumentan que si Petrobras puede prosperar, ¿por qué no podría Bolivia adoptar una estrategia similar y florecer como consecuencia de ello?". Pero Petrobras es el resultado de un largo desarrollo histórico, mientras que a YPFB habría que reconstruirla con una enorme inyección de capital para que pudiera jugar, por lo menos, el rol bastante pequeño que tuvo en el pasado. Por otro lado, Petrobras no es siquiera una empresa estatal, sino una empresa privada, con participación mayoritaria del Estado, que está controlada por la Bolsa y que cuenta con una participación del orden del 40% de los fondos de inversión internacionales. Un economista que trabaja para el MAS dice que se pretende que Bolivia pueda obtener "un precio justo (por su petróleo y su gas natural) para pagar su industrialización", pero Petrobras no contribuye a la industrialización de Brasil, ya que opera como una empresa internacionalizada, que cobra los precios mundiales y destina las ganancias a inversiones en el extranjero. Para llegar al 'status' de Petrobras, una YPFB reconstruida debería transformarse en la principal productora del país, es decir, partir de una base de capital gigantesca. En suma, incluso para desarrollar un capitalismo de Estado en base a la explotación del petróleo, el Estado boliviano debería, primero, concentrar los recursos de esa explotación en sus manos, que hoy son un monopolio privado. En realidad, el planteo del MAS se reduce a la necesidad de tener una empresa estatal que recaude una porción mayor de la renta petrolera que producen los pulpos internacionales. En el marco del débil Estado boliviano, una empresa de estas características no tendría siquiera una capacidad efectiva de control sobre la producción privada.

García Linera, un ex guerrillero que se transformó en teórico de la autogestión y es candidato a vicepresidente por el MAS, ha dejado bien claro que "el socialismo no es viable en Bolivia", esto porque "el 70% de los trabajadores en las ciudades son de economía familiar". "Usted no construye", le dijo a *Econoticias* (30/8/05), "el socialismo sobre la base del 95% de la población agrícola que vive en una economía tradicional comunitaria". García Linera propone, como alternativa al socialismo supuestamente inviable, "un tipo de capitalismo andino", donde "las potencialidades familiares, indígenas, campesinas, son equili-

bradas, son articuladas en torno a un proyecto de desarrollo nacional y de modernización productiva". El modelo para Bolivia, agrega, es "un Estado fuerte en hidrocarburos, en inversión extranjera, en inversión privada local, economía familiar artesanal y microempresarial, y economía comunitaria. No es ni siquiera", remata, "un régimen mixto".

García Linera, como se ve, concibe la transformación de Bolivia en los marcos locales –no cree, como sí lo cree el subsecretario de Rumsfeld, ya citado, que el proceso revolucionario actual tendrá consecuencias incluso más allá de América Latina. Pero un socialismo autárquico no solamente es inviable en Bolivia, lo es más todavía en Estados Unidos, donde cualquier ataque decisivo a la propiedad capitalista haría estallar al conjunto de la economía y política mundiales. García Linera postula un capitalismo 'andino', lo cual es un contrasentido, porque anticipa que no pretende alcanzar al capitalismo desarrollado, pero tampoco escapar a la presión que éste ejerce por su monopolio mundial. Plantea servirse de un Estado fuerte y de la inversión extranjera para congelar la economía precapitalista de Bolivia, no para hacerla transitar a un estado histórico superior; en esto consiste el indigenismo del MAS. Estamos, entonces, ante un programa históricamente reaccionario, ni siquiera ante uno reformista. Un programa que parece no tener en cuenta que un 'Estado fuerte', en Bolivia, es imposible si no se erige a costa del extraordinario capital extranjero, cuyo dominio no deja espacio para otra cosa.

Articulado al planteo de "nacionalizar los recursos" sin confiscar a los pulpos, un documento del Segundo Encuentro Social Alternativo (septiembre de 2005) plantea convertir a Bolivia en un "eje energético" sudamericano, que se parece, por un lado, al Petrosur que postula Hugo Chávez, y a la "integración energética" que impulsan Kirchner y Lula, o sea Techint (tubos y gasoductos), Repsol y Petrobras. El 'capitalismo andino' se extiende aquí un poco más en la geografía, pero apunta a un negocio con los monopolios internacionales del petróleo –no a la nacionalización del petróleo en toda América Latina y a la unidad socialista latinoamericana. El 'eje energético' intenta superar la debilidad del planteo de 'refundar a YPFB' para asociarla con los pulpos con una propuesta de alianza internacional, que los propios monopolios se encuentran promoviendo en la actualidad. Aun antes del Encuentro Alternativo, el saqueo económico de Bolivia ya tenía puesta, por parte de los monopolios, la etiqueta del 'eje energético'.

Todo sumado, la arquitectura teórica de García Linera (o sea, el programa del MAS) apunta a justificar el abandono de la nacionalización del petróleo por una renegociación de los contratos con los pulpos petroleros. Lula no solamente acaba de desear la victoria de Evo Morales, en la reciente reunión de Puerto Iguazú, sino que mucho antes Petrobras ya había dicho que estaba disponible para una renegociación. Como le observó al *New York Times* el ex funcionario del Banco Mundial Joseph Stiglitz, son numerosos los pulpos petroleros que vendrían a Bolivia a ocupar el lugar de aquellos que no acepten una revisión de los acuerdos leoninos que impusieron a los gobiernos anteriores. No sería, de todos modos, el caso de Repsol, que no tiene el menor propósito de irse de Bolivia, la cual cuenta a su favor con los sólidos lazos que ha tejido con Lula, Chávez y Kirchner, y que puede sacar a relucir la 'amistad' entre Evo Morales y Rodríguez Zapatero.

El confuso programa del MAS es la expresión de su impasse política, o sea de la pretensión de amalgamar las violentas contradicciones sociales del país. Constituye un intento de la raquítica pequeña burguesía profesional, que tiende a ser cooptada por las multinacionales o sus dependencias secundarias, de imponerle su salida a las masas del Altiplano que viven en la miseria. En definitiva, no intenta más que teorizar un tránsito del período revolucionario a una etapa de características democratizantes, tutelada por las burguesías de los países vecinos y el imperialismo.

Tomar partido en una gran crisis política

Las elecciones del próximo 18 de diciembre (2005) no son una rutina determinada por la Constitución, sino el marco de una crisis política. Las crisis políticas no vienen en envases uniformes; en ocasiones se manifiestan en un proceso electoral. Es el caso de Bolivia. Para vestir de nuevo a la muñeca rusa (o sea resolver la cuestión del petróleo y de las autonomías y producir una mejora social) Bolivia deberá pasar por nuevos cimbronazos, que pueden poner a las masas de nuevo en movimiento.

No es indiferente, ni para las masas ni para el imperialismo, que gane Evo Morales o que gane Quiroga. El corresponsal del *Financial Times* (18/11/05) cuenta que Morales es recibido en los pueblos campesinos como "un heroico conquistador antiguo". Obviamente, se refiere, no a Carlomagno sino a Tupac Katari. Dice también que en los altiplanos que rodean a Cochabamba, lo reciben multitudes de miles de personas adornadas con guirnaldas de flores y hasta hojas de coca. "Las grandes expectativas que ha creado su candidatura pueden amenazar su capacidad para gobernar", dice el enviado. Como se ve, no se trata de las expectativas electorales habituales, porque se inscriben en una confrontación excepcional que no encuentra salida. Cuando Morales dice en sus actos: "'Gobernaremos como dueños de nuestro país y nacionalizaremos nuestros recursos naturales'... la multitud responde con un aplauso salvaje" (*Financial Times*).

Por el lado del imperialismo, Thomas Shannon, el secretario de Estado para asuntos hemisféricos, "ha adoptado un bajo perfil", dice el *New York Times*, que agrega, sin embargo, que no es la posición prevaleciente. Numerosos comentarios de prensa han adjudicado la penetración militar norteamericana reciente en Paraguay a la situación boliviana. Para el gobierno de Bush, "Morales responde a Chávez", que es lo más cercano a un anatema del imperialismo contra el boliviano. Sea como fuere, los yanquis sólo podrían aceptar a Evo Morales como un recurso último e incluso transitorio. Más allá de las contradicciones entre los limitados planteos del MAS y los reclamos de las petroleras; e incluso más allá del trabajo de contención realizado sistemáticamente por Morales, los yanquis no pueden considerar como una salida propia o estable la llegada al gobierno de un dirigente sin aparato, sometido a una enorme presión popular, en el cuadro de un Estado débil más debilitado que nunca. Aunque sigan trabajando para un golpe o incluso para azuzar una secesión de los departamentos de Tarija y Santa Cruz, los yanquis no podrían jugar estas cartas de inmediato por un conjunto de factores adversos, pero antes que nada porque no se lo permite su situación internacional ni la posición política actual de Argentina y Brasil. Para separar a Santa Cruz habría que contar con el apoyo de Brasil. Añadamos que en Santa Cruz se es-

tá desarrollando un fuerte movimiento de masas contra la oligarquía local, que defiende la unidad política de Bolivia.

En el choque, dentro de dos domingos, entre la candidatura del MAS y el imperialismo y la oligarquía local, la única posición revolucionaria admisible es del lado del MAS contra el imperialismo, pero no con la política o la estrategia del MAS sino con una política y una estrategia realmente antiimperialistas. Esta es la peculiaridad de las elecciones próximas en Bolivia. Los partidos, tendencias u organizaciones de diferente tipo, que no han logrado ocupar un lugar de lucha en el escenario electoral, por las razones que fuere, no pueden valerse de su propia incapacidad para desconocer el terreno que está planteado. En el caso de Bolivia, en particular, los sectores que se encuentran a la izquierda del MAS han fracasado políticamente en forma completa. No pueden presentar reclamos; sólo pueden recuperarse o resarcirse orientando en esta crisis a las masas que van a votar al MAS, o sea hacerlo activamente y con un programa revolucionario. Al 'capitalismo andino' del MAS hay que oponerle la confiscación de los pulpos petroleros y la gestión obrera de la industria; no la articulación del precapitalismo con el capital extranjero sino la asociación de las economías precapitalistas a través de un plan único articulado por un gobierno de trabajadores. En oposición al autonomismo, que en las presentes circunstancias sirve incluso a las pretensiones de las oligarquías petroleras, debería reivindicarse la formación de gobiernos locales y departamentales de obreros y campesinos.

Qué gobierno, qué Constituyente

Una victoria del MAS sería un golpe al imperialismo, incluso si ese golpe está condicionado a las perspectivas que abre esa victoria. Llamamos a votar por el MAS. No amplía los márgenes de maniobra de gobiernos como los de Lula y de Kirchner, sino que los estrecha de cara a la lucha de los trabajadores de sus países. Ensancha el campo de la lucha de clases en América Latina. Reforzaría sí al gobierno de Chávez frente al imperialismo, porque Chávez se encuentra en un choque con el imperialismo, pero no lo fortalecería en su propósito de reducir la actividad política independiente de las masas venezolanas. Ante la amenaza de que esta victoria sea desconocida por medio de fraudes o golpes, llamamos al armamento de los trabajadores para defender el resultado electoral.

Los Lula y los Kirchner dicen desear la victoria de Evo obligados por las circunstancias; en otras palabras, hacen virtud de la necesidad. Pero Lula y Kirchner se expresan de este modo porque se aprestan a condicionar una victoria del MAS a los acuerdos parlamentarios (con la venia tácita del imperialismo). Si no es por medio de un gobierno de coalición, será por medio de un gobierno 'plural' que integre a las 'fuerzas vivas' y a los 'técnicos'. Lula ofrecerá su 'modelo' de gobierno de colaboración de clases con la oligarquía y el gran capital. La fase de la crisis política que inaugurará el reconocimiento de la presidencia de Evo Morales exigirá un planteo concreto de lucha contra cualquier coalición abierta o disfrazada con la burguesía o con la pequeña que actúa dentro de los círculos imperialistas. La denuncia contra cualquier forma de gobierno de coalición deberá ir acompañada con la consigna de formar asambleas populares y comités de fincas, talleres y minas. Dada la presión excepcional que la inquietud popular está ejerciendo en las fuerzas armadas, en especial en los cuarteles de Santa Cruz, donde hay resistencia a la agitación secesionista, es fundamental una actividad política concreta para la conquista práctica de los militares de base contra toda infiltración derechista a guisa de gobierno de coalición o 'plural'.

Evo Morales ya ha dicho que convocaría a la Asamblea Constituyente para resolver la cuestión de la soberanía energética y de las autonomías. Sin embargo, para que esta Constituyente pueda convocarse en una perspectiva revolucionaria sería necesario, en primer lugar, que el gobierno que la convoca tome de inmediato medidas revolucionarias –como nacionalizar realmente el petróleo, reestatizar la previsión social ('capitalización'), aumentar salarios y jubilaciones, establecer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, recuperar el servicio de agua. Como el MAS no tiene la menor intención de ejercer su mandato de este modo, la Constituyente podría servir para estrangular el proceso revolucionario. Diversos sectores populares, que tienen conciencia de esta situación, plantean que la Constituyente debe excluir a los diputados que serán elegidos el 18; debe otorgar una representación calificada del 65% a los candidatos indígenas y un 15% a los obreros, o sea, a los que designen como candidatos las bases sindicales. En cualquier caso, debemos criticar que se espere a la Constituyente para tomar medidas de confiscación de los pulpos y el control obrero, y sobre esta base preparar a las masas, mediante la agitación y organización, para actuar frente a una próxima Constituyente.

El llamado a votar a Morales y al MAS, con este programa, permite intervenir en la crisis política e interesar a las masas inquietas por el desenlace electoral, o sea que crea una posibilidad de organización y una posibilidad de desarrollo. Constituye una delimitación política clara frente a la tendencia al compromiso y a la capitulación de Evo Morales y el MAS. El abstencionismo, en cambio, no tiene otro auditorio que los pequeños grupos, algunos estudiantes y a las clases medias confundidas, más dispuestas a votar a la derecha que a la izquierda. Cuando un planteo político consigue reunir la condición de servir para la delimitación política del oportunismo y para la lucha práctica contra el imperialismo, podemos decir que es el más adecuado para desarrollar una alternativa revolucionaria.

***El Obrero Internacional* Nº 4, diciembre de 2005**

Charlatanería y pasividad: La política de los sectarios

Por Luis Gurevich

La LOR-CI de Bolivia (grupo afín al PTS argentino) ha criticado el artículo de Jorge Altamira llamando a votar por Evo Morales y el MAS. La crítica, firmada por Eduardo Molina y reproducida por *La Verdad Obrera* (9/12/05), es una sucesión de chiquilinadas, incoherencias y falsedades. Señalamos las más groseras, sólo a modo de inventario.

Libertad de voto. La LOR-CI llama a votar en blanco pero inmediatamente agrega: "Defendemos su derecho (de las masas bolivianas, nota del autor) a votar a quien quieran". Es decir, su "derecho" a votar por... "Tuto" Quiroga, el candidato de Bush. ¿No es una vergüenza?

Pasividad. La LOR-CI plantea que las elecciones son una trampa, pero no llama a organizar el boicot.

Cuarto intermedio permanente. Reivindica la "cumbre obrera y popular" convocada por la COB, la COR de El Alto y la FSTMB, que fue el monumento a la pasividad: sus convocantes decidieron "suspender el cuarto intermedio resuelto en las jornadas de mayo-junio" (es decir que reconocen que no hacen nada desde hace siete meses), para declarar inmediatamente otro "cuarto intermedio", esta vez hasta noventa días después de las elecciones. En resumen, un "cuarto intermedio" ininterrumpido de once meses. La LOR-CI ha pasado de la revolución permanente al "cuarto intermedio permanente".

Aliados. "Altamira vota por Evo Morales, aliado de Lula, Kirchner y Chávez", dice la LOR-CI. No vemos cuál es el problema, para la LOR-CI, que hace poco más de un año votó por Chávez en el referendo revocatorio. Ese referendo le fue impuesto a Chávez, por la presión, entre otros, de Kirchner y Lula. Lula, en ocasión del golpe contra Chávez, formó el llamado "grupo de amigos de Venezuela" para "mediar" en la crisis, que incluía a Bush y a Aznar, y excluía a Cuba. Lula y Kirchner actuaron (y actúan) como factores de contención del chavismo, por cuenta del imperialismo (Bush ha felicitado a ambos por esta tarea). Pero para realizar esta tarea deben declararse "aliados".

Lo mismo sucede en Bolivia. Lula, Chávez y Kirchner acaban de firmar un acuerdo para construir un gasoducto que atravesará todo el continente para abastecer con gas venezolano a Brasil y Argentina. Se trata de una advertencia, y hasta de una amenaza, a Evo Morales: si no llega a un acuerdo con los pulpos, en particular con Repsol y Petrobras, va a tener que meterse el gas ya saben dónde. ¡Con aliados así!

Hay que analizar la realidad, no vivir con esquemas.

Reformismo. La LOR-CI dice que el programa de Morales es "reformista" (Altamira va más lejos en la crítica, lo caracteriza como "históricamente reaccionario"). Pero el programa de Quiroga es *directamente* reaccionario. En un enfrentamiento, que interesa e involucra a las masas, entre dos candidatos –uno "reformista" y otro reaccionario–, la LOR-CI se declara neutral. ¿No es una soberana estupidez?

Democratismo. Si Morales ganaba la elección pero no sacaba la mayoría de los votos, el presidente sería designado por el Parlamento. La LOR-CI dice que si la reacción pretende impedir en el Congreso que Evo sea designado presidente, se movilizarán para impedir la "conspiración". No defienden un programa revolucionario sino la democracia burguesa: que gobierne el que más votos sacó. Pero esto debería valer también para Quiroga, en caso de que gane con menos del 50% de los votos y quieran birlarle el triunfo en el Congreso. Después de todo, la LOR-CI defiende el derecho de los trabajadores a votarlo. ¿No estamos ante una posición francamente reaccionaria?

Militarismo. La LOR-CI dice que está "en la misma trinchera militar de Morales". Pura charlatanería: en Bolivia no hay una guerra. Pero si es indiferente quién gana las elecciones, ¿por qué sería diferente quién gana la guerra? ¿O las armas convierten a Evo en un revolucionario?

La guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Había que esperar a que la primera bomba cayera sobre Bagdad para luchar contra la agresión yanqui a Irak?

El militarismo puramente declamatorio disimula la pasividad.

Los "campos". El voto de Altamira a Morales es "una recaída en la teoría menchevique y lambertista de los campos", dice la LOR-CI. Falso. El mérito histórico de Lambert es haberse opuesto a la "teoría de los campos" de Michel Pablo y Ernst Mandel, que en nombre de la existencia de un supuesto "campo socialista" emblocaban (subordinaban) a los obreros y campesinos de la URSS con la burocracia contrarrevolucionaria y restauracionista.

Pero ya que la LOR-CI habla de Lambert y su apoyo al gobierno de Mitterrand, hay que decir lo siguiente. El PO rompió con Lambert en 1979. En 1981, todos los trotskistas franceses (no sólo Lambert) llamaron a votar por Mitterrand.

***Prensa Obrera*, 22 de diciembre de 2005**

La agenda revolucionaria en Bolivia

Por la Comisión Internacional del Comité Nacional del Partido Obrero



Una de las primeras consecuencias de la masiva victoria electoral de Evo Morales fue desatar una crisis en el gabinete de uno sus "aliados", Lula da Silva. Cuando en La Paz todavía se estaban contando los votos, en Brasilia se enfrentaban dos camarillas ministeriales: de un lado, el ministro Palocci (de Finanzas), el directorio de la Petrobras y el Ministerio de Energía; del otro, Marco Aurelio García, los asesores internacionales de Lula y los sucesores de José Dirceu.

Palocci y Petrobras rechazaban toda renegociación de los contratos firmados hace una década con Bolivia y planteaban recurrir a los tratados y tribunales internacionales para imponerle a Morales su continuidad. "No existen hoy desequilibrios económicos que justifiquen una anulación del contrato (de Petrobras con el Estado boliviano)", declaró Ildo Sauer, director de Gas y Energía de Petrobras (*Clarín*, 23/12/04). Sauer pasa por alto que los "contratos vigentes" fueron firmados cuando el barril de petróleo se cotizaba a 10 dólares, apenas un 15% de su actual valor de mercado.

La misma posición tenía el resto de las petroleras que operan en Bolivia. Durante todo el año pasado, los pulpos amenazaron con retirarse si Morales ganaba las elecciones y disminuyeron en más del 40% sus inversiones en 2005. Ocho de las doce más grandes (entre ellas Repsol) ya habían dado los primeros pasos para recurrir al arbitraje de "tribunales internacionales" para imponer al nuevo gobierno la continuidad de los contratos.

En oposición a Palocci y Petrobras, Marco Aurelio García –el principal operador de la política exterior de Lula– se rindió ante lo evidente: la masividad de la victoria electoral de Morales había quebrado cualquier intento de mantener los "viejos contratos". La posición de García se impuso y por eso Evo Morales acordó visitar Brasil y entrevistarse con Lula.

Algo similar ocurrió con Repsol, que poco tiempo atrás había difundido una curiosa nota afirmando que "el nuevo marco legal boliviano es ilegal" (sic) (*El Cronista*, 3/6/04). Mientras sus acciones se derrumbaban en Madrid al conocerse la magnitud de la victoria de Morales, su presidente, Antonio Brufau, se apresuraba a "saludarlo" y a declarar que "podría llegar a un acuerdo con Morales como se llegó con Chávez". Este giro de Brufau sirvió para anudar el viaje de Morales a España.

Detrás de Petrobras y Repsol –las petroleras con los mayores negocios en Bolivia–, las restantes también se plantean renegociar sus contratos. Ya han acordado cuál será su campo de batalla.

El programa petrolero de Morales

El programa de Morales respecto de los hidrocarburos ya fue aprobado en el referendo de 2004 y tiene sanción parlamentaria: el aumento de las regalías e impuestos que pagan las petroleras y la "refundación" de YPFB, la empresa hidrocarburífera estatal desmantelada con las privatizaciones. El intento del ex presidente, Carlos Mesa, de incumplir con esta norma, produjo la crisis de junio pasado, la caída del gobierno y la anticipación de las elecciones. La victoria de Morales es el resultado político fundamental de esa crisis.

Morales plantea que la YPFB "refundada" recobre la propiedad de las reservas de petróleo y gas y, por lo tanto, la propiedad de la totalidad de los recursos extraídos (propiedad en "boca de pozo"). Esto constituye una reversión del régimen anterior, que otorgaba esa propiedad a las petroleras. Bajo el nuevo régimen, las petroleras extraerían el crudo y el gas por cuenta de YPFB y estarían obligadas a entregárselo (a un precio determinado en el contrato). El comercio exterior de los hidrocarburos quedaría en manos de YPFB. La empresa petrolera estatal intermediaría entre la Nación y sus riquezas naturales, y el mercado mundial.

"Las empresas no tienen derecho a ejercer el derecho de propiedad sobre el gas y el petróleo. Nuestro gobierno va a nacionalizar los hidrocarburos en base a la Constitución y cualquier empresa que quiera invertir deberá subordinarse a las leyes bolivianas. Los actuales contratos son nulos (...) Se tiene que eliminar la cláusula de esos contratos que dice que la empresa adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. El Estado es dueño del subsuelo y del sobresuelo", declaró Evo Morales (*Pági-*

na/12, 21/12/04). "El Estado va a asumir la propiedad en boca de pozo, el control y definirá los precios internos, externos, utilidades, estructura de costo y de análisis (...) decidirá cuál es la ganancia de la petrolera", completó el vicepresidente electo, García Linera (*Clarín*, 23/12/04).

Este programa nacionalista choca con las pretensiones de las petroleras, en especial porque éstas apuntan al gran negocio de exportación del gas licuado a México y Estados Unidos. Por eso, la legislación que contiene dicho programa no fue ratificada por Mesa y las empresas se han negado a renegociar sus contratos. Un diario concluye que la explotación petrolera y gasífera se encuentra hoy en "un limbo legal" (*El Cronista*, 17/11/04).

Los pulpos estarían dispuestos a aceptar un aumento de los impuestos y las regalías, incluso porque creen que podrían burlar fácilmente (como lo vienen haciendo desde hace mucho) los controles del débil Estado boliviano. Sin embargo, rechazan que el Estado boliviano recupere la propiedad de las reservas y de los hidrocarburos en "boca de pozo" y el manejo del comercio exterior.

Las petroleras contabilizan la propiedad de las reservas como capital propio (por el que pueden obtener financiación). La propiedad de los hidrocarburos en "boca de pozo" les permite capturar enteramente la enorme renta extraordinaria que produce un barril a 70 dólares o la unidad de gas a 12 dólares.

El tema es clave también para Morales. Sin la propiedad efectiva de las reservas y del petróleo en "boca de pozo", la YPFB "refundada" no sería más que una cáscara vacía, o sea una versión boliviana de la Enarsa argentina. Al establecer un precio de compra de los hidrocarburos en base a los costos internos de producción para venderlos luego por su cuenta en el mercado mundial, el Estado boliviano podría apropiarse de una parte de la renta petrolera (que hoy va casi enteramente a los bolsillos de los pulpos). Sin recuperar esa renta extraordinaria, Bolivia no tiene ninguna posibilidad de reconstruir su Estado o de satisfacer la más elemental de las demandas de las masas. Morales pretende establecer en Bolivia un régimen de hidrocarburos que se asemeje al de Venezuela, donde Chávez reparte por mitades la renta de los combustibles con los pulpos internacionales.

Bolivia y Venezuela

Chávez impulsa "contratos de asociación" (formación de empresas mixtas con mayoría de PDVSA). Las petroleras se resisten a aceptar en Bolivia el mismo tipo de contrato que aceptan firmar en Venezuela. La razón es que Bolivia no es Venezuela: el desarrollo capitalista llevó en Venezuela a la creación de una empresa estatal que hoy los pulpos no pueden ignorar; en Bolivia, la "refundación" de tal empresa lesionaría los intereses concretos de las petroleras. En Venezuela hay un Estado que tiene un mayor poder de arbitraje frente al capital internacional que el Estado boliviano; cuando PDVSA estuvo a punto de ser vaciada, el gobierno de Chávez reconstruyó esa capacidad de arbitraje.

En Bolivia sería inviable, por ahora, porque YPFB simplemente no existe.

Argentina, Chile y Brasil

Argentina es uno de los principales compradores del gas boliviano, una parte del cual luego reexporta a Chile. Repsol está en las dos puntas del negocio: es vendedor en Bolivia y comprador en Argentina. El precio de venta es de 2 dólares (cuando el precio de referencia internacional oscila entre los 12 y 15). Para la ampliación de este negocio está planteada la construcción de un gasoducto entre Bolivia y el norte argentino, en la que ya se anotaron Repsol y Techint. El otro gran comprador del gas boliviano es Brasil que, a través de Petrobras, también opera como vendedor y comprador.

La victoria de Evo Morales ha creado una crisis en este negocio. Primero porque exige que las ventas sean "de Estado a Estado" (lo que eliminaría el gigantesco negociado que están realizando Repsol y Petrobras operando a ambos lados de las fronteras). Segundo, porque pretende aumentar el precio de venta para "acercarlo" a los valores del mercado mundial.

Repsol, Techint (en su doble carácter de proveedora de caños para el gasoducto del norte y de petrolera a través de su subsidiaria Tecpetrol) y Petrobras ya han comenzado a "operar" para mantener sus negocios, con el respaldo de los gobiernos de Argentina, Chile, Brasil y Venezuela.

"Las empresas ya tienen un plan para negociar con Morales", informa *La Nación* (20/12/04): "si Morales subiera el gas, por ejemplo, a más de 2,70 dólares el millón de BTU (un 23% de alza), no convendría construir el gasoducto (el cual) sólo es viable a un precio razonable" (ídem).

Las petroleras amenazan con abastecerse de otras fuentes. Las "empresas argentinas" que hablaron con *La Nación* (20/12/04) anticiparon que si Morales pretende un precio mayor a los 2,70 dólares desarrollarían la producción de carbón para sustituir el gas boliviano. El kirchnerista Fellner, gobernador de Jujuy, terció en las amenazas: "con ese precio, yo desarrollo el gas en mi provincia" (ídem). Fellner fue designado como "enviado presidencial especial" a Bolivia, donde trabajará con la "misión especial" del Mercosur, que incluye entre otros al brasileño Marco Aurelio García (*Clarín*, 17/12/04).

Chávez participa del juego con el anuncio de un gasoducto desde el Orinoco hasta Brasil y Argentina, una empresa faraónica que "no es otra cosa que una especulación del gobierno de Lula para advertirle a Bolivia que existen alternativas si pretende, como lo insinuó ayer Morales, naciones rehenes de su gas" (*La Nación*, 14/12/04).

Una amenaza similar pero mucho más verosímil es la que plantean Repsol y Techint. Las mismas empresas que planeaban asociarse en el gasoducto entre Bolivia y Argentina acaban de firmar un contrato con la norteamericana Hunt Oil y el gobierno de Chile para abastecer el mercado chileno con el gas extraído del yacimiento peruano de Camisea. Desde Chile, una vez licuado, el gas peruano podría ser exportado a México y Estados Unidos. "Repsol tiene una muy buena relación con el gobierno (argentino) y suele trabajar en conjunto con los funcionarios del área energética del Ejecutivo. Así sucedió, por ejemplo, cuando se anunció el acuerdo triangular entre PDVSA, Repsol y Enarsa, que favoreció muchísimo al emporio español" (*Página/12*, 31/12/04). También Techint es un estrecho asociado al gobierno de Kirchner.

Junto con las amenazas llegan las "ofertas". Petrobras acaba de ofrecer al Estado boliviano una participación accionaria en las refinerías que la brasileña opera en Bolivia. Le ha ofrecido, también, una participación accionaria en el polo petroquímico que se construirá en la ciudad brasileña de Corumbá, en la fron-

tera con Bolivia, para procesar el gas boliviano. Además de Petrobras, en ese emprendimiento participan la petroquímica brasileña Brashken y Repsol. El gobierno argentino, por su parte, ofreció elevar a 4 dólares el precio de la unidad del gas que importa de Bolivia, lo que implicaría una duplicación del precio actual pero sería apenas un tercio de su valor internacional. Los pulpos y los gobiernos a los que éstos están aliados intentan alcanzar un acuerdo de conjunto, en el que están dispuestos a ceder "algo" de la renta petrolera para mantener lo fundamental: la propiedad de las reservas y los hidrocarburos extraídos.

Los "aliados latinoamericanos" amenazan a Evo Morales con el boicot y el estrangulamiento externo si no se suma a los dictados de las petroleras con las que cada uno de ellos se ha aliado.

Santa Cruz

La oligarquía boliviana, las petroleras y el imperialismo han ganado un importantísimo punto de apoyo para defender sus exigencias con la conquista de las prefecturas de Santa Cruz y Tarija por parte de la derecha. El surgimiento de este virtual "doble poder" en el oriente boliviano es la directa consecuencia de la capitulación de Morales, que aceptó la elección directa de los prefectos (algo que no se encuentra establecido en la Constitución) y la sobre-representación de las provincias orientales en el Senado.

El vicepresidente electo, García Linera, calificó el poder que ha ganado la oligarquía como "un contrapeso que la población nos ha colocado (...) una señal sabia del electorado" (*El Deber*, Santa Cruz de la Sierra, 20/12/04). Se trata de una señal de la inocultable tendencia del nuevo gobierno a la conciliación con la reacción.

La agenda de la burguesía cruceña –que no se refiere sólo a sus intereses petroleros sino también al muy poderoso lobby agroexportador de la soja– choca frontalmente con la de Morales. Las provincias orientales reclaman una "descentralización" que significará, en lo fundamental, la transferencia a los gobiernos locales de una parte sustancial de los recursos del Estado: "Juan Carlos Urenda, un abogado de Santa Cruz, dice que la participación del Estado central en el ingreso nacional deberá ser reducida del 75 al 33 por ciento" (*The Economist*, 17/12/04). La burguesía cruceña, que se opone a la "refundación" de YPFB y a cualquier medida de distribución de tierras a los campesinos que pueda afectar los intereses sojeros, reclama, además, su derecho a "ejecutar" (en sus propias términos y en su propio beneficio) las políticas sobre recursos naturales y tierras que establezca el gobierno nacional. Es decir, el "derecho" a neutralizar cualquier resolución que afecte sus intereses y los de sus aliados.

Coca

Los yanquis pretenden tener bajo su control absoluto el negocio del narcotráfico. La reaparición de Afganistán como primer productor mundial de opio (la base de la heroína) después de su ocupación por los norteamericanos ha vuelto a confirmarlo.

Para controlar el negocio –y para evitar un crecimiento de la producción que derrumbaría los precios y, por sobre todo, los beneficios– el imperialismo ha recurrido a la militarización de los países productores y a la represión de sus campesinos. Mientras esta política continúe –en Colombia, en México, en Perú– no existe la menor posibilidad de acuerdo entre el imperialismo y el gobierno de Morales. Con la bandera de la legalización de la coca, Morales obtuvo el 93% de los votos en el Chapare, la principal región productora.

La cuestión de la coca lleva, directamente, a la del Ejército. El imperialismo se ha valido de la llamada "lucha antidrogas" para disciplinar y penetrar profundamente en los ejércitos latinoamericanos y en sus servicios de inteligencia. Morales anticipó que las fuerzas armadas dejarán de encargarse de la destrucción de cocales ilegales. Juan Ramón Quintana, un ex militar que asesora a Morales y es uno de los candidatos al Ministerio de Defensa, denunció que "la fuerza especial (del Ejército) de lucha contra el narcotráfico es una agencia de la DEA", la agencia antidrogas norteamericana. Quintana denunció que el Ejército y los servicios de inteligencia, "en lugar de cuidar la seguridad del Estado boliviano, cuidan la de Estados Unidos (...) con el enorme riesgo que esto implica para la seguridad del Estado" (*Clarín*, 28/12/04).

Detrás de la cuestión de la coca asoma la disputa por el control del Ejército.

El carácter del MAS

El MAS no es un partido, como el PT de Brasil. Tampoco es una coalición de partidos, como el Frente Amplio de Uruguay. El MAS es una coalición de "movimientos sociales diversos, y hasta contradictorios, nucleados en torno a la Confederación de Cocaleros de Bolivia. Carece de una estructura partidaria. No tiene cuadros partidarios con ascendiente propio entre las masas o incluso predicamento dentro del propio MAS.

Los intentos de "institucionalizar" al MAS fracasaron, uno tras otro. "No hay costumbre de trabajo en comisiones. El parlamentario Antonio Peredo quiso organizar una comisión de relaciones internacionales, pero no funcionó. Tampoco la que intentó el dirigente Iván Iporre, para asuntos internos. Tampoco una comisión legislativa que ensayaron los congresistas (...) En 2002, cuando se postuló a la presidencia, Evo Morales designó una comisión política. Se reunió una vez. Ahora funciona otra, con más organicidad, pero puede ser cambiada por el jefe. Nunca fue revelada públicamente la identidad de sus miembros" (*El Comercio*, Lima, 25/12/04).

A algunos voceros de la clase patronal les preocupa el carácter del personal político que un partido sin dirección ni disciplina puede poner en los ministerios y secretarías, es decir, al comando del Estado. "Es inocultable el problema de la carencia de cuadros técnicos, aderezado por la decisión de incluir indígenas en el gabinete" (ídem).

"La asamblea del MAS es un mecanismo de convalidaciones de lo que Morales decide, más que de dirección" (ídem). En las asambleas locales del MAS, bullen elementos de izquierda y hasta revolucionarios.

Morales no cuenta con una burocracia partidaria disciplinada, como Lula en Brasil; tampoco con una estructura política con experiencia de gestión en el Estado, como el propio PT y el Frente Amplio en Uruguay.

Evo Morales, en persona, deberá enfrentar a las masas bolivianas para imponerles los acuerdos –con las petroleras, con la oligarquía de Santa Cruz, con el imperialismo– que le permitan viabilizar su gobierno. Deberá demostrar entonces, en la práctica si es capaz de domesticarlas.

El papel de la Constituyente

Bolivia –y Evo Morales– enfrentan un conjunto de contradicciones explosivas; las mismas que llevaron a la caída de dos presidentes en apenas dos años. Estas contradicciones no se resuelven con maniobras; plantean nuevas confrontaciones.

La masividad de su victoria electoral ha dejado a Morales sin la posibilidad de refugiarse en la excusa del "consenso parlamentario". La crisis política que se viene arrastrando desde octubre de 2003 y la polarización política y social puesta de manifiesto en las elecciones anticipan que se acerca la hora de las definiciones.

Morales está obligado a una negociación "a tres bandas" –con las petroleras, con la burguesía cruceña y con el imperialismo– bajo la "mediación" de Chávez, Lula y Kirchner. Sus supuestos "aliados latinoamericanos" ya han dejado en claro que sostienen, en lo fundamental, los intereses petroleros. Las posibilidades de un acuerdo –y sus términos concretos– sólo pueden ser explorados y alcanzados a través de choques, golpes, amenazas y contragolpes.

La función de la Constituyente, convocada en principio para junio próximo, es sancionar estos acuerdos... si es que llegan a concretarse. No será un organismo de deliberación; mucho menos está planteado para satisfacer las reivindicaciones populares. Será el ámbito que les dará un carácter constitucional a los acuerdos que establezca Morales con las petroleras, con el imperialismo, con los "aliados latinoamericanos" y, por sobre todo, con la oligarquía de Santa Cruz y de Tarija.

Ninguna conciliación con la oligarquía de Santa Cruz, enemiga jurada de las masas oprimidas de Bolivia. Por la elección de la Constituyente en base a un distrito único; ninguna "sobrerepresentación" para la oligarquía. Por la formación de comités de obreros y comités de campesinos por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos y su puesta en funcionamiento bajo el control de los trabajadores, y por la expropiación inmediata de los grandes latifundios y el reparto de las tierras entre los campesinos sin tierras.

Programa

Para llegar a un acuerdo con la oligarquía, las petroleras, los "aliados latinoamericanos" y el imperialismo, Morales está obligado a abandonar su propio programa nacionalista burgués. No tiene condiciones para imponer su programa a enemigos tan poderosos, cuando su preocupación fundamental es, al mismo tiempo, desmantelar las tendencias revolucionarias de las masas.

Morales deberá abandonar ese programa –y cualquier intención de "refundar" Bolivia– ante los ojos de millones de trabajadores, obreros y campesinos, que han depositado en él sus aspiraciones y expectativas.

Si logra hacer que las masas acepten un acuerdo con los pulpos petroleros, con la burguesía de Santa Cruz, con el imperialismo y con los gobiernos de América Latina, Morales tendrá una presidencia. De lo contrario, Bolivia ingresará a una fase revolucionaria decisiva.

El nacionalismo de contenido burgués se apresta a protagonizar en Bolivia un nuevo fracaso histórico. La experiencia práctica deberá enseñarles a los explotados que no hay caminos intermedios entre la entrega nacional y el planteo revolucionario de la expropiación sin pago de los hidrocarburos y la gestión obrera de la economía.

Es necesario intervenir en esta experiencia práctica de las masas mediante un programa de reivindicaciones que una los reclamos perentorios de los explotados –la nacionalización sin pago de los hidrocarburos, la tierra para los campesinos, el libre cultivo de la hoja de coca, el aplastamiento de la reacción de las provincias del oriente– con la formación de comités obreros, de comités campesinos, de asambleas populares, para asegurar el cumplimiento de las reivindicaciones populares y para que la Constituyente sea convocada bajo términos y condiciones que aseguren una mayoría popular que impulse los cambios revolucionarios.

Para apuntalar la experiencia de las masas en Bolivia, llamamos a organizar la lucha contra la política de bloqueo y contención que impulsan los Lula y los Kirchner (y, en segundo término, los Chávez), por cuenta del imperialismo y las petroleras. En oposición al nacionalismo burgués que, dentro y fuera de Bolivia, intenta ahogar las potencialidades revolucionarias continentales del proceso político del Altiplano, llamamos a la conformación de un frente internacional para luchar en todo el continente por la nacionalización sin pago de los pulpos petroleros, por el control y la gestión obrera de los recursos nacionalizados y por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

***El Obrero Internacional* Nº 5, enero de 2005**

Transición en Bolivia

Por Jorge Altamira



El gobierno de Evo Morales ha tenido un comienzo bastante distinto a los de Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez o incluso Chávez. Lula, que llevaba como vice a uno de los principales capitalistas brasileños, ya antes de asumir había puesto su firma a un acuerdo con el FMI, y enseguida anunció un gabinete de industriales, terratenientes y banqueros, que hizo las delicias de las Bolsas de San Pablo y de Nueva York. El presidente argentino, por su lado, comenzó su mandato ratificando a más de la mitad del gabinete de Duhalde, o sea de los monopolios exportadores y del pulpo Techint. Tabaré, exponente de la izquierda democratizante unificada de Uruguay, puso a un agente del FMI en el Ministerio de Economía y a diversos funcionarios colorados y blancos en otros lugares estratégicos del aparato estatal. Hasta el propio Chávez tuvo que esperar al golpe de abril de 2002 y al 'lock-out' patronal de finales de ese año para enfrentarse a una verdadera crisis política y al inicio de una 'revolución bolivariana'. La inauguración del gobierno del MAS de Bolivia, en cambio, hundió las cotizaciones de Repsol en casi un 15%, por dos mil millones de dólares, en pleno auge del precio internacional del petróleo y del gas. Sólo una semana más tarde, el anuncio, por parte de otra petrolera, la norteamericana Exxon, de las ganancias trimestrales más altas de la historia del capitalismo, hacía subir todo el panel general de Wall Street.

Aunque la historia tenga tendencia a repetirse, no siempre lo hace de la misma manera. El centroizquierdista Morales no llega al gobierno de Bolivia en las mismas condiciones históricas de sus otros compañeros de ideas.

Repsol se va a la guerra

Andrés Solís Rada, el ministro de Hidrocarburos del Altiplano, interpretó el anuncio de Repsol, que daba cuenta de una reducción en el cálculo de sus reservas de petróleo y gas, como un reconocimiento de la propiedad estatal de los combustibles y como un paso hacia la nacionalización de los hidrocarburos. Repsol contabilizaba como propias las reservas de los yacimientos que explota en Bolivia, porque los consideraba de su propiedad, no sujetos a las disposiciones de la legislación boliviana. Solís Rada denunció incluso que los contratos de exportación de gas licuado, que Repsol decía haber firmado con México, habían sido fraguados con el mismísimo presidente Fox, con la única finalidad de aumentar el cálculo de reservas comprobadas y por lo tanto la cotización bursátil de Repsol. Según la prensa boliviana, Solís Rada es el primer ministro de Hidrocarburos que no ha sido designado por las petroleras en los últimos cuarenta años. El funcionario ya ha dicho que desconoce a la Cámara que las representa.

La 'movida' de Repsol, sin embargo, es la clásica de los capitalistas que se disponen a 'dar pelea'. Al afectar una parte del valor de su capital, pretende aislar la futura cotización de la empresa de las alternativas de la re-negociación de los contratos que deberá encarar en Bolivia. El gobierno de Evo Morales no solamente pretende cobrar mayores impuestos sino también establecer un "precio fiscal" de los combustibles, para contrarrestar las maniobras de subfacturación. Ha anunciado también una modificación legal que le permite al Estado definir los compromisos de inversión de las empresas. Los pulpos petroleros rechazan esta tentativa 'estatista' de redistribución de la renta petrolera. Por de pronto, han paralizado por completo sus inversiones. Por otro lado, Repsol ha vuelto a anunciar el propósito de exportar gas licuado desde sus yacimientos en Perú. En forma coincidente, el presidente del 'movimiento cívico' de Santa Cruz de la Sierra, Germán Antelo acaba de tomar partido abiertamente a favor de los reclamos de los pulpos: "Advirtió que no permitirá la política del gas 'made in Caracas'". Los intereses nacionales no pueden subordinarse a amistades o alianzas partidarias. Tenemos el derecho a defendernos" (*Los Tiempos*, 31/1/06). Repsol, Petrobras y la francesa Total tienen un frente único, que se acaba de manifestar en un 'coloquio' del Banco Mundial en París. Los anuncios de un gasoducto que bajaría desde Venezuela tienden claramente a cercar al proceso boliviano. La suba espectacular de las acciones de Techint no obedece tanto a la perspectiva de contratos que ofrece este quimérico proyecto, como a la circunstancia de que pone de manifiesto un frente único de Lula-Kirchner-Chávez para condicionar el proceso boliviano. Desde otro ángulo, en un 'replay' de lo ocurrido con la crisis bancaria en Argentina, los yanquis 'miran desde afuera', probablemente para aprovechar la 'desgracia' de sus competidores.

Es decir que luego de la publicitada gira de Evo Morales por América Latina y Europa, la 'guerra del gas' no se ha atenuado. En oposición a esta ofensiva de los pulpos petroleros y de sus gobiernos contra los proyectos del gobierno boliviano, planteamos la confiscación de los pulpos petroleros y la gestión obrera.

Renegociar el coloniaje

Una reciente declaración del flamante presidente de YPF de Bolivia define con toda claridad el contenido del proyecto nacionalista. Jorge Alvarado afirma que el propósito es "reconstruir" la empresa de petróleo boliviana para convertirla en una Petrobras, o sea gestionada como una empresa privada. El capital de Petrobras, aunque de mayoría estatal, está bajo el control de la Bolsa, más específicamente de los fondos de inversión de los Estados Unidos, que tienen el 49% de sus acciones. De acuerdo a algunas informaciones, la participación privada sería, incluso, de cerca del 70%. De cualquier modo, su actividad es regulada por el capital financiero internacional.

Pero incluso para convertirse en una Petrobras, Alvarado debería propugnar una medida que rechaza en forma absoluta: recuperar las instalaciones y redes de distribución de YPFB que fueron entregadas ('capitalizadas') a los pulpos, siguiendo el modelo de las privatizaciones menemistas. El parque industrial petrolero de Bolivia es virtualmente el que existía en el período anterior; las nuevas inversiones son mínimas y se encuentran atadas a préstamos extranjeros. Sin recuperar la condición anterior de YPFB, lo único que le queda al gobierno de Morales es una suerte de Enarsa, o sea un sello administrativo. Querer convertir a este sello en una empresa operativa real a fuerza de capitalizar el cobro de regalías, es un proyecto sin destino; lo más probable es que se convierta en una canal de desvío de los fondos que deberían ir al presupuesto estatal. Las limitaciones enormes del planteo nacionalista oficial dejan como única alternativa al despojo privatista la estatización de todos los recursos naturales, sin indemnización, bajo gestión de los trabajadores. En esta perspectiva alternativa reside la fuerza de la reivindicación de nacionalización integral sin indemnización.

La llamada renegociación de los contratos de petróleo deberá ocupar los próximos seis meses, precisamente cuando debe reunirse la Asamblea Constituyente. La crisis que se avecina tiene, desde el vamos, una forma política definida. El flamante prefecto de Santa Cruz, que responde a la derecha terrateniente y a los pulpos petroleros, ya declaró que pretende que se le otorgue a las provincias potestad sobre el régimen de propiedad, no solamente con la vista puesta en los yacimientos de petróleo sino en la propiedad agraria. La disputa por la tierra es fundamental en Santa Cruz, y la oligarquía no esconde que quiere los recursos políticos para una guerra civil. La unidad nacional de Bolivia, sobre la base de estas pretensiones, se convierte en una pura ficción. La cuestión de la unidad del país exige la nacionalización sin pago de los hidrocarburos y la confiscación de los terratenientes. Una lucha por la tierra daría un fuerte impulso a los movimientos sin tierra del lado brasileño.

La cuestión del poder

El gobierno de Evo Morales no apunta a desarrollar estas contradicciones a favor de una mayor y más decidida acción popular sino a contenerlas. Se trata de un gobierno pequeño burgués de contenido capitalista, lo que en definitiva significa un acuerdo con el imperialismo. La prueba más clara de ello es que se ha echado atrás del compromiso de triplicar el salario mínimo a 1.500 pesos bolivianos (550 pesos argentinos). Reclama mantener la "estabilidad económica" (equilibrio fiscal) para desarrollar sus proyectos. Pero esos proyectos no dependen de la "estabilidad económica" sino de la movilización popular; los capitalistas podrían acabar con esa 'estabilidad', cuando lo necesiten como medio de presión, con una 'corrida' bancaria y cambiaria. Otra prueba de la tentativa de contener un proceso popular es la designación como ministro de Abel Mamani, que había sido presidente del Frente de Juntas Vecinales del Alto. Mamani está acusado de sabotear la municipalización del servicio de aguas y de haber favorecido a la empresa con un aumento faraónico de la tarifa de levantamiento de la basura. Curiosamente, antes de conocer, claro, que sería nombrado funcionario, Mamani había pronosticado públicamente un fracaso inevitable al gobierno de Evo Morales.

El flamante gobierno radió de las fuerzas armadas a los mandos que autorizaron la salida de misiles bolivianos para ser desmantelados en Estados Unidos, pero se detuvo allí, cuando hay una exigencia popular de castigo a los que perpetraron las masacres de 2003 y cuando toda la situación política exige neutralizar al aparato armado de la oligarquía y proceder a un armamento de los trabajadores. El nuevo ministro de Defensa es un viejo privatizador, que sólo alega en su favor "el derecho a cambiar de campo".

En Bolivia está planteada una lucha por la independencia nacional y por la satisfacción de las necesidades de tierra, pan y techo para las masas. Por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos y la gestión obrera; por la confiscación de los terratenientes y la entrega de la tierra a los campesinos; por un salario mínimo y móvil de 1.500 pesos y por el reparto de las horas de trabajo. Para desarrollar estas tareas es necesario construir una alternativa obrera y socialista al gobierno de Evo Morales. En Bolivia se encuentra planteada la tarea de formar un bloque revolucionario para intervenir en la Asamblea Constituyente, no ya con métodos parlamentarios sino formando comités de bases en las ciudades y en el campo. Hay que preparar en forma sistemática la emergencia de un gobierno obrero-campesino.

***Prensa Obrera*, 2 de febrero de 2006**

Bolivia: Qué es la Constituyente

Por Jorge Altamira

La reunión de una Asamblea Constituyente, largamente reclamada por numerosos sectores sociales que querían ver plasmadas en la estructura del Estado reivindicaciones de características indigenistas, agrarias o antiimperialistas, parecía ser la gran oportunidad para que Evo Morales y el MAS pudieran concretar el planteo de "refundar" la nación. El marco de una Constituyente convocada a breve término debía servir para concretar sin más dilaciones la nacionalización de los hidrocarburos (sin expropiación), que distingue a la posición del oficialismo. Aunque la Asamblea sería convocada dentro del cuadro legal vigente, la consagración plebiscitaria de Evo Morales en la elección de diciembre pasado dejaba la posibilidad de que la Constituyente fuera efectivamente soberana en su capacidad de decisión política, con referencia a la oposición de la oligarquía de Santa Cruz y de los monopolios internacionales de los hidrocarburos. Admitidas todas sus limitaciones, esta Constituyente apuntaba a convertirse en un foro nacional obligado, en el cual confrontarían los planteos de las más diversas clases sociales y partidos.

El pacto que alumbra la convocatoria de la Constituyente, entre el gobierno y el MAS, de un lado, y la oligarquía cruceña y el derechista Podemos, del otro, para el mes de julio próximo, da lugar a otra cosa: a una Constituyente condicionada. El gobierno prefirió tomar el camino de un contubernio para sortear el obstáculo que representaba para él la falta de una mayoría suficiente en el Congreso, cuando tenía reunidas todas las condiciones políticas para imponer una Constituyente sin condicionamientos, si decidía recurrir a la movilización popular. El pacto con la derecha política y con la oligarquía agraria-petrolera ha creado una circunstancia singular: el Estado Mayor del Pueblo, que en la campaña electoral apoyó a Morales, anunció que realizará "una férrea campaña por 'no' a las autonomías" (*Bolpress*, 6/3/06). (Miguel Zubieta, dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz rechazó tanto el referendo como la Constituyente, por desconocer representaciones autónomas para trabajadores e indígenas –ídem.)

Para el dúo gubernamental (los diarios dicen que el 'artífice' del arreglo fue García Linera, el vice de Evo), el acuerdo con la derecha es una especie de compromiso entre posiciones contradictorias forzado por la correlación de fuerzas o, en palabras de García Linera, por una situación de "empate catastrófico". Pero después de las insurrecciones de octubre de 2003 y de julio de 2005, y del plebiscito presidencial de diciembre pasado, esta caracterización tergiversa la realidad. Sustituye a la relación de fuerzas en la sociedad y en la política por la que existe en el Congreso, o sea que le devuelve a la derecha y a la oligarquía una fuerza que ha perdido, incluso en las urnas y que perdería todavía más luego de la derrota electoral de diciembre, que, ella sí fue sencillamente catastrófica.

El pacto le retira a la Constituyente y al conjunto de la nación boliviana la atribución de decidir sobre las autonomías departamentales, que serán resueltas por un referendo independiente de cada departamento, con carácter de vinculante para los constituyentes en su conjunto. Se da así la contradicción, que los pactistas encuentran totalmente tolerable, que la asamblea constitucional se convoque en el marco de la Constitución política vigente del Estado, mientras el referendo tiene lugar violentando esa constitución política, que tiene un carácter unitario, pues otorga una soberanía constitucional a los departamentos, que le retira a la ciudadanía tomada en su conjunto. La reivindicación autonómica expresa los intereses especiales de la oligarquía cruceña, en especial, así como de otros departamentos con hidrocarburos en su subsuelo. En esta misma medida es una reivindicación de los monopolios internacionales. Lo dice textualmente Salvador Ric Riera, un empresario cruceño de cuarenta millones de dólares de patrimonio, ministro de Obras y Servicios Públicos de Evo Morales: "las empresas petroleras apoy(a)n el proceso de autonomías, porque parecería que les es más fácil negociar con gobiernos regionales..." (*Página/12*, 8/2/06).

El otro aspecto tramposo del pacto es que los referendos departamentales 'pre-existentes' a la futura constitución nacional no tienen un carácter confrontativo, pues la pregunta que se pone a la población de los departamentos es apoyada igualmente por Podemos y por el MAS. El condicionamiento de la Constituyente es doble: por un referendo vinculante y por un pacto MAS-Podemos sobre los términos del propio referendo. Esto explica que el decreto de convocatoria excluya el reclamo de numerosas organizaciones populares al derecho a una representación independiente en la Asamblea. Este rechazo delata la completa impostura de los García Linares, que empezaron su carrera política como 'autogestionarios' y que una vez funcionarios descubren las ventajas de las 'estructuras partidarias', en especial en Bolivia, donde no hay partidos sino aglomeraciones burocráticas.

Es cierto, sin embargo, como no hubiera podido ser de otro modo, que la reglamentación o características políticas concretas de las autonomías serán establecidas por la Constituyente. Es aquí que entra en juego el sistema electoral aprobado en el pacto, que desecha el distrito nacional único y establece un sistema mixto que divide a la elección de la representación popular en 70 distritos y nueve departamentos; en los distritos se eligen tres representantes, dos por la mayoría y un por la minoría, lo cual elimina la representación proporcional y por lo tanto la representación de una gran parte de la ciudadanía y de numerosas tendencias políticas; en los departamentos, a la mayoría se le asignan dos bancas de cinco y una a las tres minorías siguientes. Este 'sistema' asegura a la derecha una representación mínima del 30%, o sea que le otorga una sobrerepresentación, que la deja a sólo tres puntos de número de votos necesario (un tercio) para bloquear las reformas que no le convengan. De acuerdo a esto, la señalada tentativa de superar el 'empate catastrófico' ha producido un 'refinado' empate permanente. Pero por aquello de que

"no hay bueyes sin cornadas", es también evidente que si la derecha bloquea una reglamentación de la autonomía adversa a sus intereses, se quedaría sin autonomía. Llegado a este punto, el referendo vinculante deja de vincular y los referendos quedan desreferendados. Se alcanzaría, en este extremo, el empate del empate, que deberá ser zanjado por otro compromiso o pacto, o por una intervención popular ajena a pactos y compromisos.

La cuestión autonómica debutó en Bolivia como un reclamo del indigenismo a una autonomía nacional y ha concluido como el reclamo fundamental de la oligarquía. Tiene que ver directamente con la propiedad –y no secundariamente con la propiedad agraria. Una reciente descripción de *El Diario* (5/3/06) señala, con referencia a Santa Cruz de la Sierra, a "las familias Antelo, con más de 116.000 hectáreas; la familia Gutiérrez, con casi 100.000 hectáreas; la familia Passer Bowles, con más de 72.000 hectáreas". Con referencia al departamento del Beni: "la familia Sivaut, con más de 100.000 hectáreas; la familia Elsner, con más de 115.000 hectáreas, y prácticamente la misma familia, aunque con un otro apellido, Bauer Elsner, con más de 73.000 hectáreas". La reivindicación de la autonomía, por parte de estas 'familias', no significa otra cosa que la posibilidad de ejercer un poder político 'autónomo' para enfrentar el creciente movimiento de trabajadores sin tierra en estas regiones. Evo Morales ha hecho un compromiso, por muchas de las razones expuestas todavía inestable, con la derecha parlamentaria y la oligarquía, a expensas del campesino sin tierra. La autonomía política de los departamentos sólo podría servir a una mayor intervención popular si se basa en la confiscación de la gran propiedad agraria y en la renacionalización sin pago de los hidrocarburos.

El pacto priva al gobierno de una poderosa arma de presión para obligar a las petroleras a someterse a su programa de reconversión de los contratos, asociación con mayoría estatal e inversiones para industrializar el gas en Bolivia. Es que saca del escenario la posibilidad de una Constituyente con mayorías populares decisivas y poderes completos. En el marco del pacto, el gobierno queda condicionado a llegar a un acuerdo con las petroleras, para que sea refrendado por la asamblea. Lo mismo vale para la licitación de los yacimientos de hierro extraordinarios de Mutún, en cuya licitación se han inscripto las poderosas siderúrgicas Mittal (primera del mundo), la brasileña EBX y Techint-Siderar. El ya citado ministro de Obras Públicas cree "que hay que postergar la apertura de los sobres...; pensar en un polo de acero y petroquímica en el mismo lugar...; modificar antes el Código Minero". Este ministro asegura querer "un mercado interno fuerte y una burguesía local productiva", lo que demuestra que el nuevo equipo gobernante carece del sentido de los tiempos históricos.

El pacto que lleva a la convocatoria constitucional es el resultado de enormes presiones sociales enfrentadas. "De lo contrario, el país volvería a convulsionarse", declaró Evo Morales, en referencia a "la importancia de respetar la fecha de la elección de constituyentes" (*La Razón*, La Paz, 23/2/06). Para absorber esa presión popular fue al pacto con la derecha. Ahora tiene que asegurar que la Constituyente interprete sin desvíos los compromisos y las presiones en presencia. Desde su inauguración, el flamante gobierno fue generoso en declaraciones, especialmente cuando se contradecían unas a otras, pero avaro en medidas. Hay órdenes de detención por contrabando contra funcionarios de Repsol, pero Morales recibe al presidente de la firma y asegura que la reconversión de contratos está en marcha. Petrobras repite que el acuerdo con Bolivia no tiene trabas, pero acaba de recibir de la chavista PDVSA una oferta de gas a un precio inferior al que reclama Evo Morales, para inducir a Brasil a apoyar el gasoducto sudamericano. Cada vez es más claro el bloqueo político, del lado de Lula, Kirchner y Chávez, contra una línea independiente en materia de hidrocarburos por parte de Bolivia. El embajador norteamericano, a su vez, asegura que las relaciones con La Paz "han dejado atrás los enfoques del pasado", pero el comando sur del Pentágono desautoriza los nombramientos militares del gobierno boliviano e insiste en las discrepancias sobre el cultivo de coca. Los pactos, los compromisos, las giras por el exterior y las conversaciones de cancillerías no han encaminado ninguno de los problemas planteados –no digamos que los hayan resuelto. Las masas no tienen respiro porque el gobierno ha incumplido con la promesa de duplicar el salario mínimo y, por otro lado, sólo ha autorizado aumentos salariales del 7%. Evo Morales tampoco ha cumplido con derogar el decreto 21.060, que estableció la precariedad laboral en la década 'neoliberal'. Un conflicto nuevo, pero de envergadura, lo constituye la cuestión de la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, esto a partir de que el acordado por parte de Colombia y otros países andinos, expulsa a los exportadores de soja boliviana de esos mercados.

Hasta donde sabemos, una parte de la izquierda ha decidido volver a votar en blanco a la espera de que 'se agote' la experiencia 'reformista' de la 'burocracia campesina' y las masas 'se eleven' al programa revolucionario. Lo que hay que hacer es todo lo contrario: orientar las presiones sociales que recibirá la Constituyente, cualquiera sea su composición y cualesquiera sus limitaciones, pero de un modo revolucionario, formando comités agrarios, comités fabriles, comités mineros, asambleas populares. O sea, oponer las aspiraciones de las masas a los designios de los constituyentes, con un programa claro de reivindicaciones, desde la expropiación de las petroleras, la gran propiedad agraria y los bancos hasta el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el control obrero. En oposición a la expectativa profesoral de que las masas se 'eleven' al 'programa', es necesaria una política que permita participar en todas las fases de la lucha y desarrollar todos los estadios que recorre la conciencia de las masas. Naturalmente, el punto de partida de cualquier intervención es la denuncia de la Constituyente pactista, el boicot al referendo autonómico y la reivindicación de una Constituyente soberana convocada por las asambleas populares y los comités de trabajadores. La oposición metódica a la Constituyente y al referendo, o sea, mediante la movilización por las reivindicaciones y el agotamiento activo de las ilusiones que promueve en las masas, es un paso fundamental para, de un lado, explotar las contradicciones del proceso político actual y desarrollar con ello una oposición revolucionaria con base de masas. En los departamentos que ello sea posible, sería importante presentar candidaturas de oposición al pacto y revolucionarias, incluso apoyar a aquellas que tengan ese carácter. Explotar las posibilidades de una presentación electoral y de una eventual representación en la Constituyente, por pequeña sea, es parte de la propuesta de conjunto de orientar las presiones populares sobre la Constituyente en una perspectiva revolucionaria.

***El Obrero Internacional* N° 6, marzo de 2006**

La nacionalización de Bolivia moviliza la oposición de los Kirchner y de los Lula

Por Jorge Altamira



La decisión del gobierno de Bolivia de nacionalizar el petróleo desató, por lo menos, una crisis internacional. Poco afecto, dicen, a las reuniones internacionales y protagonista de más de un desplante diplomático, Kirchner demoró menos de lo que canta un gallo en montar una reunión con Lula y Chávez para improvisar una respuesta a la situación creada. No los inspira la solidaridad con Bolivia sino la necesidad de una política para enfrentarla. Al 'pobre' Lula, el anuncio de Evo Morales le arruinó el 1° de Mayo, obligándolo a presidir reuniones de emergencia durante ocho horas seguidas. El apuro exhibido por estos presidentes 'nacionales y populares' para verse las caras obedece a la necesidad de defender los intereses de Petrobras, Repsol y Techint. Petrobras no es de ningún modo una empresa brasileña nacionalizada sino una compañía controlada por los fondos de inversión de Estados Unidos y las Bolsas de Nueva York y de San Pablo, que está administrada por funcionarios públicos de Brasil. Al pulpo 'argentino' del acero, aunque con sede en Luxemburgo, las noticias de Bolivia le pueden amargar el tendido del gasoducto del norte, para el cual su socio Kirchner ya tenía previsto un subsidio de más de doscientos millones de dólares. En este arco iris de 'progresistas' que defienden a los monopolios no podía faltar el 'socialismo' español; "Zapatero –informa *La Nación* (3/5/06)– advirtió a La Paz sobre las consecuencias". El agente de la monarquía hispana hubiera empleado otro lenguaje, claro, si se hubiera tratado de un choque con Bush, a cuyo servicio envía soldados a la muerte en Afganistán. Contra la decisión boliviana se pronunciaron todos los agentes y voceros del imperialismo.

Lula y Kirchner se reúnen a los apuros en una situación de debilidad; para *El País* de Madrid, lo de Evo fue "un brusco cambio de rumbo" (2/5/06). El diario *O Estado de São Paulo* cuenta que Lula había enviado a La Paz a un 'izquierdista', Samuel Pinheiro Guimaraes, que ocupa el cargo de vicecanciller, para prevenir el conflicto, sin resultados. Kirchner estuvo mandando 'emisarios' en forma continua, sea 'piquetruchos' o el mismo De Vido. Pero la crisis se había agudizado como consecuencia de la tentativa de una empresa brasileña, la siderúrgica EBX, que es altamente contaminante, de quedarse con la explotación de hierro del yacimiento del Mutún, departamento de Santa Cruz, en la frontera con Brasil. Las patronales de Santa Cruz, por este y otros motivos, habían anunciado un paro general para la semana que corre. Los capitalistas brasileños controlan el 25% del comercio de soja de esta provincia de Bolivia. Nada de esta conspiración desestabilizadora alteró los humores de Lula ni de Kirchner. Sólo los sacó de las casillas la salida del decreto de "nacionalización". El gobierno boliviano presentó la medida como un primer paso, pues tiene previsto, dijo, nacionalizar la minería, los bosques, la tierra improductiva y, según el asustadísimo diario madrileño: "Energía, agua potable, telecomunicaciones, aeronavegación, ferrocarriles". El pasquín, de todos modos, tiene algunas razones para sacar esa conclusión, esto porque, junto a la nacionalización de los hidrocarburos, Evo Morales anunció una nacionalización parcial del sistema de "capitalización privada", o sea de fondos de pensiones, que tienen inversiones en todos esos rubros. En este cuadro, Lula y Kirchner han llamado en su socorro, a la reunión en Puerto Iguazú, a Hugo Chávez, al cual apenas una semana antes lo habían desautorizado por protagonizar reuniones por separado con Uruguay y Paraguay. A fuerza de asegurarle a Bush que tenían la capacidad de 'contener' a Chávez, Lula y Kirchner tienen que convocarlo para que el trabajo de 'contención' lo haga Chávez. El gobierno de Chávez tiene una excelente relación con Techint y Repsol, en Venezuela, y acuerdos internacionales con Petrobras. También tiene un mejor acceso con el peruano Ollanta Humala, al que se atribuyen intenciones similares a las de Evo, aunque sean reiteradamente desmentidas. En este marco de cerco y de acoso de los 'gobiernos hermanos' contra Bolivia, ha sido una bocanada de aire fresco leer que el Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo "da un apoyo integral a la decisión del presidente boliviano" (*Folha de São Paulo*, 2/5/06).

Reparto

El decreto de Evo Morales, sin embargo, está muy lejos de nacionalizar el petróleo boliviano. Es precisamente lo que quiere decir cuando afirma que no hay expropiación; la explotación sigue en manos de los pulpos. El decreto de Evo Morales ni si-

quiera recupera el patrimonio de YPFB, que fuera confiscado en oportunidad de la privatización debido a las condiciones leoninas con que fue entregado a sus apropiadores: Repsol, Total, British Gas y Chevron. Bolivia pretende modificar los contratos con los pulpos y apropiarse de una parte considerablemente mayor de la renta petrolera; se estima que en los niveles de producción actuales podría incrementar la recaudación de menos de trescientos millones de dólares al año a más de ochocientos millones de dólares. La nacionalización de Morales convierte a los contratos de privatización y a los de concesión en contratos de operación, donde los pulpos trabajan por cuenta y orden de la empresa fiscal, YPFB. El Estado boliviano pretende, de este modo, controlar los precios y el comercio de los combustibles; sobre esta base contractual, el decreto estipula un reparto de la ganancia y de la renta del petróleo del 82/18% a favor del Estado. Para esto se establece una modificación del sistema impositivo, pero por sobre todo una participación mayoritaria de YPFB en el capital de las empresas. Se trata de una tentativa de poner coto al fraude fiscal y cambiario de las empresas e intentar orientar las inversiones para construir una red de gasoductos y una industrialización de la materia prima. Dada la debilidad del Estado boliviano para reunir el capital nacional necesario para semejante empresa, lo que en Bolivia significa partir de cero, el proyecto de desarrollo que emerge implica una asociación en gran escala al capital extranjero, o sea una recolonización del país bajo otras formas. De todos modos, Bolivia es para el capital internacional una plataforma de exportación.

Los observadores se preguntan de dónde sacará Evo Morales los recursos para llevar la participación del Estado en las operaciones petroleras a más del cincuenta por ciento del capital y para quedarse con los fondos de pensiones que han invertido en las petroleras. El llamado "sistema de capitalización" había otorgado a los ciudadanos una participación en las privatizaciones a través de fondos especiales. Para controlar la producción de las empresas petroleras que se beneficiaron con la privatización, Evo Morales debería estatizar los fondos de la 'capitalización' y aún realizar aportes adicionales. Dado que Bolivia tiene una crisis fiscal, los analistas opinan que deberá desistir de sus propósitos o proceder a una expropiación sin indemnización. Esta impasse del plan oficial será seguramente el punto de negociación de los próximos seis meses, que consistirán básicamente en un regateo relativo a la participación del Estado en el negocio de los hidrocarburos. Evo Morales prometió una auditoría que valuaría en términos de costos el capital de las petroleras, así como las ganancias que han acumulado. Esto podría permitir una nacionalización integral sin indemnización de muchos pulpos, en especial de los que privatizaron a YPFB. Solamente algunas nacionalizaciones burguesas en América Latina tuvieron esta osadía, al menos por un cierto tiempo.

Con los precios del petróleo y del gas por las nubes, los pulpos siguen teniendo un futuro muy 'prometedor' en Bolivia, un país donde los costos de diverso tipo son bajísimos. Resolver el conflicto representaría para los mismos pulpos otro gigantesco negocio: las inversiones en infraestructuras, que en Bolivia podrían ser enormes, dada su centralidad geográfica. Bolivia podría conseguir una salida al mar, como Argentina consiguió superar todos los conflictos de límites con Chile cuando los pulpos mineros se pusieron de acuerdo para repartirse la explotación de la cordillera. El problema para esta perspectiva de negocios no es el decreto de nacionalización sino la vulnerabilidad del gobierno boliviano y del propio Estado a las presiones populares, incluidas las que toman la forma de insurrecciones. En este sentido la cuestión de los hidrocarburos bolivianos está subordinada a la crisis política de América Latina y a las tendencias revolucionarias que anida. La renegociación de los contratos tendrá lugar en el marco de una desintegración de las relaciones políticas latinoamericanas, a partir de las presiones de Estados Unidos con los tratados de libre comercio; el hundimiento del proyecto de Confederación Sudamericana de Brasil, para controlar los negocios mineros y de infraestructura; la declinación del Mercosur; y la fragilidad, en última instancia, de todos los gobiernos del subcontinente. El TCP –de Cuba, Bolivia y Venezuela– no llega a ser ni un punto de partida alternativo para esta crisis de conjunto, fundamentalmente revolucionaria.

Constituyente

En este sentido es claro que la crisis que se ha abierto y las negociaciones con las petroleras y sus Estados atraviesan largamente el período de deliberación de la Asamblea Constituyente, que se va a reunir en julio. El MAS de Evo Morales la va a dominar por completo en términos de representación, sea porque la izquierda abstencionista y seudo-revolucionaria ha quedado neutralizada; sea porque la derecha se ha dividido; sea porque las conspiraciones desde Santa Cruz se encuentran por el momento relativamente aisladas. Evo Morales ha jugado nuevamente con bastante picardía al ordenar al ejército a ocupar los pozos y los yacimientos, porque de este modo permite que el alto mando militar realinee al ejército, que había jugado un rol de masacrador de las masas, con una posición nacionalista.

Lo que el gobierno no controla o domina son las masas, que no han visto una mejora de sus condiciones de vida en el corto lapso de gobierno, en especial el incumplimiento de los compromisos de aumentos de salarios. Por eso es tan importante orientar a estas masas de cara a la Constituyente, empezando por la reivindicación de una efectiva nacionalización de los hidrocarburos, sin indemnización, fundamentalmente de las empresas que saquearon a YPFB por medio de la privatización, y reivindicando la expropiación sin pago de todos los latifundios, como vía para la solución del hambre de los campesinos.

En este marco, llamamos a defender al gobierno de Bolivia contra los ataques del imperialismo y de sus socios menores, y a impulsar una campaña por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos en toda América Latina.

Prensa Obrera, 4 de mayo de 2006

Bolivia deja planteada la nacionalización sin pago en toda América Latina

Por Jorge Altamira



La nacionalización de los hidrocarburos por parte del gobierno boliviano ha sacudido la realidad política del Altiplano y de Sudamérica. Como es frecuente en circunstancias como éstas, abundan los que atribuyen la medida a toda suerte de conspiraciones o a ideologías supuestamente superadas. La nacionalización es, sin embargo, dentro de sus propios límites, una respuesta forzada por la nueva realidad insurgente en Bolivia. Las privatizaciones de la llamada década neo-liberal no aportaron nada al desarrollo de la sociedad boliviana y dejaron planteada la perspectiva de la desintegración nacional. Las "guerras del agua" primero, a partir de 2000, y la insurrección de octubre de 2003 más tarde, pusieron en la superficie una rebelión social contra las formas de producción colonialistas. Sin la reapropiación de sus recursos naturales a Bolivia la amenazaba la extinción.

Las privatizaciones 'tipo Bolivia' constituían a esta altura incluso una anomalía internacional. El fracaso de la ocupación de Irak dio al traste con su propósito fundamental, que era la privatización a ultranza de sus hidrocarburos. Aunque es poco conocido, en Irak se está reconstruyendo la empresa estatal de energía de la época de Saddam. En el gobierno de Bush se impusieron, al menos por un tiempo, los pulpos petroleros que defienden la existencia de la Opep, esto para mantener elevados los precios y los beneficios del petróleo. En el mismo sentido comenzó a operar Rusia al expropiar al principal pulpo local, Yukos, y absorberlo en las operaciones de la estatal Gazprom. La misma tendencia se observa en Africa. En lugar de la pura 'apertura' quedó establecido en forma transitoria un 'modelo' de competencia entre empresas estatales para atraer inversiones privadas. Pero el barril de petróleo por encima de 70 dólares ha provocado, en lugar de una competencia entre Estados para atraer inversiones, una competencia entre los pulpos para ganarse los favores de los Estados.

La crisis más aguda relacionada con el control de los hidrocarburos no se da en América Latina sino en Eurasia, o sea con relación a Rusia y las naciones de la ex URSS. La Unión Europea y los Estados Unidos quieren romper el monopolio de la provisión de gas a Europa por parte de Gazprom. Para eso han lanzado una enorme ofensiva para abastecerse desde las naciones fuertemente gasíferas y petrolíferas de Azerbaiján y Kazajistán. Esta acción los pone en colisión con China, que también intenta asegurarse acuerdos de inversión en estos países. Las amenazas de a taque militar a Irán está vinculadas, en una cierta medida, a esta crisis general. La cuestión de la energía afecta, asimismo, las crisis en curso en Sudán (Darfur) y en Nigeria. Bajo la forma de un choque por el control energético se va planteando una lucha internacional por el diseño social y la tutela imperialista de todas las naciones que salieron de la ex Unión Soviética, e incluso de China.

Sudamérica

La crisis que se desarrolla en América Latina, a partir de la recuperación nacional de PDVSA, en 2002, es subalterna a esta crisis internacional. Hasta hace muy poco, la totalidad de las petroleras se habían acomodado a los nuevos planteos de asociación del gobierno venezolano, e incluso cuando éste aumento sus exigencias, hace un par de meses, sólo se retiraron efectivamente la francesa Total y la italiana ENI (Exxon vendió sus activos a Repsol).

La nacionalización boliviana busca sustituir las viejas privatizaciones por el esquema internacional de asociación Estado-

petroleras, pero representa una diferencia sustancial. De un lado, es la respuesta retardada a una crisis revolucionaria pasada y afecta al conjunto de la realidad boliviana (ya se anuncian medidas agrarias). De otro lado, abre una crisis en América del Sur, donde el negocio petrolero está dominado por miembros menores de los monopolios –Repsol y Petrobras–, pero que son estratégicos para los gobiernos de Lula y de Kirchner.

El gobierno boliviano ha planteado apropiarse del 82% del valor de la producción petrolera, incluida la refinación, por medio de medidas impositivas y de una participación mayoritaria en el capital. En la reunión de Puerto Iguazú, Lula dejó en claro que este planteo es inaceptable, por lo que se llegó al compromiso de las negociaciones previstas durante los próximos seis meses. Petrobras no acepta siquiera una modificación importante del precio del gas que Bolivia vende a Brasil, porque no podría repasarlo a los precios de consumo final, ni tampoco aceptaría un subsidio significativo del Estado. Esto pone al desnudo que no es una empresa nacional sino una 'estatal de mercado' (como la bautizó alguien), o sea controlada por las Bolsas de Nueva York y San Pablo, por lo que no puede admitir una caída de su nivel de reservas ni de sus beneficios sin romper con sus accionistas. Petrobras es un caso claro de corrupción social de una empresa nacionalizada, por eso entra en violenta contradicción con la nacionalización boliviana. En Brasil está planteada la nacionalización real y verdadera de los recursos energéticos.

El carácter de la nacionalización boliviana quedará determinado por esas negociaciones. Bolivia ha establecido una regalía del 18% e impuestos directos del orden del 32%, lo que le daría ingresos de unos ochocientos millones de dólares al año. Por otro lado, YPFB recibirá, "a título gratuito", la administración de los Fondos de Capitalización, que ya participan con entre un 30 y un 50% del capital en las actuales sociedades petroleras privatizadas (Andina, Chaco, Transredes). Todo esto no alcanza para 'refundar' YPFB, porque los mayores ingresos deben cubrir la crisis fiscal y porque los Fondos de Capitalización están comprometidos al pago de jubilaciones. Bolivia tampoco puede capitalizarse significativamente a partir de los bajos volúmenes actuales de producción; para explotar sus enormes reservas que requiere poder financiar grandes inversiones. Esto lleva a la conclusión de que la vía elegida, para 'refundar' YPFB ofrece posibilidades limitadas. Todavía habrá que ver los límites adicionales que pueda imponer la 'negociación' con Lula, Kirchner y Zapatero, que ofician de agentes de las petroleras (sus voceros han dicho que no aceptarán ningún reparto por encima de 50-50). El asesor de Lula, Marco Aurelio García, le confesó a *Clarín* (9/5/06) que Brasil intentó impedir la nacionalización boliviana (¡en "diez visitas que hice a Bolivia"!) con el ofrecimiento de "infraestructuras", y de una "inversión de 6.500 millones de dólares". Este izquierdista de la Universidad de Campinas estaba 'ofreciendo' la anexión de Bolivia a Brasil. El reportaje que publica *Clarín* debe ser guardado como un testimonio invalorable de la perfidia pro-imperialista de la izquierda democratizante latinoamericana.

A la luz de los límites propios de la nacionalización y de las maniobras de los 'negociadores' argentino-brasileños, la única vía para empezar a reconstruir efectivamente una empresa estatal en las condiciones de pobreza social y fiscal de Bolivia es la expropiación de todos los pozos y activos que fueron privatizados. Se trata de yacimientos que fueron descubiertos por YPFB y que fueron privatizados a precios de remate, lo que significó una confiscación al revés, o sea del patrimonio estatal por los pulpos internacionales.

K en problemas

La explotación del gas boliviano fue hasta ahora un jolgorio para Repsol y Petrobras porque se lo vendían a sí mismas a un precio muy bajo, en perjuicio del fisco boliviano (menos de 3 dólares por millón de BTU, contra 12 dólares en el mercado internacional) para luego revenderlo en Argentina y Brasil. El reclamo de Bolivia de aumentar el precio en un 65% no solamente corta este negocio: en el caso argentino emerge como otro factor más para socavar control de precios con que Kirchner ha querido manejar la inflación. Para viabilizar el gasoducto del norte, que quieren construir Repsol y Techint, habría que aumentar los precios internos del gas en la misma proporción (y aun así serían baratos con relación a los internacionales). Si la explotación del combustible estuviera nacionalizada en Sudamérica, los costos y los beneficios se armonizarían entre los países que estuvieran adheridos a un plan de industrialización común de sus economías.

Pero la Argentina de Kirchner tiene un problema incluso mayor, porque tendrá que importar petróleo e incluso gas debido al agotamiento de las reservas comprobadas. Los Repsol y compañía han sobreexplotado los pozos que les entregó YPF y no han aportado reservas nuevas significativas. Repsol logró transformarse en una firma petrolera a partir de una empresa de estaciones de servicio, descapitalizando a Argentina, o sea invirtiendo en el exterior la mayor parte de las ganancias obtenidas en el país. Kirchner no tiene ya la salida de aprovisionarse barato desde Bolivia, a pesar de los denodados esfuerzos que hizo De Vido para convencer a los bolivianos de lo contrario. En el campo de la energía se pone claramente de manifiesto la imposibilidad de salir de la crisis argentina mediante transformaciones superficiales sobre las viejas bases.

Nacionalizaciones truchas

La nacionalización boliviana, sin embargo, tuvo el efecto adicional poderoso de poner a la luz la situación de quiebra potencial de Repsol e incluso de Petrobras. En el voraz mercado internacional no alcanza con registrar ganancias para quedar a flote, ni anotar pérdidas para quebrar. Repsol gana mucho, pero sus reservas registradas son menguantes y su rédito no es suficiente para reponerlas. Una auditoría revelaría que son menores aún que las que declara (como ya ocurrió). La calificadora Moody's la clasifica con "tendencia negativa", lo que significa que no está disponible para obtener créditos normales. No tiene condiciones de ningún tipo para resolver el problema de Argentina, que es precisamente el agotamiento de sus reservas. Los observadores opinan que podría sufrir una 'compra hostil' por parte de un competidor, debido a la caída del valor de su capital. El valor del capital de Petrobras, por su lado, ha sido afectado por las medidas tomadas en Venezuela y en Bolivia.

En estas condiciones, los círculos kirchneristas han sacado a relucir la necesidad de 'recuperar' la 'soberanía estratégica' –lo que no significa, de ningún modo, expropiar a los pulpos privados y hacerles pagar por el saqueo del país. Se trata de lo contrario: de asociar al Estado o a la 'burguesía nacional' a esos pulpos en retroceso. Se trata, no del rescate de Argentina sino de

Repsol, fundamentalmente, y de otros pulpos. Para eso se creó Enarsa: el Estado pone plata (regalando concesiones o invirtiendo en ellas) para que los pulpos petroleros sigan haciendo negocios. Una intervención de Estado de capitales 'nacionales' kirchneristas prevendría, obviamente, un intento de 'compra hostil' de Repsol por un competidor internacional. No es casual que Kirchner haya bendecido la formación de la Cámara de la Energía. Aunque quienes la integran han recibido el mote de empresarios nacionales, se trata de titulares de Fondos de Inversión que recogen dinero de inversores internacionales atraídos por la proximidad de los 'nacionales' al poder. Denunciamos estas seudo-nacionalizaciones truchas que está preparando el kirchnerismo –verdaderos negociados– y planteamos la nacionalización sin pago de Repsol y los pulpos petroleros, y la recomposición de YPF bajo gestión obrera.

Hay que destacar también que las operaciones de prensa que insinúan falsas nacionalizaciones sirven para ocultar algo que no es para nada falso, que son las concesiones que las provincias están dando al capital privado a todo trapo, en especial San Juan y Salta. El 'clima de negocios' de esta Argentina kirchnerista lo ha hecho relucir el vicepresidente del pulpo minero de La Alumbrera, al celebrar el Día de la Minería con "ganancias extraordinarias", según dijo.

Chávez

La nacionalización boliviana ha creado un escenario que refuerza las posibilidades políticas de una campaña por la nacionalización de los recursos estratégicos en América Latina. Esta nacionalización sería un poderoso impulso a una unidad política del continente y a una planificación de un desarrollo independiente. En Perú está claramente planteada la nacionalización del petróleo, cuya explotación está provocando, al igual que la minería, una calamidad ambiental. En México, la empresa estatal PeMex se encuentra semiquebrada, como consecuencia del desquicio de su gestión capitalista y del enriquecimiento que habilita a burócratas y contratistas. En estas condiciones, una nacionalización real implica el reemplazo de la gestión capitalista por la gestión obrera y un plan económico único independiente del capital.

Todos los observadores coinciden en que Venezuela aportó con asesores y respaldo político a la nacionalización resuelta por Bolivia. El diseño final de la nacionalización boliviana procura emparentarse al modelo que está vigente en Venezuela, o sea una asociación pública-privada con mayoría estatal. El problema es que YPFB no existe, mientras PDVSA es una empresa establecida con enormes recursos. Otro problema es que Chávez impulsa una asociación petrolera latinoamericana con Lula y Kirchner –que quieren poner límites a la nacionalización boliviana compatibles con los intereses de Repsol y Petrobras. Si Chávez defiende consecuentemente la nacionalización, incluso parcial, que ha habido en Bolivia, no solamente deberá romper con Lula y con Kirchner –deberá, además, poner a PDVSA al servicio del desarrollo de YPFB, lo que lo llevaría a un choque sin salida con todos sus socios petroleros privados en Venezuela.

Estamos frente a una crisis de conjunto en América Latina, aunque el eje sea la energía. Una crisis eminentemente internacional, que provocará choques sociales y políticos de dimensiones enormes. En estas condiciones planteamos una campaña por la nacionalización sin indemnización de los recursos estratégicos en Argentina y toda América Latina, y por la unidad política sobre bases socialistas.

La nacionalización sin pago no constituye un planteo arbitrario o caprichoso. La restitución del enorme patrimonio acumulado sobre la base de la explotación y el sacrificio de las masas no puede ser rescatado por medio de un mayor sacrificio aún. La nacionalización no tiene por objeto trasladar el capital de una rama de la producción (la nacionalizada) a otra (sea cual fuere) sino servir a una reestructuración social sobre nuevas bases. Por eso es la única que puede ofrecer una nueva perspectiva histórica.

***Prensa Obrera*, 11 de mayo de 2006**

Abstención y pasividad

Por la Comisión Internacional del Partido Obrero



La izquierda boliviana, de una manera general, llamó al voto en blanco y a la abstención, sobre la base de caracterizar a la Constituyente como "impotente" o "farsa". Mejor hubiera sido que dijeran que no reunían la capacidad para participar de las elecciones. Las limitaciones históricas de la Constituyente carecen de toda importancia a la hora de decidir la concurrencia o el boicot. Lo que importa es la actitud de las masas, sus ilusiones y expectativas. Se trata de darles una orientación revolucionaria frente a una tentativa no revolucionaria, pero no de darles la espalda a ellas. La altísima votación registrada el último domingo (en un país históricamente refractario a las elecciones burguesas) muestra que, otra vez, los explotados le dieron la espalda a los abstencionistas y viceversa.

Contra esta política abstencionista –no de las elecciones sino del proceso político de las masas– el Partido Obrero sostuvo la necesidad de intervenir en la Constituyente. "Explotar las posibilidades de una presentación electoral y de una eventual representación en la Constituyente, por pequeña sea, es parte de la propuesta de conjunto de orientar las presiones populares sobre la Constituyente en una perspectiva revolucionaria", decía *El Obrero Internacional* N° 6, de marzo de 2006.

Ahora, con los resultados en la mano, el periodista Miguel Lora escribe que "los 'ingenuos' que esperaban que la Constituyente sea un 'espacio' para que los explotados planteen sus reivindicaciones se quedaron con los crespos hechos porque hay más posibilidades de que la Asamblea esté al servicio de los poderosos, y con campesinos de adorno (...) El trotskismo opina que la Constituyente y el referendo fueron consignas levantadas desde las filas del 'reformismo' como medidas para cortar el avance de las masas en la calle. Por esa su razón de ser (...) es de suponer que la Constituyente no será la instancia que resuelva los problemas sociales del país..." (*Bolpress.com*, 3/7/06).

El planteo de Lora importa un retroceso teórico de doscientos años sobre los procesos nacionales. Para los marxistas, lo que determina la intervención en la lucha parlamentaria –incluida la lucha en los parlamentos constituyentes– no es la capacidad de los parlamentos para "resolver los problemas sociales". Si fuera por eso, los marxistas no participarían en ninguna elección y en ningún parlamento. Lo que debe importar es si esas elecciones, incluso cuando se trata de "desvíos" políticos contra la movilización de las masas, suscitan la atención de la población explotada. Los revolucionarios no pueden saltarse nunca las etapas de la conciencia de los explotados.

No solamente los trabajadores son 'desviados' hacia las instancias parlamentarias, por parte de la burguesía; también ésta es 'desviada' al parlamentarismo por la presión revolucionaria de las masas. De otro modo, la oligarquía boliviana hubiera seguido gobernando al viejo estilo. Los 'desvíos' son imposiciones objetivas a todas las clases sociales; el partido revolucionario debe orientar a las masas a superar estos 'desvíos' en función de sus intereses históricos –no, como hace Lora, perorando sobre la incapacidad del parlamentarismo, pero evitando hablar de la incapacidad, más seria por supuesto, del lorismo. Lora desconoce que la obligación de los revolucionarios es intervenir activamente en estos procesos políticos 'realmente' desviacionistas, oponiendo las reivindicaciones de las masas a las instituciones parlamentarias. "En oposición a la expectativa profesoral de que las masas se 'eleven' al 'programa', es necesaria una política que permita participar en todas las fases de la lucha y desarrollar todos los estadios que recorre la conciencia de las masas" (*El Obrero Internacional* N° 6, marzo de 2006). Esta es la política que defiende el Partido Obrero, recogiendo una enseñanza de doscientos años.

***Prensa Obrera*, 6 de julio de 2006**

Derrota política de Evo Morales y el MAS

Por la Comisión Internacional del Partido Obrero



Evo Morales sufrió una seria derrota política en las elecciones celebradas en Bolivia el último fin de semana. Con el 53% de los votos para la Constituyente (el mismo porcentaje que en la presidencial de diciembre) el MAS no obtuvo los dos tercios necesarios (170 constituyentes) para imponer reformas constitucionales sin recurrir a acuerdos con la derecha. O sea que ésta consiguió el derecho al veto. La exigencia de una mayoría calificada para reformar la Constitución fue el resultado de un acuerdo de Evo Morales con la derecha. Evo Morales ha perdido de este modo la capacidad para usar la Constituyente como una herramienta para contener las presiones de las masas populares.

En el referendo autonómico, el golpe contra el gobierno fue aun mayor, porque el "sí" a las autonomías, impulsado por la derecha y las oligarquías regionales, se impuso en los departamentos que la reclamaron, del oriente y el sur (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), en el marco también de un acuerdo previo con Evo Morales. En estas condiciones, el voto mayoritario contra las autonomías en el conjunto del país ha abierto una crisis política cuando la Constituyente aún no ha tenido tiempo de reunirse. Si ésta desconociera la voluntad de los departamentos favorables al "sí", toda la crisis boliviana volvería al punto de partida previo a la llegada de Morales a la presidencia. Lo que deja más claramente en evidencia esta crisis, es la espectacular voltereta de Evo Morales, que defendió el "sí" a las autonomías durante dos meses, luego de haberla pactado con la oligarquía oriental, para pasar en forma brusca a reclamar el rechazo a las autonomías sólo dos semanas antes de los comicios.

Anomalías

La Constituyente boliviana nace surcada por violentas anomalías. Convocada para "refundar Bolivia" fue concretada por medio de un acuerdo con la derecha, que representa al imperialismo, tanto en lo relativo a su representatividad (mayoría de dos tercios), como a una definición de las autonomías con antelación a la Constituyente.

"El pacto que alumbra la convocatoria de la Constituyente, entre el gobierno y el MAS, de un lado, y la oligarquía cruceña y el derechista Podemos, del otro (...) –decía un artículo de Altamira en *El Obrero Internacional* N° 6 (marzo de 2006)–, da lugar a (...) una Constituyente condicionada (...) el sistema electoral aprobado en el pacto, que desecha el distrito nacional único y establece un sistema mixto que divide a la elección de la representación popular en 70 distritos y nueve departamentos; en los distritos se eligen tres representantes, dos por la mayoría y uno por la minoría, lo cual elimina la representación proporcional y por lo tanto la representación de una gran parte de la ciudadanía y de numerosas tendencias políticas; en los departamentos, a la mayoría se le asignan dos bancas de cinco y una a las tres minorías siguientes. Este 'sistema' asegura a la derecha una representación mínima del 30%, o sea que le otorga una sobre-representación, que la deja a sólo tres puntos del número de votos necesario (un tercio) para bloquear las reformas que no le convengan".

Una anomalía todavía mayor presenta el referendo autonómico. La autonomía es un reclamo de la oligarquía, para ejercer una soberanía propia sobre los recursos petroleros de la región y para enfrentar la movilización de los trabajadores sin tierra contra los grandes latifundios y contra la expulsión de los campesinos de sus tierras. El pacto convocó a los referendos autonómicos con carácter vinculante, es decir, que es de cumplimiento obligatorio por la Constituyente. Sin embargo, el rechazo a las autonomías en la mayoría de los departamentos crea una situación constitucional incoherente –donde una parte del Estado tiene un carácter centralista y el otro un carácter federal o parcialmente federal.

De nuevo, hace tres meses, Altamira anticipaba en *El Obrero Internacional* que "El pacto le retira a la Constituyente y al conjunto de la nación boliviana la atribución de decidir sobre las autonomías departamentales, que serán resueltas por un referendo independiente de cada departamento, con carácter de vinculante para los constituyentes en su conjunto. Se da así la contradicción, que los pactistas encuentran totalmente tolerable, de que la Asamblea Constitucional se convoque en el marco de la Constitución política vigente del Estado, que tiene un carácter unitario, mientras el referendo tiene lugar violentando esa constitución política, pues otorga una soberanía constitucional a los

departamentos, que le retira a la ciudadanía tomada en su conjunto". Evo Morales creyó que superaba esta contradicción con el llamado a apoyar las autonomías en todo el país. Sin embargo, sobre el filo de las elecciones le quedó en claro que había otorgado a la oligarquía una concesión que serruchaba seriamente su capacidad autónoma de gobierno y por lo tanto su capacidad para operar frente a la presión popular. Con el llamado a votar por el "no", a último momento, dejó abiertas todas las contradicciones, que ahora deberán reconciliarse en el marco de una Constituyente donde la derecha y los autonomistas tienen un poder de veto.

La posibilidad de que se le otorgue la autonomía a los departamentos que votaron por el "sí", con independencia de lo decidido por los departamentos que optaron por el "no", lo ha planteado abiertamente el jefe departamental de Santa Cruz de la Sierra. Pero esto es algo que va en completa contradicción con la existencia de una constitución nacional (que debe asegurar la coherencia institucional entre los diferentes departamentos del país). La Constituyente deberá reglamentar la autonomía, incluso para los que votaron en contra de ella, o deberá mantener el carácter unitario del Estado, lo que supone un choque frontal con la oligarquía y los agentes del capital financiero.

Contradicciones

Los resultados le otorgaron a la derecha el poder de veto que ya estaba previsto, insistimos, en el acuerdo de Morales con la oligarquía, que viabilizó la convocatoria de la Constituyente, por parte del Congreso boliviano. Pero la capitulación ante la derecha priva a Evo Morales de la autonomía política necesaria para contener las presiones de las masas que lo llevaron al gobierno.

Los comentaristas coinciden en que, de acuerdo a estos resultados, el MAS deberá llegar a acuerdos con la derecha en la Constituyente. Pero al pactar con la derecha y la oligarquía –es decir, al verse obligado a retroceder, incluso parcialmente, de su propio programa limitado a nacionalizaciones capitalistas y a la distribución de las tierras fiscales sin afectar el latifundio. Morales pierde una autonomía política absolutamente necesaria para cualquier régimen que quiera gobernar a Bolivia en las condiciones actuales. Desde mucho antes de su llegada al poder, el control del movimiento de las masas fue la principal preocupación de Evo Morales. Pero lo que le permitía jugar ese papel de control político –vital para la burguesía, por ejemplo, en las jornadas que provocaron la caída de Mesa y el desvío electoral– era su diferenciación política con los "neoliberales". La necesidad de pactar con ellos en la Constituyente va a diluir esa diferenciación, objetivamente, en términos de poder, no solamente a los ojos de los propios explotados.

El reconocimiento, por parte del mismo Evo Morales y del MAS, de la importancia de conservar una autonomía política real, frente a la oligarquía, de un lado, y las masas, del otro, salta a la vista en el giro que dio sobre la cuestión autonómica, cuando a último momento trató de dar marcha atrás, parcialmente, en su pacto constitucional con la oligarquía, llamando a votar por el "no" a las autonomías, dos semanas antes de las elecciones. Inicialmente, Evo no sólo concertó con la derecha y la oligarquía la convocatoria de los referendos; además llamó a votar por "sí" a la autonomía. Lo hizo ante el crecimiento del voto popular por el "no" en las bases sociales del MAS. Pero las contradicciones políticas son tan patentes que el vicepresidente de Morales se declaró "neutral".

Para viabilizar un pacto con la derecha en la Constituyente son necesarias, sin embargo, determinadas condiciones políticas. La primera, un acuerdo internacional que unifique a los gobiernos latinoamericanos en el apoyo a este pacto y, en estas condiciones, a Evo Morales, que sigue siendo insustituible para el conjunto de la clase dominante y para su Estado. Esto significa el apoyo de los Repsol y los Petrobras al conjunto del actual proceso político. La segunda condición es que Evo Morales consiga imponer un reflujo a las masas, para lo cual usará y abusará del argumento de que la 'gobernabilidad' depende de los acuerdos con la oposición, llevándolos a aceptar pasivamente las limitaciones que la derecha en la Constituyente pondrá a cada una de sus reivindicaciones.

La Constituyente está surcada de contradicciones. ¿Qué va a hacer con la autonomía? ¿Dársela a los departamentos que la rechazan o negársela a los que la reclaman? ¿Dársela a unos y no a otros? "El presidente se adelantó en garantizar el respeto a la decisión de los cuatro departamentos que ingresarán en los regímenes autonómicos que definirá la Constituyente" (*La Razón*, de La Paz, 3/7/06). En la cuestión de las autonomías, la crisis es completa.

Así, la Constituyente, un instrumento, por definición, de la unidad nacional, ha potenciado todas las contradicciones históricas de Bolivia.

Programa

El conjunto de estas contradicciones plantea, como otra alternativa, la posibilidad de la disolución de la Constituyente, por una acción de gobierno o por una movilización popular. En lugar de cumplir el objetivo con el que fue convocada –cerrar el proceso político abierto con la insurrección que llevó a la caída de Sánchez de Lozada– la Constituyente acabaría como víctima de una crisis revolucionaria.

El conjunto de la crisis plantea, no ignorar una Constituyente que fue electa por una participación sin precedentes, sino orientar de un modo revolucionario las presiones populares hacia la Constituyente. Sobre la base de las reivindicaciones por la nacionalización sin pago y bajo control obrero de todos los recursos, incluido El Mutún, la expropiación de los latifundios y la solución de los problemas inmediatos del trabajo y el salario, habrá que aprovechar la impasse del proceso constitucional para formar asambleas populares, comités agrarios, comités fabriles, capaces de convocar con sus propios métodos a una Constituyente que refunde revolucionariamente a Bolivia y sirva al conjunto de la revolución latinoamericana.

***Prensa Obrera*, 6 de julio de 2006**

La cuestión del voto en el referendo autonómico*

Por Luis Oviedo

A escondidas (un recuadrito), el PTS informó que había llamado a abstenerse en el referendo autonómico celebrado en Bolivia el pasado 2 de julio. La oligarquía llamaba a votar "sí" para reforzar su poder 'autonómico', para echar de la tierra a los campesinos y pactar con los pulpos petro-gasíferos. El PTS se abstuvo de una lucha contra la oligarquía.

El PTS sigue defendiendo su posición capituladora ante la oligarquía. Arguye que había que abstenerse porque "el gobierno pactó el antidemocrático referendo con la oligarquía". Es una excusa. Además del referendo, el gobierno también 'pactó' la convocatoria a la Constituyente, el sistema de asignación de bancas y el requisito que la reforma constitucional exige los dos tercios de lo votos (lo cual le otorga a la oligarquía un derecho de veto). Este 'pacto', sin embargo, no le impidió al PTS intentar (sin éxito) presentar una lista a la Constituyente. ¿En qué quedamos? Alegan un 'pacto' para negarse a votar "no" en el referendo por las autonomías, pero se olvidan del mismo 'pacto' cuando se trata de participar de la elección constitucional. Son unos chapuceros.

Pero la chapucería se transforma en estafa cuando el PTS le esconde a sus lectores que el MAS y la oligarquía no sólo pactaron el referendo (y la propia Constituyente), sino que se pusieron de acuerdo para votar "sí" en el referendo. "El otro aspecto tramposo del pacto –decía Altamira en *El Obrero Internacional* N° 6, marzo de 2006–, es que los referendos departamentales, 'pre-existentes' a la futura constitución nacional, no tienen un carácter confrontativo, pues la pregunta que se pone a la población de los departamentos es apoyada igualmente por el Podemos y por el MAS (...) Evo Morales ha hecho un compromiso (...) todavía inestable [ojo con esto, lo decíamos ¡en marzo!], con la derecha parlamentaria y la oligarquía, a expensas del campesino sin tierra". El PTS habla de un acuerdo entre el MAS y la oligarquía para convocar el referendo pero esconde el acuerdo de esos mismos actores de votar, además, por el "sí". En efecto, durante dos meses de campaña el MAS llamó a votar por el "sí". Sólo se pasó al "no" cuando faltaban quince días para los comicios, pero incluso este cambio no fue apoyado por el vicepresidente, García Linera. La abstención del PTS contra el referendo, con el argumento de que estuvo 'pactado', oculta la negativa del PTS a votar "no" contra el mismo pacto a favor del "sí" en ese mismo referendo.

Cuando Evo Morales anunció su voto por el "sí", su posición fue rechazada por el Estado Mayor del Pueblo de Santa Cruz, que es del MAS, que llamó a votar "no". Se trató de la primera delimitación política (parcial) de los explotados con el gobierno de Evo Morales, incluso a través de una organización ligada al MAS. Con la abstención, el PTS no se delimita del gobierno sino de las masas y de las organizaciones populares que llamaban a votar "no" contra la oligarquía y contra el acuerdo Evo-Podemos. Es una abstención a favor de la oligarquía y de confrontación con una medida de resistencia de las masas.

El crecimiento de esta oposición popular a las "autonomías" oligárquicas obligó al MAS, apenas quince días antes del referendo, a cambiar de campo. No todo el MAS, insistimos: el vicepresidente García Linera se declaró "neutral" entre el "sí" y el "no". Como el PTS...

Perdido en el laberinto de sus propias contradicciones, el PTS recurre a un último "argumento": el PO, dice, defiende la "teoría de los campos".

No tenemos ninguna teoría de los campos, simplemente sabemos ubicarnos en la lucha de clases. En este caso estamos con el "no" de los campesinos sin tierra y de aquellos que son avasallados por la oligarquía cruceña, contra el "sí" de estos oligarcas. No nos delimitamos a partir de figuras jurídicas como los referendos o cualquier otra cláusula constitucional, sino de los antagonismos de las clases en presencia. Somos un partido, no una secta dedicada a la intriga 'ideológica' y a la no tan ideológica.

Si hay alguien que sabe de "campos" es, precisamente, el propio PTS. En oportunidad de la primera guerra del Golfo, llamó a apoyar a Saddam Hussein en la perspectiva de que se transformaría en la dirección de la revolución proletaria en Medio Oriente (*Estrategia Internacional,* Boletín Nº 1, febrero de 1991) (ver también *Prensa Obrera,* 22 de marzo de 1991).

Con Hussein, sí. Con Evo Morales, no. Un día, el PTS cae en el oportunismo nacionalista, es decir en la subordinación a la burguesía nacional. Al día siguiente, cae en el oportunismo liberal, es decir en la negativa a luchar contra el imperialismo y la oligarquía, alegando que no existen los 'campos'. Aquí no hay posición, ni política, ni programa.

En la Constituyente y en el país la cuestión autonómica se ha transformado en un factor de crisis, que inquieta a las grandes masas. El "no" en el referendo reciente es un punto de apoyo para luchar contra las pretensiones de 'superpoderes' de la oligarquía boliviana y del imperialismo yanqui (incluso de los brasileños y de Lula). Esto no es solamente lo concreto; es decisivo. La posición del PTS es una guarangada contrarrevolucionaria.

***Prensa Obrera,* 20 de julio de 2006**

(*) Publicado originalmente con el título "El PTS estafa a sus lectores".

Bolivia: Las nacionalizaciones y la Constituyente en la picota

Por Jorge Altamira



Hace tres semanas, los voceros más destacados del gobierno boliviano salieron a informar que la nacionalización de los hidrocarburos decretada hace cinco meses se encontraba estancada: de un lado, no habían avanzado las auditorías para establecer el valor real de las inversiones realizadas por las compañías; del otro lado, el gobierno no había reunido los fondos para pagar las acciones que le darían la mayoría del capital de las empresas. En ese mismo momento se conoció que Bolivia estaba gestionando un préstamo del BID para financiar la nacionalización de los hidrocarburos.

La nacionalización encarada por Evo Morales, ajustada a los términos de la Constitución del Estado y con un respeto a rajatablas de la propiedad privada (aunque fuera una propiedad privada que se había establecido como consecuencia del saqueo de los activos y reservas de YPFB); esta nacionalización se estaba derrumbando en sus propios términos. El Estado boliviano no tenía la capacidad financiera ni de organización para llevar a término su propia política. Esto lo habíamos ya advertido desde *Prensa Obrera* y desde *El Obrero Internacional* desde el primer momento: la independencia nacional de Bolivia pasa por la organización del Estado sobre nuevas bases, o sea por la vía de la revolución social, no al revés, toda vez que la nacionalización de los recursos estratégicos solamente es posible por medio de la movilización y el control y gestión de los obreros y campesinos, así como recurriendo a medidas expropiatorias. La burocracia del capitalismo boliviano no tiene condiciones ni recursos para plantarse ante los monopolios internacionales. En los mismos días en que el gobierno advertía a la opinión pública de sus propias limitaciones, se veía obligado a renunciar el presidente de YPFB, acusado de una exportación ilegal de crudo por medio de una empresa privada.

Esta situación de impasse refleja la presión descomunal que ejercen sobre Bolivia los capitales internacionales y los Estados extranjeros que los respaldan, en especial Brasil, España y, ¿por qué no?, Argentina. En defensa de Petrobras, cuya mayoría accionaria se encuentra en manos de fondos internacionales, el gobierno de Lula pretende mantener vigente un contrato que le asegura el abastecimiento de gas por dos décadas a precios de regalo. España, por su lado, reclama fuertes indemnizaciones para Repsol, en un intento de trabar la nacionalización. Kirchner, por su lado, firmó un acuerdo con Morales por seis meses solamente, apremiado por la crisis energética de Argentina, pero con la intención de patear el tablero cuando se venza el plazo, esto según evolucionen las negociaciones de Bolivia con España y Brasil. Además de su socia de viejos tiempos, Repsol, Kirchner tam-

bién defiende otros intereses 'argentinos', los del aventurero Bulgheroni, que regentea Pan American Energy.

Lo que sorprendió en esta crisis fue la abstención completa de Venezuela, en particular cuando se tiene en cuenta la locuacidad de su Presidente y su respetable tendencia a meterse en cuanto conflicto se le ponga a tiro. Venezuela tiene los recursos y la organización necesarios para ayudar a Bolivia en sus primeros pasos nacionalistas. El proyecto de un Petrosur se evaporaba cuando era más necesario que nunca. Pero las explicaciones huelgan, pues Venezuela tiene excelentes relaciones y por sobre todo compromisos con Repsol y con Petrobras, como asimismo con Lula, Zapatero y Kirchner. La asociación al Mercosur y los contratos con los pulpos petroleros en el Orinoco no pueden ser arriesgados por una defensa de Bolivia. Las limitaciones de Petrosur quedaron al descubierto mucho antes que la más escéptica de las previsiones. Evo Morales tampoco presionó mucho, primero porque no le hubiera servido probablemente de nada y, segundo, porque tiene otra preocupación, que es salvar las preferencias arancelarias que le otorga Estados Unidos a las exportaciones textiles de Bolivia.

A nadie se le escapa que el desmoronamiento de las nacionalizaciones de Evo Morales sería el fin de su gobierno y podría desencadenar una revolución social en regla. Por eso el imperialismo aprieta pero no ahoga; no tiene un recambio. Los propios capitales extranjeros están abocados ahora a salvar las nacionalizaciones bolivianas, para lo cual han comenzado a pagar los nuevos impuestos establecidos por ley. A cambio pretenderán imponer un acuerdo de largo plazo que les garantice el control efectivo de toda la cadena del proceso productivo –por ejemplo, mediante designación de ministros y funcionarios de común acuerdo o estableciendo medidas regulatorias que les sean convenientes. O en el caso de Brasil, un acuerdo conveniente de precios y la salvaguarda de los intereses de Petrobras. Si el Estado pretende una tajada mayor de la renta petrolera, las petroleras pretenden, a cambio, una tajada mayor del Estado.

La inauguración de la Asamblea Constituyente agudizó aún más la enorme crisis desatada por el derrumbe de la nacionalización petrolera. Es claro que aunque la derecha es minoría en la Convención, venía alzada por el crecimiento de la conspiración de los pulpos. Para Evo Morales, por el contrario, es el último recurso para asentar su gobierno. Por eso desconoció los acuerdos que establecían que la reforma de la Constitución exigía una mayoría de dos tercios, que no tiene, y amenazó con la disolución del Parlamento y aún de la Justicia, a partir de declarar a la Constituyente originaria y soberana, o sea que, por un lado, desconoce cualquier institución política anterior a ella misma y, por el otro, se arroga la totalidad del poder político. El conjunto de la oposición se unió a los comités cívicos de las zonas petroleras, que responden a los pulpos y a los latifundistas, para declarar un paro general, que podría derivar en una huelga indefinida. Al rescate de la Constituyente salió el vice de Evo, García Linera, que opera como ala derecha del gobierno, con la propuesta de que la futura Constitución deba ser aprobada por un referendo popular –lo que diluye la posibilidad de una disolución de las actuales instituciones hasta después de ese referendo, y, de nuevo, patea la pelota para afuera.

Tal como lo habíamos previsto en artículos precedentes, la cuestión petrolera y la de la refundación constitucional han suscitado crisis de conjunto, potencialmente revolucionarias, que ningún partido de izquierda está en condiciones de explotar, esto debido a una 'rigurosa' política de abstencionismo y neutralidad frente a la crisis política y a los acontecimientos principales. Mientras la izquierda se abstuvo en el referendo sobre las autonomías regionales, la huelga de los derechistas comités cívicos encierra potencialmente una perspectiva de secesión estatal, lo que transforma al neutralismo en contrarrevolución.

La crisis político-constitucional ha llegado a tal extremo, que el gobierno está considerando la posibilidad de trasladar las sesiones a otra ciudad, debido a las agresiones que reciben los campesinos que se movilizan a Sucre, donde tienen lugar. El mismo gobierno y el MAS están pergeñando un proyecto constitucional campesinista, que daría rango constitucional a reglas vigentes en las comunidades agrarias. La utopía del 'capitalismo andino' se cristalizaría de este modo en un código, lo cual en la práctica desmembraría jurídicamente a Bolivia, dado que sólo podría ser impuesto como norma nacional si tiene éxito una sangrienta guerra contra las ciudades. La pequeña burguesía que comparte el comando del MAS es incapaz, por una parte, de enfrentarse a los métodos de control social que ejercen las jerarquías agrarias sobre las masas campesinas y, de otra parte, son también incapaces de movilizar los métodos asamblearios campesinos para unir a sus masas bajo la dirección de la clase obrera socialista.

Los Estados capitalistas, en especial los de América Latina, tienen los medios políticos para cerrar compromisos entre las clases que bloqueen la tendencia de Bolivia a la guerra civil; aunque las contradicciones sociales son explosivas, las clases sociales no han madurado para un enfrentamiento definitivo. Por el contrario, la tendencia sigue siendo a la prevención. El gobierno intuye esta situación y en sus llamados políticos apela cada vez más a las Fuerzas Armadas, para reforzar su propio poder de arbitraje, creyendo que los uniformados se guían por los cantos de las sirenas, incluso en un país sin salida al mar. El proyecto político que el gobierno tiene en la cabeza es un régimen bonapartista, o sea de poder personal, a partir de una Asamblea Constituyente y de una Constitución que refuerce el peso del campesinado. Pero este régimen necesitaría, por un lado, recursos financieros para subvenir a sus necesidades de conjunto, o sea arreglar con los monopolios petroleros. Por otro lado, estaría obligado a satisfacer, aunque sea parcialmente, los reclamos de tierras de los campesinos.

El gobierno de Evo Morales, no importa la magnitud de sus limitaciones, protagoniza un período de transición histórica, esto porque es el resultado deformado de un conjunto de revoluciones e insurrecciones que hacen frente a la descomposición de las modalidades de la explotación capitalista, pero sin la capacidad de convertirse en el punto de partida de una nueva experiencia histórica. Esta etapa de transición ha traído a la superficie grandes elementos novedosos, el principal de los cuales es la tentativa de asentar un sistema político en la regimentación de la masa campesina, para oponerla al mismo tiempo a las presiones de la oligarquía

y el imperialismo, de un lado, y a las presiones del proletariado e incluso del semi-proletariado urbano, que se diferencia del campesino, del otro.

Con referencia a los problemas inmediatos planteados por esta transición, creemos necesario, en primer lugar, aprovechar el empantanamiento de la nacionalización burguesa para plantear la expropiación sin pago de los pulpos y el control obrero, no solamente por medio de la agitación y la acción directa, sino también en el terreno constitucional. Con respecto a la oposición de la derecha y de los terratenientes, de una parte, a que la Constituyente sea soberana y originaria, y a la tentativa del gobierno, de otra parte, de regimentar a la Constituyente y usarla para implantar un régimen bonapartista; contra un planteo y el otro, es necesario avanzar en un programa de expropiación de la oligarquía y de reparto de la tierra por parte de comités campesinos; organizar comités agrarios y urbanos que se movilicen por este programa; reclamar la satisfacción de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores con respecto al salario, la educación y el trabajo, tanto al gobierno como a la Constituyente; armar a los trabajadores para reprimir las tentativas golpistas o los *lock-outs* de los grandes capitales y de los terratenientes. El carácter del proceso político actual no está determinado por el reglamento que se le fije o haya votado para la Constituyente, sino por la confrontación general de las clases en conflicto y por la orientación que establezca la parte políticamente más avanzada del proletariado y de la juventud.

Prensa Obrera, 7 de septiembre de 2006



www.po.org.ar
publicaciones@po.org.ar

La Revolucion Boliviana

2003-2006



Ediciones Prensa Obrera

PO

Septiembre 2006